



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Escuela de Postgrado

Maestría en derecho con mención en Derecho Constitucional y Procesal

Constitucional

**Derecho de reunión privada, constitucionalidad formal y material del Decreto Supremo n°
044-2020-pcm y normas complementarias.**

TESIS

**Presentada para optar el grado académico de maestro en Derecho con mención en Derecho
Constitucional y Procesal Constitucional.**

AUTOR

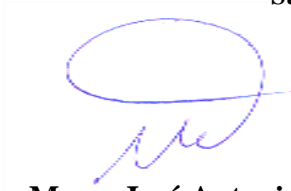
Díaz Muro, José Antonio

ASESOR

Dr. Alarcón Requejo, Gilmer

LAMBAYEQUE, 2024

**TESIS DENOMINADA: Derecho de reunión privada, constitucionalidad formal y material del Decreto
Supremo n° 044-2020-pcm y normas complementarias.**



Díaz Muro, José Antonio

(AUTOR)



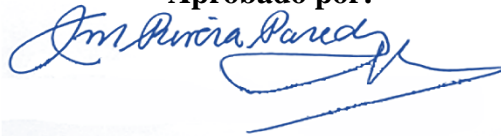
Dr. Alarcón Requejo, Gilmer

(ASESOR)

Presentado a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado
Académico de:

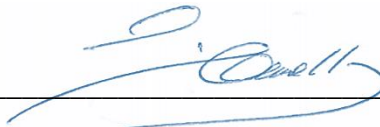
Maestro en derecho con mención en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Aprobado por:



Mg. Rivera Paredes, Juan Manuel

Presidente del jurado



Mg. Cevallos de Barrenechea, Carlos

Secretario del jurado



Dr. Yzquierdo Hernandez, Leopoldo

Vocal del jurado

Lambayeque, 11 de octubre de 2024

DEDICATORIA

A mi madre e hijos, por su apoyo constante e incondicional,
por alentarme y ser mi
motivación para concluir mi presente trabajo.

AGRADECIMIENTO

A Dios, a mi querida madre por ser mi
guía y ejemplo, de ser constante y perseverar
en los objetivos y, agradezco al Dr.
Gilmer Alarcón Requejo por haberme guiado y
asesorado en el desarrollo de la presente tesis.

INDICE

DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
TABLAS Y FIGURAS	VIII
RESUMEN	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN	11
Capítulo I: Análisis del Objeto de Estudio	15
1.1. Planteamiento del Problema	15
1.2. Formulación del Problema de Estudio.....	16
1.3. Justificación e Importancia del Estudio	16
1.4. Objetivos.....	17
1.4.1. <i>Objetivo general</i>	17
1.4.2. <i>Objetivos específicos</i>	17
1.5. Hipótesis	18
1.6. Diseño Metodológico	18
1.6.1. <i>Tipo de Investigación</i>	18
1.6.2. <i>Métodos</i>	19
1.6.3. <i>Técnicas</i>	20
Capítulo II: Marco Teórico	22

2.1.	Antecedentes Históricos	22
2.1.1.	Antecedentes Nacionales.....	22
2.1.2.	Antecedentes Internacionales	24
2.2.	Bases teóricas	27
2.2.1.	Estado Constitucional de Derecho	27
2.2.2.	Las limitaciones a los derechos constitucionales	34
2.2.3.	Derecho de reunión	44
2.2.4.	El Estado de Excepción.....	49
2.2.5.	Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Peruano	52
2.2.6.	Control de Constitucionalidad.....	58
2.3.	Manual de Redacción de Decretos Legislativos.....	68
2.3.1.	Objetivos del Manual	68
2.3.2.	Contenido del Manual	69
2.3.3.	Importancia del Manual de Técnica Legislativa	69
2.4.	Tipos de Control de Constitucionalidad	70
2.4.1.	Contenido formal.....	71
2.4.2.	Contenido material	75
2.5.	Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y Normas Complementarias.....	80
2.5.1.	Contexto y Antecedentes del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM	80
2.5.2.	Disposiciones Clave del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM	81

2.5.3.	Normas complementarias y desarrollos posteriores.....	84
2.5.4.	Impacto en los Derechos Constitucionales y el Estado Constitucional de Derecho	85
2.5.5.	Implicaciones Legales y Sociales.....	90
Capítulo III: Análisis de Datos		96
3.1.	Casuística.....	96
3.2.	Evolución del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM.....	97
3.3.	Lista de Cotejo N.º 01.....	100
3.4.	Justificación y criterio analítico.....	103
3.5.	Resultados del análisis.....	112
Capítulo IV: Propuesta de Intervención.....		120
4.1.	Criterios materiales para mejorar el razonamiento en la elaboración de los decretos supremos sobre estado de emergencia sanitaria.	120
4.2.	Criterios formales para mejorar el razonamiento en la elaboración de los decretos supremos sobre estado de emergencia sanitaria.	125
4.3.	Borrador o bosquejo de un Decreto Supremo sobre estado de Emergencia Sanitaria tomando en cuenta los criterios formales y materiales para su elaboración.....	128
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones		133
5.1.	Conclusiones.....	133
5.2.	Recomendaciones	134
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		136

TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

Tabla 1: *Cuadro comparativo y evolutivo del Decreto Supremo N.º 044-2020*86

Tabla 2: *Análisis Constitucional del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM: Evaluación de Conformidad con la Constitución Política del Perú*.....101

Tabla 3: *Ponderación Constitucional: Análisis Crítico de las Preguntas Predominantes con Respuestas Desfavorable*102

Tabla 4: *Deficiencias Constitucionales en el Decreto Supremo: Análisis de Preguntas con Menor Peso*.....104

Tabla 5: *Análisis Constitucional del Decreto Supremo: Distribución de Respuestas Negativas*.....106

FIGURAS

Figura 1: *Evaluación Constitucional del DS 044-2020*.....101

Figura 2: *Análisis porcentual de preguntas predominantes con respuestas desfavorables*.....103

Figura 3: *Análisis porcentual del Impacto Constitucional de las Preguntas con Menor Peso en el Decreto*.....104

Figura 4: *Porcentaje de Respuestas Negativas en el Análisis Constitucional del Decreto Supremo*.....106

ANEXO 01

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD

YO, GILMER ALARCÓN REQUEJO, usuario revisor del documento titulado: **“DERECHO DE REUNIÓN PRIVADO, CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL DEL DECRETO SUPREMO No 044-2020-PCM Y NORMAS COMPLEMENTARIAS”**

Cuyo autor es, **José Antonio Díaz Muro**, Identificado con documento de identidad 41384897; declaro que la evaluación realizada por el Programa informático ha arrojado un porcentaje de similitud de 18%, verificable en el Resumen de Reporte automatizado de similitudes que se acompaña.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y referencias establecidas en por protocolos respectivos.

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso.

Lambayeque, 09 de agosto de 2024.



Prof. Dr. Gilmer Alarcón Requejo

ASESOR DE TESIS - DNI: 1643684

Departamento de Derecho Público – FDCP

Se adjunta:

“Resumen del Reporte automatizado de similitudes” firmado

“Recibo Digital” firmado

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

010

Siendo las 11.30 horas del día Nueve de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro

, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado, designados mediante Resolución N° 1178-2022 de fecha 04/11/2022, conformado por:

Mg. Juan Manuel Rivera Paredes PRESIDENTE (A)

Mg. Carlos Manuel Arsenio Covales de Barreneder SECRETARIO (A)

Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández VOCAL

Dr. Gilmer Alarcón Requejo ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada "Derecho de reunión Privada, Constitucionalidad formal y material del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas Complementarias"

presentado por el (la) Tesista José Antonio Díaz Muir

sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 614-2024 de fecha 27 de Septiembre del 2024.

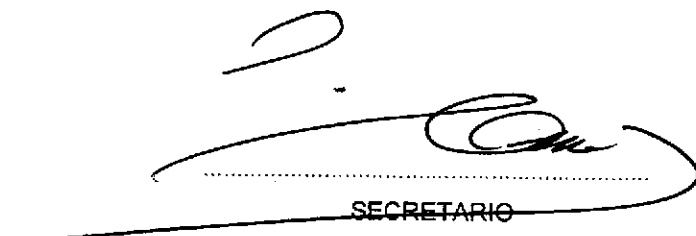
El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 17 puntos que equivale al calificativo de Buena.

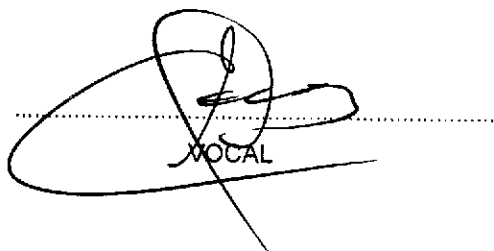
En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:

Maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

Siendo las 13.20 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.


PRESIDENTE


SECRETARIO


VOCAL


ASESOR

RESUMEN

En el contexto del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, se plantea la necesidad de establecer los límites del estado de emergencia, asegurando su sujeción a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. A pesar de que la Constitución prevé la posibilidad de restringir ciertos derechos durante el estado de excepción, aún persiste la incertidumbre sobre los alcances de dicha restricción. En este escenario, se destaca la relevancia del derecho de reunión privada y su conexión con otros derechos fundamentales, lo que demanda una reflexión cuidadosa sobre su reconocimiento, protección y ejercicio, especialmente en situaciones de emergencia como la declarada mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias. En este contexto, el estudio se propone interpretar si el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias satisfacen el control de constitucionalidad formal y material respecto al derecho de reunión privada. Se emplearon técnicas de análisis documental para recopilar y sistematizar información normativa, doctrinaria y jurisprudencial. A través de un enfoque cualitativo, se interpretó el contenido normativo y se formuló una hipótesis de trabajo que cuestiona la adecuación del decreto a los principios constitucionales. Los resultados obtenidos brindan un análisis detallado que contribuye al debate sobre la efectividad y legitimidad de las medidas adoptadas en el contexto del derecho de reunión privada, ofreciendo así una perspectiva crítica que busca promover la reflexión y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el contexto de la emergencia sanitaria.

Palabras Claves: Control de constitucionalidad, decreto supremo N° 044-2020-PCM, estado de emergencia sanitaria y derecho de reunión privada.

ABSTRACT

In the context of the Constitutional and Democratic Rule of Law, there is a need to establish the limits of the state of emergency, ensuring its adherence to constitutional principles of reasonableness, proportionality, and respect for fundamental rights. Despite the Constitution allowing for certain rights to be restricted during a state of emergency, uncertainty persists regarding the extent of such restrictions. In this scenario, the relevance of the right to assembly and its connection to other fundamental rights is highlighted, demanding careful consideration of its recognition, protection, and exercise, especially in emergency situations such as that declared by Supreme Decree No. 044-2020-PCM and complementary regulations. In this context, the study aims to interpret whether Supreme Decree No. 044-2020-PCM and its complementary regulations meet the formal and material constitutional review regarding the right to private assembly. Techniques of documentary analysis and were employed to gather and systematize normative, doctrinal, and jurisprudential information. Through a qualitative approach, the normative content was interpreted, and a working hypothesis was formulated questioning the decree's alignment with constitutional principles. The results provide a detailed analysis contributing to the debate on the effectiveness and legitimacy of measures adopted in the context of private assembly rights, offering a critical perspective aimed at promoting reflection and strengthening the Rule of Law in the context of the health emergency.

Keywords: *Constitutional review, Supreme Decree No. 044-2020-PCM, State of health emergency and right to private assembly.*

INTRODUCCIÓN

El progreso social y la estabilidad de las comunidades dependen de la armonización entre las prerrogativas individuales y el bien común protegido mediante la intervención estatal. Como menciona Tello Ortiz de Zevallos (2023) “dentro de un estado de normalidad, las primeras deben prevalecer frente a la intervención estatal, no obstante, existen circunstancias que obligan a invertir los polos exigiendo el uso del *ius imperium del Estado*” (p. 83)

En un contexto marcado por la intersección entre el Estado Constitucional y Democrático de Derecho y las medidas excepcionales adoptadas durante situaciones de emergencia, surge la necesidad de examinar de manera minuciosa los límites y garantías que protegen los derechos fundamentales. Este estudio se centra en analizar la constitucionalidad formal y material del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias en relación con el derecho de reunión privada en el Perú. El tema se enmarca en una coyuntura donde la aplicación de decretos y disposiciones gubernamentales ha generado controversias y debates sobre la preservación de los derechos individuales frente a la salvaguarda del bien común. Es crucial comprender las características y causas que motivan esta investigación, así como las implicaciones que conlleva para la estructura legal y la sociedad en su conjunto.

El interés en abordar este tema es tanto académico como profesional. Desde una perspectiva académica, existe la necesidad de profundizar en el análisis de la legislación y su adecuación a los principios constitucionales, contribuyendo al desarrollo del conocimiento en el campo del derecho constitucional y los derechos fundamentales. A nivel profesional, esta

investigación busca proporcionar herramientas y reflexiones que puedan orientar la acción de los operadores jurídicos y las autoridades en la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas.

La metodología utilizada para llevar a cabo este estudio se basó en un enfoque cualitativo, que permitió realizar un análisis detallado del contenido normativo y jurisprudencial relacionado con el derecho de reunión privada. Se emplearon técnicas de análisis documental y juicio de expertos para recopilar y sistematizar la información relevante, así como para formular una hipótesis de trabajo que guiara el proceso de investigación.

El objetivo principal de este trabajo es interpretar si el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias satisfacen el control de constitucionalidad formal y material respecto al derecho de reunión privada. Para lograr este objetivo, se plantean subobjetivos específicos que buscan analizar el contenido normativo, doctrinario y jurisprudencial, así como formular una perspectiva crítica que contribuya al debate sobre la efectividad y legitimidad de las medidas adoptadas en el contexto del derecho de reunión privada.

El desarrollo de esta investigación se organiza en diversos capítulos que abordan aspectos fundamentales relacionados con el tema. En el primero, se detalla la metodología empleada, incluyendo el diseño de investigación, la selección de muestra y las técnicas de recolección y análisis de datos. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que sustenta el estudio, explorando las principales teorías y conceptos relacionados con el tema de investigación. El tercer capítulo se dedica al análisis de datos, donde se examinan e interpretan los resultados obtenidos mediante técnicas estadísticas y cualitativas. En el cuarto capítulo, se presenta una propuesta de intervención basada en los hallazgos del estudio, con el objetivo de abordar las problemáticas identificadas y promover el cambio deseado en el contexto investigado. Finalmente, en el quinto capítulo, se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, resaltando los

hallazgos más relevantes y su implicación práctica y teórica, así como se invita a futuras investigaciones en el área.

CAPITULO I:

ANÁLISIS DEL OBJETO DE

ESTUDIO

Capítulo I: Análisis del Objeto de Estudio

1.1. Planteamiento del Problema

La situación problemática que se aborda en este contexto como lo enunciara Bernal Ballesteros (2001), “uno de los temas que mayores controversias ha suscitado en la historia de las instituciones jurídicas modernas es el de la Jurisdicción constitucional” (p.45). En primer lugar, se destaca la dualidad entre el control difuso y el control abstracto o concentrado, elementos que coexisten en nuestro sistema jurídico y que aún requieren de una definición más clara y coherente.

En segundo término, se evidencia la falta de claridad en el proceso para evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un decreto supremo, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen mecanismos como la acción de inconstitucionalidad.

Otro aspecto relevante es la necesidad de establecer los límites del estado de emergencia en el marco del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, “asegurando su sujeción a la Constitución, la ley, pactos internacionales sobre derechos humanos y estricto cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad” (Albán Peralta, 2003, p. 19)

Además, se plantea la importancia de definir con precisión los derechos que pueden ser restringidos durante un estado de excepción, como la libertad de reunión, y de analizar los alcances de dichas restricciones en el ámbito académico y jurídico.

Por último, se reflexiona sobre la complejidad del derecho de reunión y su interrelación con otros derechos fundamentales, especialmente en situaciones de emergencia como la declarada mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias. Esta complejidad requiere una interpretación minuciosa para determinar si el mencionado decreto y sus normativas

cumplen con los estándares de constitucionalidad formal y material en relación con el derecho de reunión privada.

1.2. Formulación del Problema de Estudio

Considerando la complejidad y especificidad inherente a la investigación jurídica, y tomando en cuenta la naturaleza de sus objetos de estudio, se reconoce que la pregunta de investigación no desempeña un papel categórico ni determinista causal, como ocurre en el ámbito de las Ciencias Naturales. Más bien, su función es orientadora. (Mila Maldonado et al., 2021, p. 94)

En este sentido discursivo, se formula el enunciado interrogativo siguiente: *¿Cuál es el impacto del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias en el ejercicio del Derecho de Reunión Privada, considerando tanto su constitucionalidad formal como material?*

1.3. Justificación e Importancia del Estudio

La justificación de una investigación como menciona Fernández Bedoya (2020) “debe destacar la relevancia y pertinencia del tema abordado, en la cual el autor desarrolla una investigación para ensalzar alguna postura descuidada en el campo de la ciencia” (p.72). En este caso, la investigación se enmarca en un contexto donde la discusión sobre el control constitucional, especialmente en situaciones de emergencia, adquiere una relevancia creciente.

En un principio, resulta relevante destacar que la fiscalización constitucional representa un aspecto esencial en todo Estado que se rige por el principio de legalidad y democracia, dado que asegura la primacía de la Constitución y la salvaguardia de los derechos esenciales de los individuos. En esta perspectiva, la investigación aporta al análisis más profundo de cómo se lleva

a cabo esta fiscalización en momentos de crisis, como la declarada a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y disposiciones afines.

Además, el análisis de la constitucionalidad formal y material de dicho decreto y sus normativas en relación con el derecho de reunión privada es de suma relevancia en un contexto donde las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria pueden tener un impacto significativo en los derechos y libertades individuales. Esta investigación tiene implicaciones prácticas importantes, ya que sus resultados pueden servir de guía para los poderes públicos y los operadores jurídicos en la aplicación y evaluación de medidas restrictivas durante estados de excepción. Además, puede contribuir al debate académico y jurídico sobre el alcance y los límites del control constitucional en situaciones de emergencia.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Interpretar si el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias; satisfacen el control, de constitucionalidad formal y material, respecto al Derecho de Reunión Privada.

1.4.2. Objetivos específicos

- Explicitar el contenido del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias, respecto al derecho de Reunión Privada, mediante matriz de análisis documental.
- Sistematizar el contenido normativo, doctrinario y jurisprudencial del Derecho a Reunión Privada, mediante consulta de fuentes doctrinales, convencionales, jurisprudenciales y normativas, a través de una matriz de análisis documental.

- Formular interpretación constitucional formal y material, del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias, respecto al derecho de Reunión Privada, mediante aplicación de criterios doctrinarios, convencionales, jurisprudenciales y normativos.

1.5. Hipótesis

Respecto a la hipótesis la autora Ruiz Resa (2020) señala que “en el caso de la investigación jurídica, configura una suposición que orienta el proceso investigativo y que su comprobación, necesita de evidencia corroborativa, aportada por el proceso interpretativo” (p. 139); en esta línea discursiva se formula el enunciado hipotético siguiente:

Se evidencia que el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias; no satisfacen el control, de constitucionalidad formal y material, respecto al Derecho de Reunión Privada.

1.6. Diseño Metodológico

1.6.1. Tipo de Investigación

El tipo de investigación abordado en este estudio se enmarca dentro de una metodología cualitativa, complementada con el método hermenéutico de investigación. Esta aproximación metodológica se fundamenta en el análisis crítico de fuentes tanto doctrinales como teóricas de tipo bibliográfica, orientadas a la interpretación profunda del fenómeno jurídico objeto de estudio.

Conceptualizando la investigación cualitativa; Corona Lisboa (2018) afirma que “es un tipo de investigación cuya finalidad es proporcionar una mayor comprensión, significados e interpretación subjetiva que el hombre da a sus creencias, motivaciones y actividades culturales” (p.72). En su naturaleza interpretativa, se centra en la comprensión contextual y significativa de

los fenómenos jurídicos, permitiendo un análisis detallado de las interrelaciones y dinámicas presentes en el marco normativo y conceptual del Derecho.

Por su parte, el método hermenéutico, según Fuster Guillen (2019) “surge como una respuesta al radicalismo de lo objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto” (p.202) es por ello que, al emplear una perspectiva crítica y reflexiva, facilita el examen minucioso de las diversas interpretaciones y argumentaciones presentes en la literatura jurídica, en aras de una comprensión rigurosa y fundamentada del objeto de estudio.

De esta manera, la combinación de la investigación cualitativa y el método hermenéutico brinda un enfoque robusto y riguroso para abordar la complejidad inherente al análisis jurídico, propiciando una reflexión profunda y fundamentada sobre las cuestiones planteadas en el ámbito del Derecho.

1.6.2. Métodos

En la presente investigación, se han empleado diversos métodos con el propósito de alcanzar los objetivos planteados y abordar adecuadamente la problemática objeto de estudio. Los métodos utilizados son los siguientes:

1.6.2.1. Deductivo – Hermenéutico. Este método ha permitido el análisis de casos específicos y la interpretación profunda de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales relacionados con el Derecho de Reunión Privada y el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. A partir de esta comprensión, se han extraído conclusiones generales sobre la adecuación del decreto a los principios constitucionales.

1.6.2.2. Histórico-Jurídico. Se ha recurrido a este método para contextualizar el fenómeno jurídico objeto de estudio, analizando su evolución histórica tanto en el ámbito doctrinario como legislativo. Esta perspectiva histórica ha contribuido a comprender el desarrollo y los cambios en la regulación del derecho de reunión y su relación con el estado de emergencia.

1.6.2.3. Jurídico – Descriptivo. A través de este método, se ha realizado un análisis detallado del problema de investigación, su justificación y la definición conceptual de las variables e indicadores relevantes. Esto ha permitido una comprensión clara y precisa de la problemática abordada en la tesis.

1.6.3. Técnicas

En la presente investigación, se han empleado diversas técnicas para recopilar información relevante y obtener aportes significativos de especialistas en el campo del Derecho Constitucional. Las técnicas utilizadas son las siguientes:

1.6.3.1. Análisis Documental. Se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales relacionados con el Derecho de Reunión Privada y el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Esta técnica ha permitido recopilar información detallada y fundamentar el estudio en una amplia base documental.

1.6.3.2. Jurídico - Propositivo. Realiza un estudio detallado del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y otras normativas relacionadas para identificar aspectos que puedan afectar el ejercicio del derecho de Reunión Privada. Basándose en el análisis realizado, se formula propuestas concretas para mejorar la normativa y garantizar una protección efectiva del derecho de Reunión Privada. Estas propuestas pueden incluir modificaciones al Decreto Supremo, la introducción de nuevas disposiciones legales o la elaboración de directrices interpretativas.

CAPITULO II:

MARCO TEÓRICO

Capítulo II: Marco Teórico

2.1. Antecedentes Históricos

Orozco Alvarado & Díaz Pérez (2018) respecto a los antecedentes afirman:

Son trabajos previos que se asumen con la finalidad de mostrar que el tema fue abordado por otros autores, pero que existe la posibilidad de estudiarlo desde otras perspectivas; en esta línea de pensamiento se recensionan estudios asociados al objeto de estudio del trabajo. (p. 80)

2.1.1. Antecedentes Nacionales

Para contextualizar los antecedentes nacionales relacionados con el control constitucional en situaciones de excepción y la limitación de derechos fundamentales en estados de emergencia, es relevante considerar investigaciones previas que han abordado estas temáticas desde distintas perspectivas.

En primer lugar, la tesis de Siles Vallejos (2020) titulada "La implacable erosión institucional: el Estado de emergencia en la Constitución peruana ante amenazas de naturaleza política a inicios del siglo XXI" aborda cómo la aplicación de estados de emergencia en Perú ha mostrado transgresiones al orden constitucional, tales como el incumplimiento de las causales habilitantes y la violación de principios como la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad. Siles Vallejos concluye que es indispensable corregir estas prácticas para restaurar el verdadero sentido de la Constitución de emergencia del Perú y asegurar la mejor realización del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho, incluso bajo condiciones de anormalidad constitucional (Siles Vallejos, 2020).

Por otro lado, la investigación de Vera Terrones (2018) titulada "La insuficiente regulación del estado de emergencia en el ordenamiento jurídico peruano y las consecuencias atentatorias

contra los derechos fundamentales" examina las deficiencias en la regulación del estado de emergencia en Perú y cómo estas pueden llevar a violaciones de derechos fundamentales. Vera Terrones sugiere que la falta de una regulación clara y específica permite al Ejecutivo ejercer facultades discrecionales de manera excesiva, proponiendo una reforma constitucional para limitar estas facultades solo a circunstancias extraordinarias que no puedan ser manejadas por medios ordinarios (Vera Terrones, 2018).

Además, la tesis de Alarcón Huerta (2018) titulada "La inconstitucionalidad de las normas constitucionales y el mecanismo para tratarlas en el ordenamiento peruano" explora los mecanismos de control constitucional existentes en Perú y su aplicación a las normas emitidas durante estados de emergencia. Alarcón Huerta argumenta que, aunque el marco normativo es adecuado, su implementación efectiva requiere un fortalecimiento de las instituciones encargadas del control, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas (Alarcón Huerta, 2018).

La tesis de García Valverde (2017) titulada "Participación del Ejército del Perú en el estado de emergencia sanitaria debido a la COVID-19" analiza el rol del Ejército en la implementación de las medidas de emergencia sanitaria. García Valverde concluye que, aunque la participación militar puede ser necesaria en ciertos contextos, es crucial contar con una supervisión civil y judicial adecuada para evitar abusos y asegurar que las medidas sean proporcionales y necesarias (García Valverde, 2017).

Finalmente, la investigación de Rodríguez Paredes (2021) titulada "Control Político y el Estado Constitucional de Derecho en los Gobiernos de Emergencia" explora la relación entre el control político y el control constitucional en contextos de emergencia. Rodríguez Paredes destaca la importancia de mantener un equilibrio entre los poderes del Estado para asegurar que las

medidas de emergencia no se utilicen de manera arbitraria, y que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos (Rodríguez Paredes, 2021).

Estos trabajos aportan ideas fundamentales para la comprensión de la temática investigada, resaltando la importancia del control constitucional en la protección de derechos fundamentales, así como la necesidad de garantizar el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos en situaciones de emergencia. Estos antecedentes servirán como base para fundamentar y enriquecer el análisis en el presente estudio sobre la constitucionalidad del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus implicaciones en el derecho de reunión privada.

2.1.2. Antecedentes Internacionales

Para fundamentar los antecedentes internacionales relacionados con el control constitucional en situaciones de emergencia y la vulneración de derechos fundamentales, es esencial considerar investigaciones previas que han abordado estas temáticas desde una perspectiva global.

En primer lugar, el trabajo realizado por Castro Hernández (2021) titulado "Control constitucional del Estado de excepción y los decretos expedidos en Colombia durante el año 2020 con ocurrencia de la covid-19 y la vulneración de derechos fundamentales", se enfocó en revisar las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia relacionadas con los decretos expedidos durante el año 2020 debido a la pandemia de la covid-19. A través de un enfoque metodológico analítico descriptivo, se examinaron las características de los estados de emergencia y se analizó el control constitucional ejercido por la Corte. Se concluyó que la Corte realiza un control formal y material, aplicando diversos criterios como los juicios de finalidad, conexidad material, proporcionalidad y no discriminación, identificando la vulneración de derechos fundamentales en varios decretos.

El artículo aborda de manera exhaustiva el control constitucional del Estado de Excepción y los decretos expedidos en Colombia durante el año 2020 debido a la pandemia de la covid-19. Se destaca la función de la Corte Constitucional en revisar la constitucionalidad de estos decretos, con el objetivo de determinar si hubo vulneración de derechos fundamentales.

Se mencionan tres tipos de estados de excepción: Guerra Exterior, Conmoción Interior y Emergencia Social y Ecológica o Calamidad Pública, cada uno con sus respectivos procedimientos y condiciones para ser declarados. Se enfatiza en la importancia de establecer una diferencia clara entre estos estados para evitar abusos.

El artículo detalla los controles de legalidad y constitucionalidad que se ejercen sobre los decretos expedidos durante los estados de excepción. Se resalta la necesidad de un control integral que examine tanto los aspectos formales como los materiales de los decretos, garantizando así la primacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En conclusión, se señala que, si bien hubo casos de vulneración de derechos fundamentales con algunos de los decretos revisados, el control constitucional realizado por la Corte Constitucional ha sido efectivo en evitar abusos y proteger los derechos de los ciudadanos durante la crisis generada por la pandemia de la covid-19 en el año 2020.

Por otro lado, Recuerda Girela (2022) en su artículo "Las Garantías Constitucionales en los Estados de Emergencia", se propuso analizar las sentencias del Tribunal Constitucional de España en relación con los estados de alarma establecidos por la Constitución Española de 1978. En este estudio, se exploraron aspectos teóricos como los criterios del tribunal sobre los estados de emergencia, la suspensión de derechos fundamentales y la indebida prórroga de los estados de alarma. Se concluyó que la Constitución Española establece garantías específicas para los estados

de emergencia, y que la suspensión de derechos fundamentales implica una limitación intensa que puede comprometer el respeto de las garantías constitucionales.

El Tribunal Constitucional emitió el 14 de julio de 2021 una sentencia significativa (STC 148/2021) respecto al control de constitucionalidad del estado de alarma establecido mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Esta sentencia declaró como inconstitucionales ciertas disposiciones del mencionado decreto, argumentando que las restricciones impuestas constituían una suspensión, y no simplemente una limitación, del derecho a la libre circulación, lo cual era incompatible con la Constitución española.

El debate central giró en torno a la distinción entre limitación y suspensión de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional subrayó que bajo el estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales de manera directa, sino que se permite la adopción de medidas que pueden implicar limitaciones o restricciones a su ejercicio. Esta diferencia es crucial, ya que la suspensión de derechos solo está contemplada en los estados de excepción y sitio, según lo establecido en la Constitución.

El tribunal argumentó que las restricciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, al limitar drásticamente la libre circulación, equivalían en la práctica a una suspensión temporal de este derecho. Además, se cuestionó si las actividades permitidas durante el estado de alarma eran exhaustivas o si se admitían otras de naturaleza similar. La sentencia concluyó que, aunque no se trataba de una lista cerrada, la habilitación para el cierre general de espacios de circulación confería un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades.

Sin embargo, la coherencia del Tribunal Constitucional fue objeto de críticas, especialmente en su abordaje de otros derechos fundamentales como el de manifestación y el de

libertad de culto. Respecto al primero, se cuestionó la compatibilidad entre las restricciones generales al espacio público y el ejercicio del derecho de manifestación. En cuanto al segundo, se argumentó que las limitaciones al culto durante la pandemia excedían las medidas necesarias para proteger el orden público.

La sentencia también suscitó debates sobre el papel del Parlamento y la necesidad de garantizar un equilibrio entre la protección de derechos fundamentales y la gestión de crisis como la pandemia. Algunos magistrados y expertos opinaron que la sentencia dejaba al Gobierno sin herramientas legales suficientes para abordar situaciones extraordinarias, mientras que otros consideraron que era posible encontrar soluciones dentro del marco constitucional existente.

Ambos trabajos proporcionan una perspectiva internacional sobre el control constitucional en situaciones de emergencia, destacando la importancia del respeto a los derechos fundamentales y el papel de los órganos judiciales en garantizar el cumplimiento de la Constitución en momentos de crisis.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Estado Constitucional de Derecho

La consolidación de la jurisdicción constitucional en los sistemas jurídicos políticos, implica la culminación del desarrollo del denominado Estado de Derecho, hecho sucedido en el transcurrir del siglo XX; el modelo societal del estado Constitucional, se construye sobre la base del reconocimiento de la dignidad humana y de la democracia como forma de gobierno, que expresa la esencia ideológica, programática, institucional y cultural de una sociedad históricamente determinada (García, 2010)

En esta estructura, la Constitución es una norma jurídico político vinculante, para los poderes, la sociedad civil y las personas públicas y privadas; de esta afirmación se derivan consecuencias capitales como: el principio de constitucionalidad comprende al de legalidad; la constitución es una norma suprema parámetro de validez del ordenamiento normativo legal; la primacía constitucional precisa la diferencias y relacione entre poder constituyente y poder constituido; la supremacía constitucional garantiza la dignidad de la persona, en tanto fin supremo de la sociedad y del estado (Carrasco, 2017)

Entre los aspectos característicos del Estado Constitucional de Derecho, se destacan los siguientes: la sujeción tanto de los gobernantes como de los gobernados a la autoridad del marco legal (consagración de la supremacía de la Constitución, leyes y normativas por encima de la voluntad de los gobernantes y gobernados); la distribución de funciones y la asignación de responsabilidades entre los titulares de los órganos de poder (limitación y control preciso de la duplicación de funciones entre los distintos órganos y poderes); y la existencia de un conjunto fundamental de derechos, garantías, deberes y responsabilidades que abarcan lo civil, político, social, económico y cultural (manifestaciones del reconocimiento de la dignidad humana y del carácter instrumental del Estado). (Gargarella & Niembro, 2016)

2.2.1.1. Origen y evolución histórica. El origen y la evolución histórica del Estado Constitucional de Derecho se remontan a varios momentos clave en la historia del pensamiento político y la organización estatal.

Respecto al punto, Pérez Sánchez (2014) señala que; “La historia del Estado Constitucional es una constante evolución, como lo es la del Estado en general o la de la Humanidad. Pero, centrándonos en el modelo surgido tras las revoluciones liberales, lo cierto es que el cambio ha sido un elemento permanente que, a día de hoy, continúa.” (p. 205)

El surgimiento del Estado Constitucional de Derecho tiene sus raíces en la Ilustración del siglo XVIII, un período donde pensadores como John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau sentaron los fundamentos de un nuevo paradigma en la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Estos filósofos abogaban por la idea de que el poder estatal debía estar sujeto a limitaciones legales y que los derechos individuales merecían protección. Las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de los principios del Estado Constitucional de Derecho. Documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789) marcaron hitos significativos en este proceso. Durante el siglo XIX, el constitucionalismo se convirtió en una fuerza dominante en la política y la teoría jurídica. Surgieron constituciones escritas en muchas partes del mundo, estableciendo límites al poder estatal y reconociendo derechos individuales. Ejemplos destacados incluyen la Constitución de Estados Unidos (1787) y la Constitución de Cádiz en España (1812). En el siglo XX y XXI, el Estado Constitucional de Derecho ha seguido evolucionando, adaptándose a los desafíos y cambios en la sociedad y la política. La proliferación de tribunales constitucionales y la creciente importancia de los derechos humanos han sido tendencias significativas en esta evolución.

2.2.1.2. Principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho. Los principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho constituyen los cimientos estructurales que orientan su funcionamiento y legitimidad.

En este contexto, se destaca la supremacía constitucional, que establece la preeminencia de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica, asegurando que todas las actuaciones estatales se ajusten a sus disposiciones. Asimismo, se reconoce la separación de poderes, en

consonancia con la teoría de Montesquieu, que distribuye las funciones estatales entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar la concentración de poder. Como menciona Bechara Llanos (2011); “el principio de Estado de Derecho implica que el ejercicio del poder estatal debe sujetarse a la legalidad y los procedimientos establecidos, asegurando que todos, incluidos los gobernantes, estén sometidos al imperio de la ley” (p. 65). Se garantiza el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, los cuales son inalienables y deben ser protegidos por el Estado. Además, se establece un sistema de control de constitucionalidad, otorgando a los tribunales constitucionales la facultad de revisar la conformidad de las leyes y actos estatales con la Constitución.

2.2.1.3. Garantías constitucionales. Las garantías constitucionales representan los mecanismos institucionales y legales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder por parte del Estado o de terceros.

El autor Ferrero Rebagliati (1969) afirma que; “por garantías debemos entender las seguridades o procedimientos tuitivos de la libertad, establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales” (p. 35). En el marco del Estado Constitucional de Derecho, estas garantías son fundamentales para asegurar el respeto y la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Entre las principales garantías constitucionales se encuentran el principio de legalidad, que establece que todas las actuaciones estatales deben estar basadas en normas jurídicas previamente establecidas y ser conformes a ellas. Asimismo, destaca el principio de igualdad ante la ley, que prohíbe la discriminación arbitraria y garantiza que todas las personas sean tratadas de manera equitativa por las autoridades. Otro aspecto relevante es el derecho al debido proceso, que asegura a todas las personas el derecho a un juicio justo y equitativo, con las garantías mínimas de defensa y de acceso a la justicia. Además, se encuentran

las garantías de libertad, que protegen la autonomía y la dignidad de los individuos frente a cualquier forma de coerción estatal o social.

2.2.1.4. Función de los órganos de control. La función de los órganos de control en un Estado Constitucional de Derecho es crucial para garantizar el respeto y la vigencia de los principios constitucionales y las normas que los sustentan.

La separación de poderes emerge como uno de los cimientos esenciales del Estado constitucional, donde se establece un mecanismo preventivo contra la concentración de autoridad en una única instancia o entidad gubernamental. Como indica Solozábal Echavarría (1981), constituye “un instrumento fundamental para la consecución de los fines del constitucionalismo, esto es, para asegurar la organización racionalizada y la limitación del Estado” (p. 215). Estos entes, entre los cuales sobresalen los tribunales constitucionales y otros organismos encargados de salvaguardar la legalidad y la constitucionalidad de las acciones estatales, tienen la responsabilidad de garantizar que las actuaciones del poder público se ajusten a los preceptos y límites establecidos por la Constitución. Su labor abarca la revisión de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas, así como la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles excesos de poder por parte de las autoridades. Además, los órganos de control tienen la función de interpretar y aplicar la Constitución de manera coherente y uniforme, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad del ordenamiento jurídico. En este sentido, su actuación contribuye a preservar el Estado de Derecho y a fortalecer la democracia, al asegurar que el ejercicio del poder estatal se realice en consonancia con los principios y valores constitucionales.

2.2.1.5. Relación con otros sistemas políticos. La relación del Estado Constitucional de Derecho con otros sistemas políticos y jurídicos es fundamental para comprender su naturaleza y características distintivas.

Comparado con el Estado de Derecho liberal, el Estado Constitucional de Derecho se distingue por su enfoque más completo y exhaustivo en la salvaguardia de los derechos fundamentales, así como por su hincapié en la supremacía de la Constitución como la norma primordial. Mientras que el Estado de Derecho liberal se centra principalmente en limitar el poder del Estado y proteger las libertades individuales, el Estado Constitucional de Derecho va más allá al incorporar principios de justicia social, igualdad y participación democrática en su estructura jurídica y política. En contraposición al Estado autoritario, el Estado Constitucional de Derecho se distingue por su adhesión al principio de legalidad y al respecto de los derechos humanos, además de contar con mecanismos eficaces de control del poder estatal y garantías judiciales para los ciudadanos. Mientras que el Estado autoritario se basa en la concentración del poder en manos de un líder o un grupo reducido de personas, el Estado Constitucional de Derecho se fundamenta en la división de poderes, el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad popular.

2.2.1.6. Los derechos fundamentales en el derecho Constitucional y Convencional, configuración de su contenido. En primer lugar, es fundamental precisar el procedimiento metodológico, para configurar el contenido fundamental de los derechos humanos fundamentales; en la expresión de voluntad manifestada por el constituyente, constitucionaliza de un modo abierto la esencia o contenido del derecho humano fundamental.

Este planteamiento en muchos casos necesita regulación, la misma que implica concreciones directas del contenido esencial, mediante normas de desarrollo constitucional o

normas adscriptas integradas por interpretaciones contenidas en sentencias del tribunal Constitucional o la Corte Suprema (Castillo, 2022)

Se destaca igualmente que el núcleo esencial de los derechos humanos se concreta a través de normativas establecidas por el legislador internacional, las cuales son respaldadas por interpretaciones vinculantes y detalladas, competencia del tribunal internacional. Estas últimas son denominadas normativas convencionales adscritas.

En suma, se configura una regla, para la determinación del contenido esencial de los derechos humanos fundamentales, que se expresa en el procedimiento siguiente:

1°. La voluntad del constituyente se expresa en forma vierta en los preceptos constitucionales, al nombrar los derechos humanos fundamentales.

2°. Lo expresado en la Carta Magna, en varios casos necesita de interpretaciones vinculantes, expresadas mediante leyes y/o sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, para concretar de manera directa el contenido de los Derechos Humanos fundamentales, a estas normas se les denomina normas adscriptas nacionales.

3°. A nivel de tratados internacionales se estatuye de manera directa el contenido d ellos derechos Humanos Fundamentales, como por ejemplo en el caso Sudamericano, lo normado por la Convención Americana de Derechos Humanos.

4°. Al derecho convencional constitucionalizado, se adhieren las interpretaciones realizadas por tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos), que completan de manera directa el contenido esencial de los Derechos Humanos Fundamentales, a estas normas se les denomina normas convencionales adscriptas.

Para graficar lo explicitado supra, por ejemplo, en el caso del Derecho Humano Fundamental a la Libertad Personal. Se tiene la siguiente lógica configuradora:

- a) Normas constitucionales directamente estatuidas: Art. 2 Num. 24, Incisos d y f de la Norma Normarun.
- b) Normas constitucionales adscriptas de origen nacional: Art. 268 del Decreto Legislativo N° 957; Casación N° 626-2013; Sentencia del TC N° 04780-2017-PHC
- c) Normas constitucionales adscriptas de origen convencional: Art. 7.1 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez Vs Guatemala OC-8/87.

2.2.2. Las limitaciones a los derechos constitucionales

Los derechos fundamentales, en tanto atributos o bienes humanos debidos inherentes a la dignidad humana, no son absolutos e ilimitados, tal condición implicaría un ejercicio despótico por parte de su poseedor, en tal sentido, están sujetos a limitaciones en el marco de las exigencias de la vida en sociedad. En este sentido las limitaciones se definen, como restricciones al ejercicio de un derecho, de tal manera que el ejercicio del bien jurídico que supere las limitaciones, deviene en antijurídico y puede generar responsabilidades (Tórtora Aravena, 2010)

Las limitaciones a los derechos fundamentales, atendiendo a determinados criterios, permite presentar una taxonomía sistemática; entre los criterios se consideran: circunstancias en las que operan, origen de la limitación, norma en la que consta la limitación; a continuación, precisamos algunas ideas sobre cada tópico.

Las restricciones, según el contexto en el que se aplican, pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias afectan el ejercicio de un derecho en condiciones normales y

excepcionales, como el caso del ejercicio de la libertad de enseñanza (Art. N° 13 de la Carta Magna), que debe respetar siempre la formación integral de la persona humana. Estas restricciones operan de manera constante. Por otro lado, las restricciones extraordinarias o excepcionales surgen en situaciones de emergencia social o institucional, como establece el Artículo 137 de la Norma Normarun, tales como los estados de excepción, denominados estado de emergencia o sitio.

En el ámbito del Derecho Convencional, el Artículo N° 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos constituye un componente adicional fundamental. En él se establece que la suspensión de garantías se activa en circunstancias de guerra, peligro público u otras emergencias. No obstante, esta suspensión no puede afectar ciertos derechos inalienables, tales como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el nombre, la protección de la niñez, así como los principios de legalidad e irretroactividad. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que las limitaciones de derechos en caso de excepción constitucional, deben cumplir con dos requisitos formales como son la proclamación y notificación (Ospina, 2021)

Según el criterio origen de la limitación, se trata de restricciones referidas a: respeto hacia los derechos de otras personas, origen material y origen positivo. La primera categoría, nace del respeto hacia los derechos de las demás personas, hecho que impide utilizar los derechos en perjuicio de otro, es decir en el ejercicio de un derecho debe primar la racionalidad que implica no dañar los legítimos intereses de otras personas, caso contrario se trata de conductas no amparadas por el ordenamiento jurídico. De manera complementaria en el Art. N° 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se precisa que los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás.

Una segunda categoría se relaciona con el carácter o origen material o físico, que está vinculado con las capacidades reales del estado para cumplir con los derechos conocidos como prestaciones o de segunda generación. Estas limitaciones suelen estar asociadas con los derechos económicos y sociales. Incluso en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo N° 1.1, se establece que cada Estado parte debe adoptar medidas que permitan satisfacer en la mayor medida posible los derechos prestaciones. La tercera categoría se refiere a las limitaciones expresamente establecidas en el ordenamiento jurídico positivo, el cual de manera específica las nombra y reconoce al precisar restricciones al ejercicio de derechos, así como al autorizar su imposición por parte de ciertas autoridades, generalmente las legislativas.

El tercer criterio, hace referencia a la norma en la que consta la limitación, referidas a las limitaciones plantadas expresamente en el ordenamiento jurídico, pero en el nivel constitucional, distinguiéndose dos tipos de restricciones: directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Las del primer tipo, son cláusulas que constan en la propia constricción, verbigracia el Art. 2 numeral 20 de la Constitución Política, al precisar el derecho de petición señala que en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía nacional, solo pueden ejercer individualmente el referido derecho. El segundo tipo, son limitaciones autorizadas por la Constitución, para que mediante ley puedan ser planteadas, este fenómeno se manifiesta mediante cláusulas de reserva explícitas (Alexy, 2002)

2.2.2.1. Fundamentos teóricos de las limitaciones a los derechos constitucionales

- ✓ Dentro de los fundamentos teóricos que justifican las limitaciones a los derechos constitucionales, se encuentran diversas corrientes filosóficas y políticas que abordan el equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo. El utilitarismo, por ejemplo, propone que las acciones deben evaluarse en función de

su utilidad para maximizar el bienestar general, lo que puede implicar la restricción de ciertos derechos individuales en beneficio de la mayoría. Por otro lado, el liberalismo político reconoce la importancia de los derechos individuales, pero también reconoce la legitimidad de imponer restricciones cuando sea necesario para proteger esos mismos derechos o para evitar daños a terceros.

- ✓ Los principios jurídicos constituyen otra base fundamental para las limitaciones a los derechos constitucionales. Entre estos principios se encuentran el principio de legalidad, que establece que toda limitación a los derechos debe estar prevista en la ley; el principio de proporcionalidad, que exige que las restricciones sean proporcionales al fin perseguido y no excesivas; y el principio de necesidad, que implica que las limitaciones solo deben imponerse cuando sea estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo.
- ✓ Diferentes concepciones del Estado y del derecho también ofrecen fundamentos teóricos para las limitaciones a los derechos constitucionales. Por ejemplo, las teorías del Estado de necesidad argumentan que el Estado tiene el deber de proteger la seguridad y el bienestar de la sociedad, incluso si eso significa restringir ciertos derechos individuales. Asimismo, algunas teorías sostienen que el Estado, como garante del orden y la convivencia social, tiene la facultad de intervenir en la esfera privada de los individuos para prevenir daños a terceros o salvaguardar intereses públicos.
- ✓ Las doctrinas constitucionales también ofrecen fundamentos teóricos para las limitaciones a los derechos constitucionales. Por ejemplo, la doctrina del Estado de necesidad reconoce que, en situaciones excepcionales, como crisis económicas o

emergencias sanitarias, pueden surgir circunstancias que justifiquen la adopción de medidas extraordinarias, incluso si estas implican restricciones a los derechos individuales. Del mismo modo, la doctrina del margen de apreciación reconoce que los Estados tienen cierta discrecionalidad para determinar las medidas adecuadas para proteger los derechos en función de sus circunstancias particulares.

2.2.2.2. Tipos de limitaciones.

- ✓ Las limitaciones temporales son aquellas que se imponen durante un período específico de tiempo y están destinadas a abordar circunstancias temporales o situaciones de emergencia. Por ejemplo, en casos de crisis económicas o emergencias sanitarias, se pueden establecer restricciones temporales a ciertos derechos individuales para garantizar la seguridad pública o proteger el bienestar de la sociedad.
- ✓ Las limitaciones espaciales implican la aplicación de restricciones a los derechos constitucionales en áreas geográficas específicas o en situaciones particulares. Por ejemplo, se pueden establecer zonas de exclusión o de seguridad en casos de disturbios civiles o amenazas terroristas, donde se restringe el derecho de circulación o de reunión en determinadas áreas geográficas.
- ✓ Las limitaciones proporcionales son aquellas que se imponen de manera que sean proporcionadas al fin perseguido y no excesivas en relación con el objetivo buscado. Esto implica que las restricciones deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales al objetivo perseguido, evitando cualquier exceso o arbitrariedad en su aplicación.

- ✓ Las limitaciones específicas son aquellas que afectan a derechos individuales o grupos específicos de personas en función de circunstancias particulares. Por ejemplo, se pueden establecer limitaciones específicas para proteger la seguridad nacional, la salud pública o los derechos de ciertos grupos vulnerables, como niños, personas con discapacidad o minorías étnicas.
- ✓ Por otro lado, las limitaciones generales son aquellas que se aplican de manera indiscriminada a toda la población o a grandes sectores de la sociedad. Estas restricciones suelen estar relacionadas con la adopción de medidas legislativas o políticas que afectan a todos los ciudadanos por igual, sin distinción de circunstancias individuales.
- ✓ Las limitaciones condicionales son aquellas que están sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos previos. Por ejemplo, se pueden establecer restricciones condicionales al ejercicio de ciertos derechos, como la libertad de expresión o el derecho de reunión, que están sujetas al respeto de ciertas normas o procedimientos establecidos por la ley.

2.2.2.3. Principios que rigen las limitaciones.

- ✓ *Principio de legalidad:* Este principio establece que cualquier limitación a los derechos constitucionales debe estar prevista en la ley, es decir, debe ser establecida por normas jurídicas claras y precisas que definan claramente el alcance y los límites de la restricción.
- ✓ *Principio de legitimidad del fin:* Según este principio, las limitaciones a los derechos constitucionales deben perseguir un fin legítimo y constitucionalmente

reconocido, como la protección del orden público, la seguridad nacional, la salud pública o los derechos y libertades de terceros.

- ✓ *Principio de necesidad:* El principio de necesidad establece que las limitaciones deben ser necesarias para alcanzar el objetivo perseguido y no pueden ser sustituidas por medidas menos restrictivas. Esto implica que las restricciones deben ser proporcionadas al fin perseguido y no exceder lo estrictamente necesario para lograrlo.
- ✓ *Principio de proporcionalidad:* La proporcionalidad es un principio clave en la aplicación de limitaciones a los derechos constitucionales. Según este principio, las restricciones deben ser proporcionales al objetivo perseguido, lo que significa que deben guardar una relación razonable entre los medios utilizados y el fin perseguido, evitando cualquier exceso o arbitrariedad en su aplicación.
- ✓ *Principio de no discriminación:* Este principio establece que las limitaciones a los derechos constitucionales no deben discriminar injustamente a ciertos grupos de personas o individuos en función de su origen étnico, género, religión, orientación sexual u otras características protegidas por la ley.
- ✓ *Principio de temporalidad:* Según este principio, las limitaciones a los derechos constitucionales deben ser temporales y estar sujetas a un período de tiempo definido. Esto implica que las restricciones deben levantarse una vez que cese la situación que justificó su imposición, y no deben prolongarse más allá de lo estrictamente necesario.
- ✓ *Principio de revisión judicial:* El principio de revisión judicial establece que las limitaciones a los derechos constitucionales deben estar sujetas al control judicial,

lo que significa que los tribunales deben tener la facultad de revisar la legalidad y constitucionalidad de las medidas restrictivas adoptadas por el poder público.

2.2.2.4. Limitaciones en contextos específicos.

En situaciones de emergencia, como desastres naturales, conflictos armados o pandemias, los Estados pueden imponer limitaciones temporales a ciertos derechos constitucionales para proteger el orden público, la seguridad nacional o la salud pública. Estas restricciones suelen estar justificadas por la necesidad de salvaguardar intereses fundamentales de la sociedad, pero deben ser proporcionales y sujetas a revisión judicial. En el marco de la lucha contra el terrorismo, los Estados pueden implementar medidas que restrinjan ciertos derechos civiles y políticos con el fin de prevenir ataques terroristas y salvaguardar la seguridad nacional. No obstante, estas limitaciones deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y estar sujetas a un escrutinio judicial efectivo para prevenir abusos y asegurar el respeto de los derechos fundamentales. En situaciones en las que se presenten disturbios civiles, protestas masivas u otras formas de agitación social, los Estados pueden imponer restricciones a ciertos derechos, como la libertad de reunión y manifestación, con el fin de mantener el orden público y prevenir actos de violencia o desorden. Estas limitaciones deben ser proporcionadas al objetivo perseguido y no pueden utilizarse como medio para reprimir el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos. La libertad de expresión puede estar sujeta a limitaciones en determinados contextos, como la protección de la reputación y los derechos de terceros, la prevención del discurso de odio o la incitación a la violencia, o la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, estas restricciones deben estar claramente definidas por la ley, ser necesarias y proporcionadas al fin perseguido, y estar sujetas a revisión judicial para garantizar su conformidad con los estándares constitucionales y de derechos humanos. En el contexto de la protección de la

privacidad y la seguridad nacional, los Estados pueden adoptar medidas de vigilancia y control que limiten ciertos derechos, como el derecho a la privacidad y la libertad de circulación y comunicación, con el fin de prevenir amenazas a la seguridad nacional y combatir la delincuencia transnacional. Estas limitaciones deben estar justificadas por razones de interés público y respetar los principios de proporcionalidad, legalidad y no discriminación.

2.2.2.5. Control judicial de las limitaciones. El control judicial de las restricciones a los derechos constitucionales desempeña un papel crucial en la salvaguardia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la preservación del Estado de Derecho. Este control implica la revisión por parte de los tribunales de las medidas adoptadas por el poder legislativo o ejecutivo que afecten el ejercicio de los derechos constitucionales, con el fin de garantizar su conformidad con los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.

Los tribunales deben verificar que las limitaciones impuestas a los derechos constitucionales estén claramente establecidas por la ley, que tengan una base legal sólida y que estén en consonancia con los principios y valores consagrados en la Constitución. Los jueces deben evaluar si las limitaciones son necesarias para alcanzar el objetivo legítimo perseguido por el Estado y si son proporcionales al fin buscado. Esto implica determinar si las restricciones son adecuadas, es decir, si son aptas para lograr el objetivo deseado; si son necesarias, es decir, si no hay medidas menos restrictivas disponibles para alcanzar el mismo objetivo; y si son proporcionadas en sentido estricto, es decir, si los beneficios esperados justifican los costos o sacrificios impuestos a los derechos fundamentales. Los tribunales deben examinar si las limitaciones están debidamente motivadas y si no son arbitrarias o discriminatorias en su aplicación. Esto implica verificar que las decisiones adoptadas por las autoridades estén fundamentadas en razones objetivas y legítimas, y que no se basen en consideraciones

injustificadas o irracionales. En casos en los que se limiten derechos fundamentales de manera significativa, los tribunales deben realizar una revisión detallada de la proporcionalidad en sentido estricto, sopesando cuidadosamente los intereses en juego y asegurándose de que los beneficios esperados de las limitaciones justifiquen los impactos negativos sobre los derechos individuales. En caso de que se constate una violación de los derechos constitucionales debido a limitaciones indebidas, los tribunales deben estar facultados para ordenar medidas de reparación adecuadas, que pueden incluir la anulación de las medidas restrictivas, la indemnización a las personas afectadas y la adopción de medidas para prevenir futuras violaciones.

2.2.2.6. Garantías procesales en caso de limitaciones.

Cuando se imponen limitaciones a los derechos constitucionales, es fundamental garantizar que los individuos afectados dispongan de las debidas garantías procesales para impugnar esas restricciones y defender sus derechos de manera efectiva.

Estas garantías procesales aseguran que el proceso mediante el cual se adoptan las limitaciones sea justo, transparente y respetuoso de los principios del debido proceso legal y del Estado de Derecho.

Todas las personas afectadas por las restricciones deben tener acceso efectivo a los tribunales u otros mecanismos judiciales para impugnar las medidas restrictivas y obtener una revisión imparcial de su legalidad y constitucionalidad. Los procedimientos judiciales relacionados con las restricciones deben garantizar el derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a ser escuchado, a un tribunal imparcial e independiente, a un proceso equitativo y a la presunción de inocencia. Estos procedimientos deben llevarse a cabo dentro de plazos razonables para asegurar una pronta resolución de las disputas y evitar dilaciones indebidas que puedan afectar los derechos de las personas. Las personas afectadas por las restricciones deben ser debidamente

notificadas de las medidas restrictivas y tener la oportunidad de ser escuchadas en un proceso judicial o administrativo donde puedan presentar sus argumentos y pruebas en defensa de sus derechos. Se debe garantizar el derecho de las personas afectadas a recibir asistencia legal adecuada y a presentar sus argumentos y pruebas de manera efectiva en el proceso judicial o administrativo. Los tribunales encargados de revisar las restricciones deben tener competencia para verificar la legalidad y constitucionalidad de las medidas adoptadas, y para anular aquellas que sean contrarias a la Constitución o a la ley. Las decisiones judiciales relacionadas con las limitaciones deben ser susceptibles de recursos efectivos, que permitan corregir errores y garantizar una protección adecuada de los derechos fundamentales. Los procedimientos judiciales o administrativos relacionados con las limitaciones deben llevarse a cabo de manera transparente y estar abiertos al escrutinio público, para asegurar la rendición de cuentas y la confianza en la administración de justicia.

2.2.3. Derecho de reunión

Respecto a la naturaleza jurídica y funcional del derecho en estudio Garrida (2018) precisa que: “es un instrumento útil, para la existencia de una sociedad pluralista y democrática, se trata de un derecho autónomo en su reconocimiento y protección jurídica, pero en cuanto a su ejercicio no lo es, porque su efectividad está asociada a otros derechos, entendiéndose como un medio de su manifestación”.

Se identifica, por ejemplo, una conexión funcional, con los derechos de expresión y asociación, derivándose la interpretación de que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercida en forma colectiva.

La Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante CEDH), precisa el carácter instrumental del derecho de reunión, al ubicarlo en una posición intermedia, para expresar

reivindicaciones y canalizar el derecho de las personas a asociarse, posición concordante con la sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), en el sentido de reconocerle instrumentalidad, para proteger opiniones y la libertad de expresarlas.

La singular naturaleza jurídica del derecho sub -análisis, expresada en sus conexiones funcionales con otros derechos, posición que los sitúa en un escenario de coincidencia con otros derechos y libertades, para unos intérpretes como medio de ejecución y para otros como instrumento de afectación.

En cuanto a su delimitación, es consenso señalar que comprende tanto reuniones privadas como públicas, siendo las legislaciones nacionales las que precisan los límites del analizado derecho; así como, complementan con definiciones asociadas a su ejercicio.

Existe consenso en la doctrina constitucionalista en considerar el derecho de reunión como una libertad individual con una dimensión social, que requiere la presencia de otras libertades para su ejercicio pleno. Se reconoce, por lo tanto, una naturaleza jurídica individual en cuanto a sus titulares, pero de realización colectiva, tanto en espacios públicos como privados.

En jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, se precisa la configuración de este derecho, considerándose elementos como: subjetivo (referido a la agrupación de personas), temporal (asociado a una transitoriedad), real u objetivo (apreciado mediante los sentidos) y finalístico (vinculado al logro de un fin lícito); los rasgos precisados son de naturaleza intrínseca (Espinoza, 2017)

En relación con las limitaciones o restricciones al derecho de reunión, tanto la doctrina como la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) establecen que este derecho debe ser pacífico y no armado, ya sea en espacios privados o públicos, tanto en su forma estática como en

movimiento. En esta línea de pensamiento, el Artículo N° 11 de la CEDH establece que no se pueden imponer restricciones a este derecho, excepto cuando estén prescritas por la ley y sean necesarias para garantizar: la seguridad nacional y pública, la prevención del desorden y el crimen, la protección de la salud o la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás.

El TEDH, aplica un triple test, para analizar las restricciones e injerencias al derecho de reunión, a saber: prescripción en la ley, fin legítimo de la previsión legal, justificación de necesidad en una sociedad democrática.

En el caso peruano, el derecho en estudio, esta consignado en el Art. N° 2 Numeral 12, que, de manera literal precisa, toda persona tiene derecho a “...reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas” (Gutiérrez, 2019).

En este sentido el derecho de reunión se define como la facultad de toda persona de juntarse con otras, en espacio y tiempo determinado y en forma pacífica, con la finalidad de exponer e intercambiar libremente sus ideas. (Recurso de Agravio Constitucional CGTP, 2004).

En sintonía con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), el Tribunal Constitucional peruano establece que el contenido protegido constitucionalmente del derecho de reunión está compuesto por elementos tales como: subjetivo, temporal, finalista, real o espacial, y eficacia inmediata. El elemento subjetivo se refiere a la titularidad individual, pero al ejercicio colectivo, como por ejemplo las reuniones familiares en ámbito privado y las marchas organizadas por sindicatos en el ámbito público. El componente temporal es de naturaleza efímera, ya que las reuniones públicas o privadas tienen una duración

transitoria, como por ejemplo la celebración de un cumpleaños en ámbito familiar o la realización de una marcha pública por parte de un sindicato.

El tercer componente hace referencia la finalidad, la cual debe poseer un carácter lícito, relacionado a los medios que permiten lograrlo, que no conduzcan a infligir daños a las personas o a los bienes; el cuarto componente, refiere el carácter real o espacial, referido al lugar específico geográficamente localizado; el quinto elemento se refiere a la eficacia inmediata, en el sentido que no requiere autorización previa para su ejercicio, no obstante se debe precisar, que las reuniones convocadas en plazas o vías públicas, en la búsqueda de armonización con otros derechos, la autoridad debe tomar noticia con antelación, para tomar las precauciones necesarias, se precisa que el aviso previo no implica autorización (Tribunal Constitucional, 2004).

Como es de conocimiento los derechos fundamentales son absolutos ni ilimitados, sino que están sujetos a limitaciones o restricciones, que en el caso peruano son de naturaleza constitucional y se precisan en el Art. N° 2 Numeral 12 “por motivos probados de seguridad o sanidad pública, aspectos que deben ser evaluados en cada caso concreto.

Es menester precisar que, desde el derecho convencional, en el Art. N° 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se precisa que las restricciones deben estar previstas en la ley y deben estar referidas a la seguridad nacional, seguridad y orden público, protección de la salud o moral pública y otros derechos y libertades. (Tribunal Constitucional, 2014).

Se puntualiza que, respecto a las restricciones, la autoridad competente debe motivarlas, para cada caso concreto, de tal manera que el derecho se vea restringido por causas válidas, objetivas y razonables (principio de razonabilidad), sin más allá de lo estrictamente necesario (principio de proporcionalidad).

2.2.3.1. Fundamentos Jurídicos del Derecho de reunión. El derecho de reunión encuentra sus fundamentos jurídicos en un conjunto de disposiciones normativas tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, suele estar consagrado en la Constitución del país respectivo, así como en leyes específicas que regulan el ejercicio de este derecho.

Estas disposiciones reconocen la importancia de la libertad de reunión como un componente esencial de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A nivel internacional, el derecho de reunión está respaldado por varios instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros. Estos instrumentos establecen que toda persona tiene el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, así como a asociarse libremente con otras personas.

El reconocimiento del derecho de reunión en la normativa nacional e internacional refleja la importancia de este derecho como un medio fundamental para la participación ciudadana, la expresión de ideas y opiniones, y el ejercicio de la libertad de asociación. Además, sienta las bases para la protección y garantía de este derecho frente a posibles interferencias por parte del Estado u otros actores.

2.2.3.2. Limitaciones al ejercicio del derecho de reunión. El ejercicio del derecho de reunión puede estar sujeto a ciertas limitaciones, las cuales deben ser establecidas de manera clara y precisa en la legislación y deben ser proporcionales al objetivo perseguido. Estas limitaciones pueden ser impuestas por razones de seguridad pública, protección de la salud o derechos de terceros, entre otras.

Las restricciones legítimas al ejercicio del derecho de reunión pueden incluir medidas para garantizar el orden público, prevenir disturbios o actos de violencia, proteger la salud pública o los

derechos y libertades de otras personas. Estas limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática y estar en consonancia con los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.

Es importante que las autoridades encargadas de aplicar estas limitaciones lo hagan de manera proporcionada y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. El uso excesivo o arbitrario de medidas restrictivas puede constituir una violación del derecho de reunión y otros derechos humanos.

2.2.3.3. *Garantías procesales en casos de limitaciones al derecho de reunión.* Cuando se imponen limitaciones al ejercicio del derecho de reunión, es fundamental que se respeten ciertas garantías procesales para asegurar que estas restricciones sean legítimas y proporcionadas.

Las restricciones al derecho de reunión deben estar claramente definidas por la ley y aplicarse de acuerdo con los procedimientos legales establecidos. Las limitaciones impuestas deben ser proporcionadas al objetivo perseguido y no pueden ser más amplias de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Aquellas personas afectadas por las restricciones al derecho de reunión deben tener la oportunidad de impugnar dichas restricciones y ser escuchadas en un proceso justo y equitativo. Debe existir la posibilidad de recurrir las decisiones que imponen limitaciones al derecho de reunión ante un tribunal independiente e imparcial, que revise la legalidad y proporcionalidad de dichas restricciones. Las autoridades encargadas de imponer las limitaciones deben actuar de manera transparente, proporcionando información clara y accesible sobre las razones y fundamentos de dichas restricciones.

2.2.4. El Estado de Excepción

El estado de excepción es una medida extraordinaria que los gobiernos pueden tomar en situaciones de emergencia que amenazan la seguridad, el orden público o la estabilidad del país.

Este mecanismo permite la suspensión temporal de ciertos derechos y libertades fundamentales, así como la ampliación de poderes del ejecutivo, para hacer frente a la crisis de manera efectiva. El concepto de estado de excepción se encuentra regulado en la mayoría de las constituciones modernas y en tratados internacionales de derechos humanos, que establecen límites y condiciones.

2.2.4.1. Fundamentos Jurídicos. En el contexto peruano, el estado de excepción está regulado por la Constitución Política del Perú. El artículo 137 de la Constitución establece las condiciones bajo las cuales el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, puede declarar el estado de excepción.

- Estado de Emergencia: Declarado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
Durante este estado, pueden restringirse o suspenderse ciertos derechos, como la libertad de tránsito, reunión, y seguridad personal.
- Estado de Sitio: Declarado en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil, y puede implicar restricciones más severas, incluyendo la posibilidad de que las fuerzas armadas asuman ciertas funciones de las autoridades civiles.

2.2.4.2. Normativas Internacionales. El estado de excepción también está regulado a nivel internacional por instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Estos tratados permiten la suspensión de ciertas obligaciones en situaciones excepcionales, pero establecen que dicha suspensión debe ser limitada en el tiempo, no discriminatoria, y no debe implicar la derogación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

2.2.4.3. Aplicación y Límites. La aplicación del estado de excepción debe estar sujeta a una serie de controles y límites para evitar abusos de poder y proteger los derechos humanos.

- **Temporalidad:** La duración del estado de excepción debe ser limitada y específica. En Perú, el estado de emergencia no puede exceder los 60 días, aunque puede ser renovado con justificación.
- **Proporcionalidad:** Las medidas adoptadas durante el estado de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de la situación. No deben imponerse restricciones que no sean necesarias para enfrentar la emergencia.
- **Legalidad y Control Judicial:** Todas las medidas deben estar fundamentadas en la ley, y deben existir mecanismos de control judicial y parlamentario para supervisar la implementación y evitar excesos.
- **Transparencia y Rendición de Cuentas:** El gobierno debe informar claramente a la población sobre las razones para declarar el estado de excepción, las medidas adoptadas y la duración prevista. Además, debe rendir cuentas sobre el uso de los poderes extraordinarios.

2.2.4.4. Impacto en los Derechos Fundamentales. El estado de excepción, aunque necesario en algunas situaciones, tiene un impacto significativo en los derechos fundamentales. La suspensión de derechos como la libertad de reunión y la libertad de movimiento puede afectar gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, es crucial que estas medidas sean implementadas de manera transparente y que estén sujetas a un escrutinio constante para garantizar que no se conviertan en herramientas de represión.

2.2.5. Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Peruano

Para (Rubio & Arce, 2017) en el ordenamiento jurídico peruano se identifican básicamente los niveles siguientes: “constitución, tratados de derechos humanos, ley decreto legislativo, decreto de urgencia, tratado, ordenanza regional, ordenanza municipal, decretos supremos, resoluciones ministeriales(directorales), decretos regionales, decretos de alcaldía, convenios colectivos, costumbre.”

En el plano del gobierno central, dividido en tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se presentan los siguientes niveles legislativos:

- a. La Constitución Política, emitida por el poder constituyente y las leyes de reforma constitucional creadas por el Poder Legislativo o Congreso (Art. N° 206 de la CP).
- b. Leyes del Congreso (Art. N° 102 de la CP), decretos legislativos (Art. 104 de la CP) y decretos de urgencia (Art. N° 118.19 de la CP). Estos dos últimos son dictados excepcionalmente por el Poder Ejecutivo o Consejo de ministros por autorización expresa precisada en los Arts. N° 104 y 118.19.
- c. Decretos supremos, son emitidos por el Poder Ejecutivo con refrendo ministerial (Art. N° 118.8 de la C.P), y resoluciones de carácter general.

Entre los niveles descritos supra, existe jerarquía, destacándose la supremacía de la constitución sobre las leyes, de estas sobre los decretos supremos y las resoluciones.

La mayor parte de las funciones administrativas recae en el Poder Ejecutivo, el cual tiene la responsabilidad de llevar a cabo lo estipulado en la Constitución y las leyes. En su función ejecutiva, puede emitir actos generales como los Decretos Supremos o dictar resoluciones como las ministeriales, directorales, jefaturales, entre otras.

Los Decretos Supremos, según lo establecido en el Artículo 118.8 de la Constitución Política, tienen la función de ejecutar los mandatos normativos con rango de ley sin alterar su contenido ni desnaturalizarlo. Estos decretos son firmados por el máximo Mandatario de la República y refrendados por el ministro o ministros pertinentes. De acuerdo con el Artículo N° 120 de la Constitución Política, los actos firmados únicamente por el presidente son nulos, por lo que la firma del o los ministros es obligatoria. Una vez elaborados, los Decretos Supremos se publican en el diario oficial El Peruano y entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Es importante destacar que cuando estos decretos reglamentan, ejecutan o aplican las leyes, constituyen normas jurídicas de carácter general y abstracto, sin límites temporales, pero sí materiales.

2.2.5.1. La constitución normal suprema. La Constitución de la República del Perú, como documento fundamental que rige el ordenamiento jurídico del país, ostenta una posición de supremacía dentro del sistema legal. Esta supremacía se deriva de su carácter fundacional y de su función primordial de establecer los principios, valores y derechos fundamentales sobre los cuales se estructura el Estado peruano y se organizan las relaciones entre el poder público y los ciudadanos.

En virtud de su supremacía, la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal o acto de autoridad, y todas las demás normas deben estar subordinadas a sus disposiciones. Esto implica que cualquier ley, decreto, reglamento u otra disposición normativa que contradiga lo establecido en la Constitución es considerada nula y carente de validez legal.

La Constitución no solo establece los fundamentos del Estado y los derechos de los ciudadanos, sino que también determina los mecanismos para su modificación y protección. Así, el proceso de reforma constitucional está sujeto a procedimientos especiales y rigurosos, diseñados para garantizar la estabilidad y permanencia de las disposiciones constitucionales a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, la Constitución sirve como un marco de referencia fundamental para la interpretación y aplicación de otras normativas jurídicas. En situaciones de conflicto o incertidumbre respecto a la interpretación de una ley o disposición legal, los tribunales y autoridades están obligados a recurrir a los principios y valores establecidos en la Constitución para resolver la controversia de manera coherente y en consonancia con los fundamentos del Estado de derecho.

2.2.5.2. Normas con rango de Ley. En el sistema jurídico peruano, las normas con rango de ley ocupan una posición central en la jerarquía normativa. Estas normas son aquellas que han sido dictadas por el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República, y tienen la particularidad de ser elaboradas de acuerdo con un procedimiento establecido en la Constitución y las leyes.

Las normas con rango de ley abarcan una amplia gama de disposiciones legales, incluyendo las leyes ordinarias, las leyes marco, los decretos legislativos, los decretos de urgencia y otras normativas similares. Su principal característica es que han sido promulgadas por el Congreso, el órgano representativo del poder legislativo, y por lo tanto gozan de una legitimidad democrática derivada de la voluntad popular expresada a través de los procesos electorales.

Estas normas tienen un alcance general y son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y entidades dentro del territorio peruano. Su finalidad es regular aspectos fundamentales de la vida en sociedad, estableciendo derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones que deben ser observadas por todos los actores sociales.

La importancia de las normas con rango de ley radica en su capacidad para crear y modificar el ordenamiento jurídico, así como para regular materias de interés público que requieren una regulación detallada y precisa. Además, estas normas están sujetas al control de constitucionalidad, lo que significa que pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional si se considera que vulneran los derechos y principios establecidos en la Constitución.

2.2.5.3. Normas de menor jerarquía. En el ordenamiento jurídico peruano, las normas de menor jerarquía se encuentran subordinadas a las normas de mayor jerarquía, como la Constitución y las leyes. Estas normas suelen ser emitidas por autoridades con competencia limitada y tienen un alcance específico dentro del sistema legal.

Entre las normas de menor rango se incluyen los reglamentos, los decretos legislativos y los decretos supremos. Los reglamentos son disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo para poner en práctica las leyes, y deben estar en armonía con estas últimas. Los decretos legislativos, por su parte, son normas con fuerza de ley dictadas por el presidente de la República en ejercicio de facultades delegadas por el Congreso, y tienen un carácter excepcional y temporal. Los decretos supremos son disposiciones emitidas por el presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y tienen un ámbito de aplicación más limitado que los decretos legislativos.

Estas normas de menor jerarquía deben respetar los principios y valores consagrados en la Constitución y en las leyes, y no pueden contradecirlas ni exceder sus límites de competencia. En caso de existir alguna contradicción entre una norma de menor jerarquía y una norma de mayor jerarquía, prevalecerá esta última.

Las normas de menor jerarquía cumplen un papel importante en la regulación de aspectos específicos de la vida jurídica y administrativa del país, pero su validez y aplicabilidad están condicionadas por su conformidad con las normas de mayor jerarquía. De esta manera, se garantiza la coherencia y cohesión del ordenamiento jurídico peruano y se protegen los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

2.2.5.4. Relación entre las normas del ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico peruano, las normas legales se encuentran interrelacionadas de diversas maneras, lo que configura una estructura jerárquica que determina su validez y aplicabilidad.

Esta relación entre las normas se basa en principios fundamentales que establecen la jerarquía normativa y la coordinación entre las distintas fuentes del derecho.

En primer lugar, la Constitución se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico y funciona como norma suprema, por encima de cualquier otra disposición legal. Todas las normas deben estar en concordancia con la Constitución, y aquellas que contravengan sus preceptos pueden ser declaradas inconstitucionales y, por lo tanto, nulas y sin efecto.

A continuación de la Constitución, se encuentran las leyes, que son normas con rango de ley dictadas por el Congreso de la República. Estas leyes deben respetar los principios y valores consagrados en la Constitución y no pueden contradecirla. En caso de existir alguna contradicción entre una ley y la Constitución, prevalecerá la norma constitucional.

Por otro lado, existen otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos legislativos y los decretos supremos, entre otros. Estas normas deben estar subordinadas a la Constitución y a las leyes, y no pueden contravenirlas ni exceder sus límites de competencia.

La relación entre las normas del ordenamiento jurídico se fundamenta en el principio de jerarquía normativa, que establece el grado de supremacía de cada norma dentro del sistema legal. Este principio garantiza la coherencia y cohesión del ordenamiento jurídico, así como la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

2.2.5.5. Implicaciones de la jerarquía normativa en el sistema legal. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y prevalece sobre cualquier otra disposición normativa. Esto implica que todas las leyes, reglamentos y demás actos normativos deben estar en concordancia con los principios y valores constitucionales.

Cualquier normativa que viole lo establecido en la Constitución puede ser declarada inconstitucional y, en consecuencia, nula y sin efecto. La jerarquía normativa habilita a los órganos competentes, como el Tribunal Constitucional, para ejercer el control de constitucionalidad sobre las normas de rango inferior. Este control asegura la coherencia y la supremacía de la Constitución, garantizando que ninguna normativa infrinja los derechos y principios fundamentales establecidos en ella. Las normas de menor jerarquía deben interpretarse de acuerdo con la Constitución y las leyes de rango superior. Esto significa que su aplicación y alcance deben estar en armonía con los principios y valores establecidos en las normas superiores.

La interpretación conforme contribuye a asegurar la coherencia y la unidad del sistema legal. La jerarquía normativa también implica el acatamiento de la división de poderes consagrada en la Constitución. Cada órgano del Estado tiene atribuciones específicas y debe operar dentro de los límites establecidos por las normas de mayor jerarquía. Esto ayuda a preservar el equilibrio y la separación de poderes en el sistema político y legal del país.

2.2.6. Control de Constitucionalidad

Veamos el procedimiento que se sigue en algunos países como Ecuador y Colombia; en el vecino país del Ecuador, la máxima instancia de control es la Corte Constitucional, siendo competente para actuar de oficio el control constitucional de la declaratoria de los estados de excepción, cuando estos suspendan derechos constitucionales, siendo sus sentencias de carácter definitivo e inapelable. El control Constitucional para Cifuentes Muñoz (2002) tiene por objeto:

Garantizar el respeto de los derechos constitucionales y vigilar la separación y equilibrio de poderes, en este sentido la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional (en adelante LOGJC), mandata efectuar un control, formal y material de los decretos emitidos en un estado de excepción”

El control formal, procede en relación a la declaratoria de estados de emergencia por el presidente de la República y la expedición de medidas complementarias, se trata por tanto de un control bidimensional, precisado en los Artículos N° 120 y 122 de la LOGJC; según lo estipulado en el Art. N° 120 de la precitada Ley, la Corte Constitucional debe verificar que la declaratoria de los estados de excepción cumplan con los requisitos:

1. Se procede a la identificación de los acontecimientos relevantes y la causal constitucional invocada.
2. Se justifica la declaración teniendo en cuenta la situación y la normativa constitucional aplicable.
3. Se establece el ámbito territorial y temporal de la declaración, especificando dónde y durante cuánto tiempo estará en vigor.
4. Se listan los derechos que podrían ser objeto de limitación, si fuera necesario, indicando las razones y condiciones para ello.
5. Se realizan las notificaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales aplicables, garantizando una comunicación adecuada a las partes involucradas.

En el Art. N° 122 de la LOGJC, respecto a las medidas complementarias, precisa que la Corte Constitucional le Corresponde verificar:

1. Se dispone que las medidas sean establecidas a través de decreto, siguiendo los procedimientos establecidos por el sistema jurídico.
2. Se dispone que las medidas sean establecidas a través de decreto, siguiendo los procedimientos establecidos por el sistema jurídico.

Respecto al control material, referido a los decretos de declaratoria de los estados de emergencia, en el Art. N° 121 de la LOGJC, se precisa que a la Corte Constitucional le corresponde verificar:

1. Se verifica que los hechos expuestos en la motivación efectivamente hayan ocurrido.
2. Se determina que los hechos que fundamentan la declaración correspondan a una agresión, un conflicto armado internacional o interno, una grave conmoción interna, una calamidad pública o un desastre natural.
3. Se constata que los hechos que motivan la declaración no pueden ser resueltos mediante el régimen constitucional ordinario.
4. Se asegura que la declaración se emita dentro de los límites temporales y espaciales establecidos en la Constitución.

Respecto a las medidas complementarias, en el Art. N° 123 de la LOGJC, Corresponde la Corte Constitucional verificar que:

1. Las medidas adoptadas deben ser estrictamente necesarias para hacer frente a los hechos que motivaron la declaración.
2. Las medidas deben ser proporcionales al hecho que dio origen a la declaración.

3. Debe existir una relación directa e inmediata entre los hechos que llevaron a la declaración y las medidas tomadas.
4. Las medidas deben ser adecuadas para hacer frente a los hechos que dieron lugar a la declaración.
5. No debe haber otra medida disponible que tenga un impacto menor en términos de derechos y garantías.
6. Las medidas no deben afectar el núcleo esencial de los derechos constitucionales, y deben respetar el conjunto de derechos inviolables.
7. Las medidas no deben interrumpir ni alterar el funcionamiento normal del Estado.

Se procede, como se evidencia, a verificar el cumplimiento del Artículo N° 164 de la Constitución Política del Ecuador, que establece los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.

Respecto a los estados de excepción, en la Constitución Política de Colombia (en adelante CPC) (M. García & Uprimny, 2021) precisan que: “el mandatario de la República, posee competencia para declarar tres tipos de estado: 1) guerra exterior, 2) conmoción interior y 3) emergencia económica, social y ecológica; considerando la naturaleza de la crisis o la emergencia.”

En el Art. N° 212 de la CPC se precisa que el presidente, con la firma de los ministros, puede declarar estado de guerra interior, precisando medidas para repeler la agresión, defender la soberanía y procurar el retorno a la normalidad.

El Artículo N° 213 de la Constitución colombiana establece que en caso de una grave perturbación del orden público que afecte la estabilidad institucional, la seguridad o la convivencia,

el presidente, con el respaldo de los ministros, puede declarar el estado de conmoción en todo el territorio nacional o en parte de él, por un período no superior a 90 días. Esta declaración puede ser prorrogada por dos períodos iguales, siendo que la extensión del segundo período requiere la opinión del Senado de la República.

El Artículo N° 215 de la Norma Normarun colombiana otorga al mandatario la facultad de declarar estado de emergencia por situaciones distintas a las contempladas en los Artículos N° 212 y 213, siempre que dichas circunstancias representen una perturbación o amenaza a los órdenes social, económico o ecológico. Esta declaración puede tener una duración máxima de 90 días calendario.

La naturaleza reglada, excepcional y limitada de los estados de excepción demanda un control constitucional sobre los decretos legislativos emitidos por el presidente de la República. Conforme al Artículo N° 214, el Gobierno envía a la Corte Constitucional (en adelante CC) los decretos legislativos con el propósito de que se analice su conformidad con la Constitución.

El alcance del control de constitucionalidad, en virtud del Art. N° 241 de la CPC, implica controlar la declaratoria del estado de excepción, así como de las medidas complementarias.

La jurisprudencia constitucional, precisa dos tipos de control, formal y material; el de tipo formal implica verificar que los decretos legislativos expedido por el máximo mandatario, cumplan con las exigencias siguientes:

1. Deben estar firmados por el presidente y todos los ministros.
2. Deben ser emitidos durante la vigencia y en desarrollo del respectivo estado de excepción.
3. Deben estar debidamente fundamentados.

4. Deben especificar claramente su duración.
5. Deben ser remitidos a la Corte Constitucional el día siguiente de su adopción para una revisión automática de su constitucionalidad.
6. Deben determinar el ámbito territorial en el que se aplicarán.

El Control material, implica realizar diez juicios o escrutinios como:

1. De acuerdo con el Artículo N° 10 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción (LEEE), las medidas adoptadas mediante decretos legislativos deben estar específicamente dirigidas a contrarrestar las causas de la perturbación y evitar la propagación de sus efectos, lo cual constituye el juicio de finalidad.
2. Durante el estado de excepción, según lo establecido en el Artículo N° 47 de la LEEE, el Gobierno está facultado para emitir decretos con fuerza de ley que se orienten exclusivamente a resolver la crisis y evitar que esta se agrave, lo cual corresponde al juicio de conexidad material.
3. Como complemento al control formal de constitucionalidad, el juicio de motivación suficiente, conforme al Artículo N° 8 de la LEEE, exige que el presidente de la República presente justificaciones adecuadas para las medidas adoptadas en los decretos de excepción, especificando los motivos detrás de cada restricción de los derechos constitucionales.
4. El juicio de ausencia de arbitrariedad, cuya finalidad es verificar que los decretos legislativos no violen las prohibiciones para el ejercicio de las facultades extraordinarias, se rige por las disposiciones establecidas en la Constitución, la LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos.

5. Conforme a los artículos 93 y 214 de la CPC, se establece que ciertos derechos permanecen inalterables incluso en situaciones de estado de excepción, lo cual se denomina juicio de intangibilidad.
6. Para asegurar que las medidas adoptadas no contravengan la Constitución ni los tratados internacionales, se realiza el juicio de no contradicción específica, el cual implica verificar la coherencia de los decretos legislativos con el marco normativo correspondiente.
7. Según el Artículo N° 12 de la LEEE, el juicio de incompatibilidad requiere que los decretos legislativos que suspendan leyes expliquen las razones de dicha incompatibilidad con el estado de excepción correspondiente.
8. Determinar la necesidad de las medidas adoptadas durante el estado de excepción, según el Artículo N° 11 de la LEEE, es el objetivo del juicio de necesidad, el cual busca asegurar que estas sean indispensables para alcanzar los objetivos justificadores del estado de excepción.
9. El juicio de proporcionalidad, establecido en el Artículo N° 13 de la LEEE, busca garantizar que las medidas adoptadas guarden una relación adecuada con la gravedad de los hechos, limitando cualquier restricción a los derechos y libertades a lo estrictamente necesario.
10. Finalmente, el juicio de no discriminación, delineado en el Artículo N° 14 de la LEEE, se encarga de garantizar que las medidas adoptadas durante los estados de excepción no discriminen a ninguna persona. (Gargarella & Roa Roa, 2020)

En el caso peruano, en el Nuevo Código Procesal Constitucional, en el Título VI, referido a los Procesos de Acción Popular, Inconstitucionalidad y Compenencial, en el Capítulo I, Art. N°

74 se precisa, que la finalidad de los procesos de Acción Popular y de Inconstitucionalidad, es la defensa de la constitución y la ley frente a infracciones contra su jerarquía; se agrega que esta vulneración puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial; así como por la forma y el fondo (Beaumont, 2022)

El Tribunal Constitucional (2005) ha precisado que una infracción constitucional por la forma, puede presentar en tres supuestos:

1. Cuando no se sigue el procedimiento legislativo establecido en la Constitución para su aprobación.
2. Cuando trata sobre un tema que la Constitución ha reservado exclusivamente a otra fuente específica del derecho.
3. Cuando es emitida por un órgano que no tiene competencia para hacerlo.

Se puntualiza que el proceso de inconstitucionalidad implica un control abstracto de las normas con rango de ley, siendo el parámetro capital la constitución, en tanto norma Normarun.

Se precisa que en cuanto al formalidad, existen requisitos ex ante y ex post; en el primer rubro se ubica el refrendo del presidente del Gabinete Ministerial (Art. N° 123, Inc. 3 y Art. N° 120 de la CP); mientras que, en el segundo rubro, está la obligación del máximo mandatario de la República, de dar cuenta al Congreso de la República (Art. N° 118 Inc. 8 y 19)

En cuanto a los requisitos sustanciales, estos se refieren al cumplimiento de criterios tanto endógenos como exógenos a la norma, es decir, relacionados tanto con la materia que regula el decreto como con las circunstancias externas que justifican su emisión. En lo que respecta al primer aspecto, el Artículo 118 Inciso 8 de la Constitución Política establece que los decretos supremos regulan normas con rango de ley y organizan actividades funcionales multisectoriales a nivel

nacional. En cuanto a los segundos, se refieren a las circunstancias fácticas que fundamentan su adopción.

En interpretación sistemática, entre los artículos N° 118 Inc. 8, N° 137 y el Inc. c del Art. N° 91 del Congreso de la República, se ha establecido las circunstancias fácticas o criterios sustanciales externos que deben justificar la expedición de decretos supremos (Tribunal Constitucional, 2003).

1. Excepcionalidad: implica que la norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, las cuales deben ser evaluadas en base a información fáctica, que justifique su promulgación.
2. Necesidad: las condiciones circunstanciales deben demandar la urgencia, que implica prevenir daños o evitar que estos resulten irreparables; si se sigue los procedimientos legislativos ordinarios.
3. Transitoriedad: el carácter extraordinario de las medidas, le asigna una vigencia temporal necesaria, para revertir la coyuntura.
4. Generalidad: la expedición y aplicación de la medida, no puede circunscribirse a intereses particulares, sino que debe orientarse a satisfacer el interés general.
5. Conexidad: implica la existencia de vínculo incuestionable entre la medida expedida y aplicada y la coyuntura extraordinaria existente.

2.2.6.1. Comparación entre Control de Constitucionalidad en Ecuador y Colombia.

En Ecuador, la máxima instancia de control constitucional es la Corte Constitucional, competente para actuar de oficio en el control constitucional de la declaratoria de estados de excepción. Sus sentencias son definitivas e inapelables. El control formal y material se realiza mediante la verificación de requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y

Control Constitucional (LOGJC). En Colombia, el presidente tiene competencia para declarar tres tipos de estado de excepción, con medidas específicas para cada uno. El control de constitucionalidad se lleva a cabo por la Corte Constitucional, verificando tanto la declaratoria como las medidas complementarias.

En Ecuador, se aplican criterios como la identificación de hechos y causales constitucionales, justificación de la declaratoria, ámbito temporal y territorial, derechos susceptibles de limitación, entre otros. En Colombia, se evalúa la finalidad, conexidad material, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, entre otros juicios, para verificar la constitucionalidad de los decretos legislativos.

En Ecuador, se asegura el acatamiento de los derechos fundamentales y la preeminencia constitucional mediante el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Mientras tanto, en Colombia, se emplean criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad para fundamentar las medidas adoptadas, garantizando así la coherencia con los estándares constitucionales y la protección de los derechos humanos.

Se identifican similitudes en cuanto a la competencia de las instituciones y la aplicación de criterios de control constitucional. Sin embargo, existen diferencias en los procedimientos y criterios específicos utilizados en cada país.

Ambos sistemas de control de constitucionalidad tienen como objetivo asegurar el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad de las medidas tomadas durante estados de excepción. La efectividad y legitimidad de estos mecanismos están ligadas a su aplicación correcta y al respeto de los principios constitucionales.

Las discrepancias identificadas pueden tener consecuencias en la salvaguarda de los derechos fundamentales y la preservación del Estado de Derecho. Se sugiere reforzar los mecanismos de control constitucional y fomentar la armonización de criterios y procedimientos en ambos países.

El análisis comparativo del control de constitucionalidad en Ecuador y Colombia destaca la importancia de estos mecanismos para el funcionamiento democrático y jurídico de ambos países, resaltando la necesidad de garantizar su eficacia y legitimidad en la protección de los derechos y libertades fundamentales.

2.3. Manual de Redacción de Decretos Legislativos

El "Manual de Técnica Legislativa" del Congreso de la República del Perú es una herramienta fundamental para la redacción y elaboración de textos legislativos.

2.3.1. Objetivos del Manual

El manual tiene como objetivo proporcionar directrices claras para la redacción de textos normativos, asegurando que sean coherentes, claros, precisos y que cumplan con los requisitos constitucionales. Está diseñado para ayudar a los legisladores, abogados y redactores a crear leyes y decretos que sean fácilmente comprensibles y aplicables.

- Asegurar la Claridad y Precisión de los Textos Legislativos.
- Garantizar la Coherencia y Consistencia del Ordenamiento Jurídico.
- Facilitar la Interpretación y Aplicación de las Normas.
- Proveer Directrices para la Estructuración de los Textos Legislativos.
- Mejorar la Calidad del Proceso Legislativo.

2.3.2. Contenido del Manual

El manual abarca varios aspectos importantes de la redacción legislativa, incluyendo:

- Estructura de los Textos Legislativos.
- Claridad y Precisión.
- Unidad y Consistencia.
- Aspectos Formales.
- Revisión y Evaluación.

2.3.3. Importancia del Manual de Técnica Legislativa

El "Manual de Técnica Legislativa" del Congreso de la República del Perú es una herramienta fundamental para garantizar la calidad y efectividad de los textos normativos en el país. Este manual tiene como objetivo principal asegurar que los decretos legislativos y otras normas sean redactados con claridad, precisión, coherencia y consistencia, lo que facilita su interpretación y aplicación por parte de todos los destinatarios, incluidos ciudadanos, funcionarios públicos y profesionales del derecho. La claridad en la redacción evita ambigüedades y malentendidos, mientras que la precisión asegura que las normas reflejen exactamente la intención del legislador, evitando interpretaciones erróneas y garantizando la correcta aplicación de la ley.

El manual también destaca la importancia de la coherencia y la consistencia en el ordenamiento jurídico. La coherencia interna de los textos normativos y su consistencia con el resto del marco legal son cruciales para evitar contradicciones y redundancias, facilitando una mejor comprensión y aplicación de las leyes. Mantener un estilo uniforme en la redacción legislativa no solo contribuye a la profesionalidad de los documentos legales, sino que también mejora la accesibilidad y la facilidad de uso para todos los interesados.

Además, el manual es esencial para estandarizar la redacción legislativa, estableciendo procedimientos y formatos específicos para la elaboración de normas. Esto incluye la organización de las secciones y artículos dentro de una ley o decreto, el uso adecuado de numeraciones y encabezados, y la presentación de citas y referencias normativas. Estas directrices aseguran que todos los documentos legislativos cumplan con criterios de calidad reconocidos, mejorando así la eficiencia y la profesionalidad del proceso legislativo.

Por otro lado, el "Manual de Técnica Legislativa" también sirve como una herramienta de capacitación para legisladores, abogados y redactores, ayudándoles a desarrollar las habilidades necesarias para crear textos normativos de alta calidad. La capacitación en estas habilidades es crucial para asegurar que las leyes y decretos sean efectivas y justas, lo que a su vez mejora la gobernanza y la administración pública en el país.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes del manual es su contribución a la garantía de constitucionalidad. Las directrices proporcionadas ayudan a asegurar que los textos normativos cumplan con los requisitos formales y materiales de la constitución, evitando posibles conflictos legales y garantizando el respeto a los derechos fundamentales.

2.4. Tipos de Control de Constitucionalidad

El control de constitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se garantiza que las leyes y actos normativos sean conformes con la Constitución. Este control puede ser formal, cuando se verifica el cumplimiento de los procedimientos legislativos, o material, cuando se evalúa la compatibilidad de las normas con los derechos y principios fundamentales.

Según **Donayre Montesinos (2020)**, el control de constitucionalidad puede ser formal y material. El control formal se enfoca en la validez de los procedimientos y formas en la elaboración

de las normas, mientras que el control material evalúa el contenido de las normas en relación con los derechos y principios constitucionales.

El control formal asegura que los procedimientos legislativos sigan los pasos establecidos por la Constitución, verificando que se hayan cumplido las etapas requeridas para la promulgación de una ley. Por otro lado, el control material examina si el contenido de las normas respeta los derechos fundamentales y principios constitucionales, garantizando que las leyes no contradigan la Constitución en su esencia (Donayre Montesinos, 2020).

El control de constitucionalidad en Perú es ejercido principalmente por el Tribunal Constitucional. Este órgano tiene la facultad de revisar las leyes y decretos para asegurar su conformidad con la Constitución. El mecanismo para evitar que las normas contravengan la Constitución incluye la acción de inconstitucionalidad, que permite impugnar leyes que se consideran contrarias a la Constitución.

2.4.1. Contenido formal

El contenido formal del control de constitucionalidad se refiere a la evaluación de los aspectos procedimentales y estructurales de las normas jurídicas, asegurando que se hayan seguido los procesos legislativos y administrativos adecuados conforme a la Constitución. El contenido formal del control de constitucionalidad es un aspecto crucial que garantiza que las normas jurídicas se elaboren y promulguen siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución. Este control se centra en verificar que se cumplan todas las etapas del proceso legislativo, desde la presentación de un proyecto de ley hasta su promulgación final. Este proceso incluye varias fases como la discusión en comisiones, la aprobación en el pleno del Congreso y la sanción presidencial.

Para el maestro Atienza (2007) conceptualiza el contenido formal como:

La argumentación como una serie de enunciados sin interpretar (en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión); responde al problema de si a partir de enunciados –premisas– de tal forma se puede pasar a otro –conclusión– de otra determinada forma; los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia; y lo que suministra son esquemas, formas, de los argumentos. (p. 208)

En este contexto, resulta crucial reconocer que la validez de un argumento jurídico no depende únicamente de la verdad de las premisas o de la conclusión, sino también de la corrección de las inferencias lógicas que se utilizan para conectarlas. Las reglas de inferencia, en tanto criterios de corrección, desempeñan un papel fundamental en la evaluación de la solidez argumentativa dentro del campo del derecho constitucional.

Al considerar que el contenido formal de la argumentación consiste en esquemas y formas de argumentos, Atienza resalta la importancia de identificar y analizar las estructuras subyacentes que sustentan los razonamientos jurídicos. Este enfoque resulta especialmente relevante en el ámbito constitucional, donde la interpretación y aplicación de normas fundamentales requiere un escrutinio detallado de la coherencia y la validez lógica de los argumentos presentados ante los tribunales constitucionales.

“En el Derecho, los argumentos no nos interesan únicamente por su forma, por su estructura. Por eso, una clasificación de los argumentos desde un punto de vista puramente «lógico» tiene un valor limitado”. (Atienza Rodríguez, 2013) Desde una perspectiva jurídica, el análisis del contenido formal de la argumentación no solo implica la identificación de patrones

lógicos, sino también la evaluación de su pertinencia y adecuación a los principios y normas constitucionales. En este sentido, los juristas constitucionales deben estar atentos no solo a la estructura formal de los argumentos, sino también a su consonancia con los valores y principios fundamentales consagrados en la Constitución.

Una parte importante del control formal es asegurar que las leyes y decretos respeten los requisitos de publicidad, es decir, que se publiquen en el diario oficial para que todos los ciudadanos puedan conocerlas. La publicidad de las leyes es esencial para la transparencia y la participación democrática, ya que permite a la ciudadanía estar informada sobre las normas que rigen su conducta.

Otro aspecto fundamental del control formal es la deliberación adecuada en las cámaras legislativas. Los proyectos de ley deben ser discutidos y debatidos exhaustivamente para asegurar que todas las opiniones y perspectivas sean consideradas. Esto incluye la posibilidad de enmiendas y modificaciones al texto original del proyecto de ley, lo que permite mejorar y perfeccionar la normativa antes de su aprobación final.

Además, el control formal implica verificar que las votaciones en las cámaras legislativas se realicen conforme a las reglas establecidas, asegurando que se alcance el quórum necesario y que las decisiones se tomen por las mayorías requeridas. Esto garantiza la legitimidad y la representatividad de las decisiones legislativas, evitando que se promulguen leyes sin el debido respaldo parlamentario.

El control formal también se extiende a la verificación de la sanción y promulgación de las leyes por parte del presidente de la República. El presidente debe revisar y sancionar las leyes aprobadas por el Congreso, y tiene la facultad de observarlas y devolverlas al Congreso para una

nueva discusión si considera que contienen errores o que no cumplen con los principios constitucionales.

En el ámbito del control formal, también es crucial la revisión por parte del Tribunal Constitucional. Este órgano tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos que no cumplan con los procedimientos establecidos, asegurando así la supremacía de la Constitución. El Tribunal Constitucional actúa como guardián de la Constitución, garantizando que todas las normas se ajusten a los principios y valores fundamentales del ordenamiento jurídico.

El debate parlamentario es otro aspecto fundamental del control formal. Los proyectos de ley deben ser sometidos a un riguroso escrutinio en las comisiones y el pleno del Congreso. Esto incluye la posibilidad de presentar enmiendas, discutir los méritos y defectos del proyecto, y asegurar que todas las voces sean escuchadas. Este proceso deliberativo garantiza que las leyes sean el resultado de un consenso informado y reflejen una amplia gama de perspectivas.

Las votaciones en las cámaras legislativas deben seguir normas claras y estrictas. Se debe asegurar que se alcance el quórum necesario y que las decisiones se tomen por las mayorías requeridas, evitando así la aprobación de leyes sin el respaldo adecuado. Esto protege la legitimidad de las decisiones legislativas y garantiza que reflejen la voluntad de los representantes electos.

La sanción presidencial es otra etapa crítica en el control formal. El presidente de la República tiene la facultad de revisar y sancionar las leyes aprobadas por el Congreso, y puede observarlas si considera que contienen errores o que no cumplen con los principios constitucionales. Este poder de veto es un mecanismo de control adicional que contribuye a la calidad y constitucionalidad de las normas.

El Tribunal Constitucional juega un papel clave en el control formal. Este órgano tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y decretos, asegurando que se ajusten a los procedimientos establecidos en la Constitución. La acción de inconstitucionalidad permite impugnar normas que no cumplan con estos requisitos, protegiendo así la supremacía de la Constitución y el Estado de Derecho.

El control formal no solo asegura la legalidad del proceso legislativo, sino que también refuerza la separación de poderes. Al establecer controles y equilibrios entre los diferentes poderes del Estado, se evita la concentración de poder y se protege la democracia. La supervisión judicial y política de los procedimientos legislativos es esencial para mantener el equilibrio institucional y asegurar que todas las ramas del gobierno actúen dentro de sus límites constitucionales.

Además, el control formal contribuye a la estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Al garantizar que las normas se promulguen de acuerdo con procedimientos claros y establecidos, se evita la arbitrariedad y se promueve la consistencia en la creación de leyes. Esto facilita la comprensión y aplicación de las normas por parte de los ciudadanos y las autoridades, contribuyendo a un sistema legal más justo y predecible.

El análisis del contenido formal de la argumentación no solo implica la identificación de patrones lógicos, sino también la evaluación de su pertinencia y adecuación a los principios y normas constitucionales. Los juristas constitucionales deben ser capaces de identificar las estructuras formales de los argumentos y evaluar su validez en función de su conformidad con los valores y principios fundamentales consagrados en la Constitución.

2.4.2. Contenido material

En 2007, Atienza ha presentado otro argumento:

La concepción material, lo esencial no es la forma de los enunciados, sino aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos (los hechos naturales o institucionales a los que se refieren); responde al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer, y consiste por ello, esencialmente, en una teoría de las premisas: de las razones para creer en algo o para realizar o tener la intención de realizar alguna acción; sus criterios de corrección no pueden, por ello, tener un carácter puramente formal. (p. 209)

Este enfoque nos conduce a enfrentarnos a la cuestión de qué debemos creer o qué acciones debemos emprender. Es decir, nos sumerge en el corazón de la toma de decisiones y la determinación de la validez de nuestras acciones desde una perspectiva legal y constitucional. En este sentido, la teoría de las premisas se convierte en una herramienta esencial para comprender las razones que sustentan nuestras creencias y acciones, así como para evaluar su corrección y validez.

Diferenciándose del contenido formal, la concepción material nos lleva más allá de las meras estructuras lógicas de los argumentos, al enfocarse en las razones subyacentes que justifican nuestras creencias y acciones. En el contexto constitucional, esto implica un análisis profundo de los fundamentos fácticos e institucionales que respaldan las normas y decisiones jurídicas.

Al destacar que los criterios de corrección en esta concepción no pueden tener un carácter puramente formal, Atienza nos insta a considerar la complejidad y la diversidad de factores que intervienen en la evaluación de la validez de los argumentos jurídicos. En lugar de limitarse a reglas lógicas abstractas, este enfoque nos exige tener en cuenta la relevancia y la coherencia de las premisas en relación con el contexto fáctico y normativo en el que operan.

El control material exige una evaluación de la coherencia y relevancia de las premisas en relación con el contexto fáctico y normativo. Las normas deben ser consistentes con los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto incluye la proporcionalidad de las medidas, que deben ser adecuadas y necesarias para lograr un fin legítimo sin imponer restricciones excesivas a los derechos fundamentales.

Uno de los aspectos clave del control material es la proporcionalidad. Esta doctrina exige que las medidas legislativas sean adecuadas para alcanzar un objetivo legítimo, necesarias en el sentido de que no existen alternativas menos restrictivas, y proporcionadas en un sentido estricto, es decir, que los beneficios de la medida superen los daños causados a los derechos afectados. Esta evaluación es crucial para asegurar que las leyes no impongan restricciones indebidas a los derechos fundamentales.

El análisis del contenido material también implica una revisión de la razonabilidad de las normas. Las leyes deben ser razonables en su formulación y aplicación, es decir, deben ser coherentes con los principios de justicia, equidad y buena fe. La razonabilidad asegura que las leyes no sean arbitrarias y que se fundamenten en razones válidas y justificables.

El control material es llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, que evalúa si las normas respetan los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Este órgano tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes que no cumplan con estos requisitos, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y asegurando la supremacía de la Constitución.

Además, el control material incluye la interpretación de los derechos fundamentales en un sentido dinámico y evolutivo, considerando las necesidades y contextos cambiantes de la sociedad.

Esto permite que la Constitución se adapte a nuevas realidades y que los derechos fundamentales se interpreten de manera que promuevan el desarrollo humano y la justicia social.

En la práctica, el control material implica una revisión exhaustiva de los contextos y circunstancias que rodean la promulgación de una norma. Esto incluye un análisis de los datos empíricos, las opiniones de expertos y las evidencias científicas que fundamentan las decisiones legislativas. Este enfoque garantiza que las leyes se basen en información precisa y actualizada, contribuyendo a su legitimidad y efectividad.

El control material también se encarga de asegurar que las normas jurídicas promuevan el bienestar general y protejan los intereses de los grupos más vulnerables. Esto se logra mediante un análisis de impacto que evalúa cómo las leyes afectan a diferentes sectores de la sociedad, garantizando que no se perpetúen desigualdad. El contenido material del control de constitucionalidad se centra en la evaluación de la sustancia de las normas jurídicas, garantizando que estas respeten los derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución. Este tipo de control examina si el contenido de las normas es compatible con los valores constitucionales y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Una parte esencial del control material es la doctrina de la proporcionalidad. Esta doctrina exige que las medidas legislativas sean adecuadas para alcanzar un objetivo legítimo, necesarias en el sentido de que no existen alternativas menos restrictivas, y proporcionadas en un sentido estricto, es decir, que los beneficios de la medida superen los daños causados a los derechos afectados. Esta evaluación asegura que las leyes no impongan restricciones indebidas a los derechos fundamentales.

El análisis de la razonabilidad de las normas también es crucial en el control material. Las leyes deben ser razonables en su formulación y aplicación, lo que implica que sean coherentes con los principios de justicia, equidad y buena fe. La razonabilidad asegura que las leyes no sean arbitrarias y que se fundamenten en razones válidas y justificables.

El Tribunal Constitucional es el encargado de llevar a cabo el control material, evaluando si las normas respetan los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Este órgano tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes que no cumplan con estos requisitos, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y asegurando la supremacía de la Constitución.

Además, el control material incluye la interpretación de los derechos fundamentales de manera dinámica y evolutiva, adaptándose a nuevas realidades y contextos sociales. Esto permite que la Constitución se mantenga relevante y que los derechos fundamentales se interpreten de forma que promuevan el desarrollo humano y la justicia social.

El control material también implica una revisión exhaustiva de los contextos y circunstancias que rodean la promulgación de una norma, incluyendo el análisis de datos empíricos y evidencias científicas que fundamentan las decisiones legislativas. Este enfoque garantiza que las leyes se basen en información precisa y actualizada, contribuyendo a su legitimidad y efectividad.

Asimismo, el control material se encarga de asegurar que las normas jurídicas promuevan el bienestar general y protejan los intereses de los grupos más vulnerables. Esto se logra mediante un análisis de impacto que evalúa cómo las leyes afectan a diferentes sectores de la sociedad, garantizando que no se perpetúen desigualdades ni se causen injusticias.

2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y Normas Complementarias

El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, emitido en el contexto de la pandemia de la covid-19, y sus normas complementarias, constituyen un marco legal relevante que impacta directamente en los derechos constitucionales de los ciudadanos, particularmente en lo concerniente al derecho de reunión.

2.5.1. Contexto y Antecedentes del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

El contexto en el cual se promulgó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM fue notablemente desafiante, marcado por la pandemia de COVID-19 que afectó a nivel mundial. En Perú, la crisis sanitaria generada por la propagación del virus planteó serios desafíos para la gestión gubernamental, especialmente en términos de salud pública y control de la propagación del virus. Ante esta situación, el Gobierno se vio obligado a adoptar medidas extraordinarias para contener la enfermedad y proteger a la población.

Los antecedentes que llevaron a la emisión de este decreto se remontan a los primeros casos de COVID-19 detectados en el país y la rápida expansión del virus. Ante el aumento exponencial de casos y la amenaza que representaba para el sistema de salud, el Gobierno peruano tomó la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Esta medida tuvo como objetivo principal establecer restricciones y medidas de prevención para contener la propagación del virus y proteger la salud de los ciudadanos.

Es importante destacar que el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se enmarca en un contexto de urgencia y necesidad de tomar medidas rápidas y efectivas para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, su adopción también suscitó debates y cuestionamientos en torno a su legalidad, alcance y efectividad, así como respecto a su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.5.2. Disposiciones Clave del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM establece una serie de disposiciones fundamentales destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

2.5.2.1. Declaratoria de Estado de emergencia. El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM emite una declaratoria de estado de emergencia en todo el territorio nacional, reconociendo la gravedad de la situación derivada de la pandemia de COVID-19.

Esta medida se adopta como respuesta urgente y necesaria para enfrentar la propagación del virus y sus consecuencias para la salud pública. La declaratoria de estado de emergencia otorga al Gobierno la facultad de adoptar medidas extraordinarias, tales como restricciones a la movilidad, suspensión de actividades no esenciales y la implementación de protocolos de prevención y control sanitario. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de proteger la vida y la salud de la población, así como de garantizar la capacidad del sistema de salud para atender la emergencia.

La duración inicial del estado de emergencia, establecida en el decreto, es de 15 días, aunque puede ser prorrogada si persisten las circunstancias que motivaron su declaración. Esta medida excepcional busca contener la propagación del virus, mitigar sus efectos sobre el sistema de salud y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

No obstante, la declaración de estado de emergencia también presenta significativos desafíos en lo que respecta a los derechos individuales y las garantías constitucionales. Es crucial hallar un equilibrio entre la protección de la salud pública y el respeto a las libertades fundamentales, garantizando que las medidas implementadas sean proporcionales, necesarias y estén adecuadamente fundamentadas.

2.5.2.2. Restricciones a la movilidad. El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM establece restricciones significativas a la movilidad de las personas como parte de las medidas para contener la propagación de la covid-19. Estas restricciones incluyen la imposición de toques de queda, la limitación de los desplazamientos no esenciales y la implementación de controles fronterizos y de acceso a determinadas áreas.

Las medidas de restricción de la movilidad buscan reducir la interacción social y prevenir la transmisión del virus, especialmente en zonas de alta incidencia. Se prohíben las reuniones y actividades sociales que impliquen aglomeraciones de personas, y se insta a la población a permanecer en sus hogares salvo por motivos esenciales, como la compra de alimentos o la atención médica.

Estas restricciones tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el funcionamiento de la economía, pero se consideran necesarias para proteger la salud pública y evitar la saturación de los servicios de salud. Sin embargo, es importante garantizar que las medidas sean proporcionales, no discriminatorias y estén basadas en criterios científicos sólidos, así como que se respeten los derechos fundamentales de la población en todo momento.

2.5.2.3. Suspensión de actividades. El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM contempla la suspensión temporal de diversas actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean consideradas esenciales para el funcionamiento del país durante el estado de emergencia.

Estas medidas buscan reducir la movilidad de la población y minimizar los riesgos de contagio en lugares de alta concentración de personas. Entre las actividades suspendidas se encuentran los eventos masivos, como conciertos, festivales y competiciones deportivas, así como la operación de locales de entretenimiento, discotecas y casinos. También se restringe la apertura

de establecimientos comerciales no esenciales, como tiendas de ropa, centros comerciales y salones de belleza, con el fin de disminuir la interacción social y evitar la propagación del virus.

La suspensión de actividades comerciales y sociales representa un sacrificio significativo para los sectores afectados, pero se considera necesario para proteger la salud pública y contener la propagación de la covid-19. Es fundamental que estas medidas se apliquen de manera equitativa y se brinde apoyo económico a los trabajadores y empresas afectadas para mitigar los impactos negativos en la economía y en el empleo.

2.5.2.4. Medidas de prevención y control. El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM establece una serie de medidas de prevención y control destinadas a reducir la propagación del virus y proteger la salud pública durante el estado de emergencia. Estas medidas incluyen:

- *Uso obligatorio de mascarillas:* Se dispone el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos, así como en el transporte público y privado. Esta medida busca reducir el riesgo de transmisión del virus entre las personas y promover prácticas de higiene adecuadas.
- *Distanciamiento social:* Se recomienda mantener una distancia mínima de un metro entre personas para evitar el contacto cercano y reducir la posibilidad de contagio. Esta medida es especialmente importante en lugares concurridos como supermercados, bancos y centros de salud.
- *Lavado frecuente de manos:* Se insta a la población a lavarse las manos con agua y jabón de forma regular, especialmente después de estar en contacto con superficies compartidas o al regresar del exterior. En caso de no contar con agua y jabón, se recomienda el uso de desinfectante de manos a base de alcohol.

- *Desinfección de espacios públicos:* Se establecen protocolos para la desinfección regular de espacios públicos, como calles, parques y áreas comunes de edificios residenciales. Esta medida busca reducir la presencia del virus en el entorno urbano y minimizar el riesgo de contagio por contacto con superficies contaminadas.
- *Control de aforo en establecimientos:* Se limita el número de personas que pueden ingresar simultáneamente a establecimientos comerciales, restaurantes y otros espacios públicos para evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social. Esta medida contribuye a reducir la densidad de personas en lugares cerrados y minimiza el riesgo de transmisión del virus.

2.5.3. Normas complementarias y desarrollos posteriores

El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ha sido complementado y ampliado por una serie de normas adicionales y desarrollos posteriores que han surgido en respuesta a la evolución de la pandemia y las necesidades cambiantes de la situación.

El Gobierno ha emitido varios decretos supremos adicionales para complementar y modificar las disposiciones del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Estos decretos han abordado aspectos específicos de la gestión de la pandemia, como la restricción de ciertas actividades, la implementación de medidas adicionales de prevención y control, y la asignación de recursos para la atención de la emergencia sanitaria.

Los diferentes ministerios del Gobierno han emitido resoluciones ministeriales para establecer lineamientos y protocolos específicos en áreas como la salud, el transporte, la educación y el trabajo. Estas resoluciones complementan las disposiciones del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y proporcionan orientación detallada sobre la implementación de medidas preventivas y la gestión de la emergencia sanitaria en distintos sectores.

El Gobierno ha emitido directivas y comunicados oficiales dirigidos a la población en general, así como a sectores específicos como empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales. Estas comunicaciones contienen recomendaciones, instrucciones y orientaciones sobre el cumplimiento de las medidas de prevención y control, así como sobre el manejo de situaciones particulares relacionadas con la pandemia.

El Congreso de la República ha promulgado leyes específicas relacionadas con la gestión de la pandemia, la protección de la salud pública y el apoyo a sectores afectados por la crisis. Estas leyes han establecido disposiciones sobre temas como la atención médica, la protección de derechos laborales, la asistencia económica a familias vulnerables y la regulación de actividades comerciales durante la emergencia sanitaria.

Las autoridades gubernamentales, en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas, han implementado programas y planes de acción para abordar distintos aspectos de la emergencia sanitaria. Estos programas incluyen campañas de vacunación, estrategias de detección y seguimiento de casos, fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, distribución de ayuda humanitaria y promoción de medidas de autocuidado y prevención entre la población.

2.5.4. Impacto en los Derechos Constitucionales y el Estado Constitucional de Derecho

El impacto del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias en los derechos constitucionales y el Estado Constitucional de Derecho ha sido objeto de análisis y debate dentro de la comunidad jurídica y la sociedad en general.

2.5.4.1. Limitación de Derechos fundamentales. La limitación de derechos fundamentales durante el período de emergencia sanitaria, como consecuencia del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias, ha sido un tema de gran relevancia y debate en el contexto jurídico y social.

- *Restricción de la libertad de tránsito:* El decreto y las disposiciones posteriores han establecido medidas restrictivas de movilidad, como toques de queda, cuarentenas focalizadas y limitaciones a la circulación de personas y vehículos. Si bien estas medidas se han implementado con el objetivo de contener la propagación del virus, también han implicado una restricción significativa de la libertad de tránsito de los ciudadanos.
- *Suspensión de actividades económicas y sociales:* Con el fin de reducir la interacción social y mitigar el riesgo de contagio, se han suspendido temporalmente actividades económicas y sociales no esenciales. Esto ha tenido un impacto directo en el ejercicio de derechos como el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el acceso a la educación, especialmente para aquellos sectores más vulnerables de la población.
- *Limitación del derecho de reunión y asociación:* Las medidas adoptadas para evitar aglomeraciones y reuniones masivas han implicado una restricción en el ejercicio del derecho de reunión y asociación. Eventos públicos, manifestaciones y actividades comunitarias han sido cancelados o restringidos, lo que ha generado tensiones en cuanto al ejercicio de estos derechos fundamentales.
- *Impacto en el acceso a la justicia:* La emergencia sanitaria ha afectado el funcionamiento de los sistemas judiciales, con la suspensión de plazos procesales,

limitaciones en la atención al público y la implementación de mecanismos virtuales para la realización de trámites judiciales. Esto ha generado preocupaciones en cuanto al acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos procesales de los ciudadanos.

2.5.4.2. *Equilibrio entre seguridad y libertad.* El equilibrio entre seguridad y libertad es un aspecto crucial que debe ser considerado en el contexto de las medidas adoptadas durante una emergencia sanitaria como la que ha provocado el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias.

- *Necesidad de medidas proporcionadas:* Si bien es fundamental proteger la salud pública y garantizar la seguridad de la población, las medidas restrictivas deben ser proporcionales a la amenaza que enfrentan. Es decir, deben ser lo menos intrusivas posible y estar justificadas por la gravedad de la situación epidemiológica.
- *Respeto a los derechos fundamentales:* Aunque las restricciones pueden ser necesarias en determinadas circunstancias, es crucial que no se vulneren de manera injustificada los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado debe garantizar que las medidas adoptadas sean temporales, respeten los principios de legalidad y proporcionalidad, y estén sujetas a un estricto control constitucional.
- *Transparencia y rendición de cuentas:* Es fundamental que las autoridades actúen con transparencia y rindan cuentas sobre las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones que justifican las restricciones, así como a participar en el proceso de toma de decisiones y a acceder a mecanismos efectivos de control y supervisión.

- *Protección de los grupos vulnerables:* Durante una crisis sanitaria, es crucial garantizar la protección de los grupos más vulnerables de la población, incluyendo a los trabajadores informales, las personas en situación de pobreza, los migrantes y refugiados, y las personas con discapacidad. Las medidas adoptadas deben tener en cuenta sus necesidades específicas y evitar generar o profundizar desigualdades sociales y económicas.

2.5.4.3. Fortalecimiento del poder ejecutivo. El fortalecimiento del poder ejecutivo es un aspecto que suele suscitarse durante situaciones de emergencia como la pandemia provocada por La covid-19, y puede estar relacionado con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias.

- *Centralización de decisiones:* Durante una crisis sanitaria, es común que el poder ejecutivo asuma un rol central en la toma de decisiones, coordinando las acciones para enfrentar la emergencia. Esto puede implicar la concentración de facultades en manos del presidente o del gabinete ministerial, con el objetivo de agilizar la respuesta del Estado ante la situación de emergencia.
- *Ampliación de atribuciones:* Para enfrentar una crisis como la pandemia de la covid-19, el poder ejecutivo puede requerir de mayores atribuciones y facultades para adoptar medidas eficaces y rápidas. Esto puede implicar la emisión de decretos de urgencia o decretos supremos con el fin de establecer restricciones, movilizar recursos, reorganizar servicios públicos y tomar otras medidas necesarias para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de la población.
- *Control parlamentario y judicial:* Si bien es necesario que el poder ejecutivo cuente con los recursos y las facultades necesarias para hacer frente a la emergencia, es

importante que estas medidas estén sujetas a un estricto control parlamentario y judicial. El Congreso y el Poder Judicial deben ejercer su función de fiscalización y control constitucional para garantizar que las decisiones del poder ejecutivo se ajusten a la legalidad y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

- *Diálogo y coordinación interinstitucional:* En situaciones de emergencia, es fundamental que el poder ejecutivo trabaje de manera coordinada con otros poderes del Estado, así como con gobiernos regionales, locales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. El diálogo y la coordinación interinstitucional son clave para garantizar una respuesta eficaz y concertada frente a la crisis sanitaria.

2.5.4.4. Reconfiguración del Estado y la sociedad. Durante situaciones de crisis como la pandemia de la covid-19, es posible observar una reconfiguración tanto del Estado como de la sociedad.

- *Adaptación de políticas públicas:* La emergencia sanitaria puede motivar la revisión y ajuste de las políticas públicas en áreas como la salud, la educación, el empleo y la economía. Esto podría requerir la introducción de nuevas estrategias y programas para abordar las necesidades emergentes de la población y reducir los impactos adversos de la crisis.
- *Cambio en las relaciones Estado-sociedad:* La pandemia puede ocasionar transformaciones en la dinámica entre el Estado y la sociedad, potenciando la confianza en las instituciones públicas o generando tensiones y conflictos debido a las acciones implementadas. Es fundamental fomentar la participación ciudadana y

la transparencia en la formulación de políticas para construir una respuesta colectiva y legitimar las actuaciones estatales.

- *Transformación de la estructura institucional:* La emergencia sanitaria puede motivar la reestructuración de las instituciones estatales y la asignación de recursos para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a futuras crisis. Esto puede implicar la creación de nuevas agencias o entidades especializadas en la gestión de emergencias, así como la revisión de los marcos normativos y administrativos para mejorar la coordinación y eficiencia del aparato estatal.
- *Cambios en el tejido social:* La pandemia puede tener un impacto significativo en el tejido social, afectando las relaciones interpersonales, la dinámica comunitaria y la cohesión social. Es posible observar cambios en las formas de trabajo, estudio, ocio y relacionarse, así como un aumento en la solidaridad y la cooperación entre individuos y grupos para enfrentar la crisis.

2.5.5. Implicaciones Legales y Sociales

La pandemia de la covid-19 y las medidas adoptadas en respuesta a ella, como el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas complementarias, tienen importantes implicaciones legales y sociales que merecen ser consideradas.

2.5.5.1. Derechos fundamentales y libertades individuales. Los derechos fundamentales y las libertades individuales son piedras angulares de cualquier sociedad democrática y Estado de Derecho. Estos derechos, garantizados por la constitución y los tratados internacionales, protegen la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas frente a posibles abusos por parte del Estado o de terceros.

- *Derecho a la vida y a la integridad física y psicológica:* Cada individuo posee el derecho fundamental a la preservación de su vida y su integridad física y mental. En consecuencia, el Estado está obligado a implementar medidas para prevenir la violencia, el maltrato y cualquier forma de perjuicio a la persona.
- *Derecho a la libertad y seguridad personal:* El derecho a la libertad y seguridad personal salvaguarda la libertad de las personas de ser privadas de su libertad de manera injusta o ilegal, así como el derecho a la seguridad y protección frente a detenciones arbitrarias o ilegales.
- *Derecho a la igualdad y no discriminación:* El derecho a la igualdad y no discriminación garantiza que todas las personas sean tratadas con equidad ante la ley y no sean objeto de discriminación por motivos de origen étnico, género, orientación sexual, religión, opinión política u otras características personales o sociales.
- *Derecho a la libertad de expresión y opinión:* El derecho a la libertad de expresión y opinión asegura la facultad de expresar ideas, opiniones y pensamientos, así como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de cualquier índole, sin interferencias por parte del Estado u otros entes.

- *Derecho a la libertad de reunión y asociación:* El derecho a la libertad de reunión y asociación garantiza a las personas la facultad de congregarse pacíficamente y de unirse con otros para la protección de sus intereses colectivos, siempre y cuando lo hagan de forma pacífica y respetando los derechos de terceros.
- *Derecho a la privacidad y protección de datos:* El derecho a la privacidad y protección de datos resguarda la intimidad y privacidad de las personas, así como el control sobre su información personal, asegurando que no sean objeto de intromisiones arbitrarias o ilegales por parte del Estado u otros entes.
- *Derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia:* El derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia garantiza que toda persona tenga el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial y a recibir un proceso legal equitativo, así como el derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
- *Derechos sociales y económicos:* Además de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales y económicos, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad social, son esenciales para asegurar una existencia digna y el bienestar de todas las personas.

2.5.5.2. Equilibrio entre seguridad y libertad. El equilibrio entre seguridad y libertad se convierte en un tema central durante períodos de crisis, como la actual emergencia sanitaria. Aquí, la protección de la salud pública puede chocar con las libertades individuales, generando tensiones en torno a la implementación de medidas gubernamentales.

En este contexto, es esencial encontrar un equilibrio que permita abordar eficazmente la emergencia sin erosionar los derechos civiles y las libertades fundamentales. Este equilibrio no solo implica considerar la efectividad de las medidas en términos de salud pública, sino también

evaluar su impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos. Es crucial que las medidas adoptadas sean proporcionales y estén respaldadas por la ley, evitando así la arbitrariedad y el abuso de poder. Además, se requiere una supervisión constante y un escrutinio adecuado de las acciones del gobierno para garantizar que no se perpetúen más allá de lo estrictamente necesario y que se levanten tan pronto como la situación lo permita. En última instancia, el equilibrio entre seguridad y libertad es esencial para mantener la integridad de un Estado democrático y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

2.5.5.3. Desigualdades sociales y económicas. Las desigualdades sociales y económicas se han agravado durante la crisis sanitaria, exacerbando las disparidades preexistentes en la sociedad.

La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a ciertos grupos, como los trabajadores informales, los migrantes, las personas de bajos ingresos y las comunidades marginadas. Estos grupos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud adecuados, mantener sus medios de subsistencia y cumplir con las medidas de distanciamiento social debido a sus condiciones socioeconómicas precarias. Además, la crisis ha puesto al descubierto la falta de protección social y la fragilidad de los sistemas de salud en muchos países, lo que ha dejado a millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. En este contexto, es crucial abordar las desigualdades estructurales que subyacen a estas disparidades, implementando políticas públicas que promuevan la inclusión social, garanticen el acceso equitativo a los servicios básicos y protejan los derechos de los grupos más vulnerables. Asimismo, es necesario impulsar medidas económicas que fomenten la recuperación sostenible y promuevan una distribución justa de la riqueza, con el fin de reducir las brechas sociales y construir sociedades más equitativas y resilientes.

2.5.5.4. Protección de Derechos Humanos. En medio de la crisis sanitaria, es esencial que se protejan y respeten los derechos humanos de todas las personas.

Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia deben estar en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y no deben utilizarse como excusa para vulnerar las libertades individuales o justificar acciones represivas. Es crucial fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, asegurar el acceso a la justicia y garantizar la rendición de cuentas por cualquier abuso ocurrido durante la emergencia. Además, es imperativo prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como los migrantes, las personas sin hogar, los trabajadores informales y las comunidades marginadas, para asegurar que reciban la protección y asistencia requeridas. En este sentido, la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional es crucial para garantizar que los derechos humanos sean protegidos y respetados en todo momento.

2.5.5.5. Cambio en la cultura y el comportamiento social. La pandemia ha provocado transformaciones profundas en la cultura y el comportamiento social.

Aspectos como el uso extendido de mascarillas, el incremento del trabajo a distancia y la digitalización de servicios se han vuelto comunes en la vida diaria. Estos cambios no solo afectan la forma en que las personas interactúan entre sí, sino que también tienen implicaciones a largo plazo en la organización de la sociedad y en la vida cotidiana. Por ejemplo, el aumento del trabajo remoto podría modificar los patrones de movilidad urbana y la dinámica de los espacios laborales, mientras que la digitalización de servicios podría transformar la manera en que accedemos a la educación, la salud y otros servicios básicos. Estos cambios culturales y sociales requerirán una adaptación continua por parte de las instituciones y los individuos, y podrían influir en la configuración de nuevas normas y valores en la sociedad.

CAPITULO III: ANÁLISIS DE DATOS

Capítulo III: Análisis de Datos

3.1. Casuística

La interacción entre las medidas gubernamentales para contener la propagación de la covid-19 y el comportamiento ciudadano ha sido un tema recurrente durante la pandemia en Perú. Desde el inicio del estado de emergencia, diversas situaciones han puesto de manifiesto la complejidad de hacer cumplir las disposiciones restrictivas y su impacto en el ejercicio de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la reunión privada. A través de tres noticias relevantes, podemos explorar la casuística que problematiza la efectividad del Decreto Supremo 044-2020, el derecho a la reunión privada y su alineación con los preceptos constitucionales.

En primer lugar, en agosto de 2020, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en una reunión familiar en Lima, donde varias personas se encontraban celebrando un cumpleaños en una vivienda privada. Los vecinos alertaron a las autoridades debido al ruido y la aglomeración de personas no residentes en el domicilio. La policía dispersó la reunión y multó a los asistentes, justificando la intervención por la violación de las normas de aislamiento social impuestas para controlar la propagación de la covid-19. Este incidente destaca la tensión entre la necesidad de controlar la pandemia y el derecho de los ciudadanos a reunirse en un entorno privado, cuestionando la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas restrictivas en espacios privados.

En segundo lugar, en septiembre de 2020, un almuerzo familiar en Trujillo resultó en la detención de varios miembros de la familia por violar las normas de aislamiento social. La intervención policial se realizó tras recibir denuncias de los vecinos. Las autoridades justificaron la intervención alegando el riesgo de propagación del virus y la necesidad de hacer cumplir las restricciones sanitarias. Este caso generó controversia sobre la invasión de la privacidad y el uso de la fuerza en situaciones privadas, destacando la necesidad de revisar las políticas de

intervención en reuniones familiares para asegurar que sean proporcionales y respetuosas de los derechos individuales.

Finalmente, en octubre de 2020, un grupo de amigos fue intervenido por la policía durante una reunión en una residencia privada en San Juan de Lurigancho. Los asistentes, que se habían reunido para una cena, fueron multados y dispersados por no cumplir con las restricciones de reunión impuestas por el estado de emergencia. La intervención fue resultado de denuncias de los vecinos por el ruido y la aglomeración. Esta situación resalta los desafíos que enfrentan las autoridades para equilibrar la aplicación de medidas de salud pública con el respeto al derecho de reunión en un contexto privado, y plantea la cuestión de si las restricciones son efectivas o excesivamente intrusivas.

En conjunto, estas noticias ofrecen un panorama diverso de las complejidades y desafíos asociados con la implementación y el cumplimiento de las medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria. Su análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de la salud pública y el respeto a los derechos individuales, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley y de promover una mayor conciencia y responsabilidad ciudadana en la lucha contra la pandemia.

3.2.Evolución del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM

La evolución del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional debido al brote de COVID-19, ha sido marcada por una serie de modificaciones y prórrogas a lo largo del tiempo. Desde su promulgación inicial hasta las últimas disposiciones complementarias, este decreto ha experimentado una serie de ajustes y precisiones para adaptarse a la evolución de la situación sanitaria y las necesidades del país.

El Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM marcó el inicio de la respuesta del gobierno peruano ante la emergencia nacional causada por la pandemia. Este decreto estableció medidas extraordinarias para hacer frente a las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación debido al brote de COVID-19.

Posteriormente, se emitieron una serie de decretos complementarios, como el D.S. N.º 051-2020-PCM y el D.S. N.º 064-2020-PCM, que prorrogaron el Estado de Emergencia Nacional por 13 días adicionales en cada caso, manteniendo la restricción del derecho de reunión.

Con el paso del tiempo, se hicieron necesarias prórrogas y ajustes a las medidas establecidas inicialmente. El D.S. N.º 075-2020-PCM amplió el estado de emergencia y cuarentena hasta el 24 de mayo de 2020, continuando con la restricción del derecho de reunión.

Además, se emitieron otros decretos que prorrogaron el estado de emergencia, como el D.S. N.º 184-2020-PCM, que extendió las medidas hasta el 28 de febrero de 2021, y el D.S. N.º 201-2021-PCM, que añadió una prórroga adicional de 30 días. Cada uno de estos decretos mantuvo las restricciones sobre el derecho de reunión.

En 2022, se continuaron las prórrogas con decretos como el D.S. N.º 016-2022-PCM y el D.S. N.º 030-2022-PCM, ambos extendiendo el estado de emergencia por 30 días más cada uno y manteniendo las restricciones sobre reuniones públicas. Finalmente, el D.S. N.º 130-2022-PCM oficializó el fin del estado de emergencia, levantando algunas de las restricciones, incluyendo las relacionadas con el derecho de reunión.

Esta serie de decretos y sus prórrogas reflejan los esfuerzos del gobierno peruano para adaptarse a la evolución de la pandemia y las necesidades cambiantes del país, siempre con el objetivo de proteger la salud pública y minimizar el impacto de la covid-19 en la sociedad.

Tabla 1

Cuadro comparativo y evolutivo del Decreto Supremo N.º 044-2020

DECRETO SUPREMO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ESTADO DE EMERGENCIA	CUARENTENA	DERECHO DE REUNIÓN
044-2020-PCM	15 de marzo de 2020	Declarado por 15 días	Sí	Restringido durante la cuarentena. Se limitan las reuniones públicas como parte de las medidas para prevenir la propagación de la covid-19. Las personas solo pueden circular por las vías públicas para acceder a servicios esenciales.
051-2020-PCM	26 de marzo de 2020	Prorroga por 13 días	Sí	Se mantiene la restricción durante la cuarentena.
064-2020-PCM	10 de abril de 2020	Prorroga por 13 días	Sí	Al igual que en los decretos anteriores, se restringe durante la cuarentena.
075-2020-PCM	10 de mayo de 2020	Prórroga hasta el 24 de mayo	Sí	Se mantiene la restricción durante la cuarentena, sin especificar medidas adicionales.
184-2020-PCM	3 de enero de 2021	Prórroga hasta el 28 de febrero de 2021	Sí	Se mantienen restricciones sobre el derecho de reunión.
201-2021-PCM	28 de marzo de 2021	Prórroga por 30 días	Sí	Se continúan las restricciones al derecho de reunión.
105-2021-PCM	30 de junio de 2021	Prórroga hasta el 31 de julio de 2021	Sí	Se mantienen las restricciones sobre el derecho de reunión.
016-2022-PCM	28 de enero de 2022	Prórroga por 30 días	Sí	Restricciones continuadas sobre el derecho de reunión.
030-2022-PCM	1 de marzo de 2022	Prórroga por 30 días	Sí	Se mantienen las restricciones sobre reuniones.
130-2022-PCM	27 de octubre de 2022	Fin del estado de emergencia	No	Fin de las restricciones relacionadas con el derecho de reunión.

Nota: El presente cuadro comparativo resume las disposiciones relevantes de los Decretos Supremos emitidos durante el período de emergencia sanitaria por COVID-19 en Perú, específicamente en relación con el derecho de reunión.

Al considerar el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que establece el Estado de Emergencia Nacional y las medidas de aislamiento social obligatorio, se puede observar cómo estas disposiciones afectan indirectamente el derecho de reunión consagrado en la Constitución Política del Perú.

Este decreto, en su numeral 4.1 del artículo 4, establece las condiciones bajo las cuales las personas pueden circular por las vías de uso público durante la emergencia. Si bien el decreto no menciona directamente el derecho de reunión, sí restringe la libertad de movimiento de las personas, lo que puede dificultar la organización y participación en reuniones públicas o concentraciones de individuos.

Las disposiciones del Decreto Supremo 044-2020-PCM se han implementado como respuesta a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, con el objetivo de contener la propagación del virus. Sin embargo, estas medidas han generado interrogantes sobre su compatibilidad con el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de reunión.

Desde una perspectiva constitucional, cualquier restricción a los derechos fundamentales debe ser proporcionada y justificada por la necesidad de proteger otros derechos o intereses igualmente legítimos. En el caso del derecho de reunión, las restricciones impuestas por el Decreto Supremo 044-2020-PCM deben ser evaluadas en función de su necesidad y proporcionalidad para enfrentar la crisis sanitaria, así como de su impacto en la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos democráticos.

Es importante que las autoridades competentes supervisen de cerca la aplicación de estas medidas y que se establezcan salvaguardas adecuadas para garantizar que no se produzcan abusos de poder o violaciones de derechos fundamentales.

3.3. Lista de Cotejo N.º 01

El Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, emitido en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, ha generado diversas discusiones en torno a su compatibilidad con la Constitución Política del Perú y el respeto a los derechos individuales,

especialmente en lo que respecta al derecho a la reunión privada. Con el fin de evaluar si este decreto puede estar en conflicto con la Carta Magna y garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionales y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, se presenta a continuación una lista de cotejo para analizar sus disposiciones en detalle.

ASPECTOS	OPCIONES	
	SÍ	NO
A) ¿El decreto supremo respeta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho a la reunión privada?		X
B) ¿Se ha respetado el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en el decreto supremo en relación con la protección de la salud pública y los derechos individuales?	X	
C) ¿El decreto supremo ha sido emitido dentro del marco de las competencias y facultades establecidas para el Poder Ejecutivo por la Constitución y las leyes?	X	
D) ¿Se han respetado los procedimientos constitucionales y legales para la emisión del decreto supremo, incluyendo la consulta y aprobación del Consejo de ministros?	X	
E) ¿Las restricciones establecidas en el decreto supremo, como la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales, están justificadas y son proporcionales a la situación de emergencia sanitaria?		X
F) ¿El decreto supremo garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como el acceso a servicios básicos y la salud, en concordancia con la Constitución?	X	
G) ¿Se han establecido mecanismos adecuados para garantizar que las medidas adoptadas en el decreto supremo sean temporales y se levanten una vez que la situación de emergencia lo permita?		X
H) ¿Se han previsto salvaguardias para evitar posibles abusos en la implementación del decreto supremo y garantizar el respeto a los derechos individuales?		X
I) ¿El decreto supremo ha sido publicado y difundido de manera adecuada para que la población conozca sus disposiciones y pueda cumplirlas?		X
J) ¿Se han establecido canales de comunicación y mecanismos de supervisión para atender consultas y reclamos de la población afectada por las medidas del decreto supremo?		X

En el proceso de evaluación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM desde una perspectiva constitucionalista, es fundamental cuantificar los aspectos relevantes que inciden en la conformidad del decreto con los principios y derechos consagrados en la Constitución Política del

Perú. Esta cuantificación nos permitirá asignar puntajes proporcionales a cada pregunta y respuesta, reflejando así la importancia relativa de cada aspecto en la evaluación global del decreto.

En esta tarea, nos guiamos por los principios constitucionales y el respeto a los derechos fundamentales como ejes rectores de nuestro análisis.

ASPECTOS	CRITERIO	PUNTAJE
A) ¿El decreto supremo respeta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho a la reunión privada?	Formal	15
B) ¿Se ha respetado el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en el decreto supremo en relación con la protección de la salud pública y los derechos individuales?	Material	12
C) ¿El decreto supremo ha sido emitido dentro del marco de las competencias y facultades establecidas para el Poder Ejecutivo por la Constitución y las leyes?	Formal	12
D) ¿Se han respetado los procedimientos constitucionales y legales para la emisión del decreto supremo, incluyendo la consulta y aprobación del Consejo de ministros?	Formal	10
E) ¿Las restricciones establecidas en el decreto supremo, como la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales, están justificadas y son proporcionales a la situación de emergencia sanitaria?	Material	10
F) ¿El decreto supremo garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como el acceso a servicios básicos y la salud, en concordancia con la Constitución?	Material	12
G) ¿Se han establecido mecanismos adecuados para garantizar que las medidas adoptadas en el decreto supremo sean temporales y se levanten una vez que la situación de emergencia lo permita?	Formal	8
H) ¿Se han previsto salvaguardias para evitar posibles abusos en la implementación del decreto supremo y garantizar el respeto a los derechos individuales?	Formal	6
I) ¿El decreto supremo ha sido publicado y difundido de manera adecuada para que la población conozca sus disposiciones y pueda cumplirlas?	Formal	8

J) ¿Se han establecido canales de comunicación y mecanismos de supervisión para atender consultas y reclamos de la población afectada por las medidas del decreto supremo?	Formal	7
TOTAL DE PUNTOS		100

3.4. Justificación y criterio analítico

- a) ¿El decreto supremo respeta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho a la reunión privada?

El derecho a la reunión privada está respaldado por el artículo 2, inciso 8, de la Constitución Política del Perú, que garantiza a toda persona el derecho a la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad del domicilio. La reunión privada constituye un aspecto esencial de la vida íntima y familiar, donde las personas pueden interactuar y compartir libremente sin intervención del Estado. Aunque el Estado tiene la autoridad para implementar medidas destinadas a proteger la salud pública, estas deben ser proporcionales y respetar los derechos individuales. En el caso del decreto supremo en cuestión, las restricciones impuestas podrían considerarse excesivas en relación con la protección de la salud pública. La suspensión del derecho a la reunión privada podría afectar desproporcionadamente la esfera íntima y familiar de las personas, sin una justificación clara de su necesidad y proporcionalidad en el contexto de la emergencia sanitaria.

El decreto supremo podría carecer de criterios claros y específicos para regular las limitaciones al derecho a la reunión privada. La falta de precisiones sobre qué situaciones justificarían la restricción de este derecho y cómo se llevaría a cabo su implementación podría generar arbitrariedad en su aplicación y vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, la ausencia de garantías procesales para el ejercicio del derecho a la reunión privada podría ser otro punto de preocupación. La falta de mecanismos efectivos para impugnar las restricciones

impuestas o para buscar su revisión ante instancias judiciales podría afectar el acceso a la justicia y la protección de los derechos individuales frente a la actuación estatal.

- b) ¿Se ha respetado el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en el decreto supremo en relación con la protección de la salud pública y los derechos individuales?

El principio de proporcionalidad es fundamental dentro del Estado de Derecho y está implícito en la Constitución Política del Perú. Este principio dicta que las acciones tomadas por el Estado deben ser apropiadas, necesarias y proporcionales para lograr el objetivo legítimo buscado, sin imponer restricciones excesivas a los derechos individuales. El decreto supremo fue emitido en el marco de una emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de COVID-19. La salvaguarda de la salud pública es un objetivo legítimo y reconocido constitucionalmente, en consonancia con el artículo 7 de la Constitución, que consagra el derecho de todas las personas a la protección de su salud y el deber del Estado de establecer la política nacional de salud. La gravedad y magnitud de la crisis sanitaria requieren la adopción de medidas extraordinarias para contener la propagación del virus y proteger la salud de la población. En este sentido, las medidas adoptadas en el decreto supremo, como el aislamiento social obligatorio y la suspensión de ciertos derechos constitucionales, pueden considerarse necesarias para enfrentar la emergencia y evitar un mayor impacto en la salud pública. Las medidas adoptadas en el decreto supremo están diseñadas para equilibrar la protección de la salud pública con la preservación de los derechos individuales en la medida de lo posible. Se han establecido restricciones temporales y específicas, dirigidas principalmente a evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio, mientras se garantiza el acceso a servicios básicos y se protegen otros derechos fundamentales.

- c) ¿El decreto supremo ha sido emitido dentro del marco de las competencias y facultades establecidas para el Poder Ejecutivo por la Constitución y las leyes?

El artículo 118 de la Constitución Política del Perú especifica las atribuciones y competencias del presidente de la República, quien ejerce como jefe del Estado y del Gobierno. Entre estas facultades se encuentra la potestad, conforme al numeral 14 del artículo 118, de emitir decretos supremos. Estos decretos otorgan al presidente la capacidad de tomar medidas extraordinarias en situaciones de urgencia y necesidad. El decreto supremo en referencia fue emitido en el contexto de una emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, el artículo 137 de la Constitución establece que el presidente de la República puede decretar, previa consulta con el Consejo de Ministros, el estado de emergencia ante circunstancias graves que afecten la vida de la Nación. Esta facultad autoriza al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales para hacer frente a crisis y salvaguardar el orden público y la salud pública.

El respaldo legal para la emisión del decreto supremo se encuentra en la Ley N.º 29158, conocida como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual establece el marco normativo para el ejercicio de las funciones y competencias del Poder Ejecutivo. Según esta ley, el presidente de la República está facultado para dictar decretos supremos y se detallan los procedimientos para su emisión. Además, el decreto supremo fue emitido con el acuerdo del Consejo de ministros, tal como lo establece el artículo 137 de la Constitución. Esta consulta y aprobación por parte del Consejo de ministros aseguran un proceso colegiado en la toma de decisiones y garantizan que las medidas adoptadas cuenten con el respaldo de los órganos competentes del Poder Ejecutivo.

- d) ¿Se han respetado los procedimientos constitucionales y legales para la emisión del decreto supremo, incluyendo la consulta y aprobación del Consejo de ministros?

El proceso de emisión de decretos supremos en el Perú requiere la consulta y aprobación del Consejo de ministros, tal como lo establece la Constitución en su artículo 137. Esta disposición constitucional asegura que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo sean colegiadas y cuenten con el respaldo de los principales funcionarios del Gobierno.

La consulta y aprobación del Consejo de ministros garantiza la participación de los ministros y altos funcionarios del Gobierno en la elaboración y adopción de medidas de carácter extraordinario, como es el caso de los decretos supremos emitidos en situaciones de emergencia o crisis. Además de la Constitución, la emisión de decretos supremos se encuentra respaldada por la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece el marco normativo para el ejercicio de las funciones y competencias del Poder Ejecutivo. Esta ley otorga al presidente de la República la facultad de dictar decretos supremos y establece los procedimientos para su emisión. La consulta y aprobación del Consejo de ministros asegura que el decreto supremo emitido cuente con el respaldo de los principales funcionarios del Gobierno y cumpla con los requisitos legales establecidos para su validez y efectividad. Este proceso garantiza la legalidad y legitimidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

- e) ¿Las restricciones establecidas en el decreto supremo, como la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales, están justificadas y son proporcionales a la situación de emergencia sanitaria?

La Constitución del Perú reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales solo pueden ser restringidos en casos excepcionales y de manera proporcional a la situación

que se pretende enfrentar. En el contexto de una emergencia sanitaria, las restricciones deben ser proporcionales a la gravedad y la urgencia de la situación, así como a los fines que se persiguen. Se debe evaluar si las medidas adoptadas por el decreto supremo son estrictamente necesarias para proteger la salud pública y si hay una relación directa entre las restricciones y los objetivos de contener la propagación de la covid-19. Si bien es válido que en situaciones de emergencia se puedan adoptar medidas excepcionales para proteger la salud pública, estas deben estar cuidadosamente calibradas para no vulnerar injustificadamente los derechos constitucionales de los ciudadanos. La suspensión del ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la reunión privada, debe estar debidamente justificada y limitada en el tiempo y en su alcance.

Es crucial analizar si las restricciones impuestas por el decreto supremo son necesarias y efectivas para abordar la emergencia sanitaria. Se debe considerar si existen alternativas menos invasivas para alcanzar los mismos objetivos de protección de la salud pública, así como si las medidas adoptadas son proporcionales a la gravedad del riesgo y están respaldadas por evidencia científica y experta. En un Estado democrático y de derecho, las medidas restrictivas deben estar sujetas a controles y garantías que aseguren su legitimidad y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La adopción de medidas que limitan derechos constitucionales sin una justificación clara y sin salvaguardias adecuadas puede socavar los principios democráticos y el Estado de Derecho.

- f) ¿El decreto supremo garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como el acceso a servicios básicos y la salud, en concordancia con la Constitución?

La Constitución Política del Perú establece una serie de derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Entre estos derechos se encuentran el derecho a la salud y el acceso a servicios básicos, los cuales son esenciales para el bienestar y la dignidad de

los ciudadanos. El Estado peruano tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos, como el agua, la energía, el saneamiento y la salud, para todos los ciudadanos. Esto implica tomar medidas efectivas para asegurar que estos servicios estén disponibles, sean accesibles, aceptables y de calidad.

En el contexto de una emergencia sanitaria, como la pandemia de COVID-19, el Estado puede adoptar medidas excepcionales para proteger la salud pública y garantizar el acceso de la población a servicios básicos esenciales. El decreto supremo en cuestión puede contener disposiciones que buscan asegurar la continuidad y el acceso a estos servicios durante la crisis sanitaria. La evaluación del decreto supremo debe asegurar que las disposiciones contenidas en el mismo sean coherentes con los principios y valores establecidos en la Constitución. Esto incluye el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la protección de los grupos más vulnerables y la promoción del bienestar general.

g) ¿Se han establecido mecanismos adecuados para garantizar que las medidas adoptadas en el decreto supremo sean temporales y se levanten una vez que la situación de emergencia lo permita?

El decreto supremo puede carecer de disposiciones claras que establezcan un plazo específico para la vigencia de las medidas adoptadas. Esto podría llevar a una situación en la que las restricciones impuestas por el decreto se mantengan indefinidamente, sin un mecanismo claro para su levantamiento una vez que la situación de emergencia sanitaria haya pasado. Esta falta de temporalidad podría ser contraria al principio de legalidad y al debido proceso establecidos en la Constitución, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer el alcance y la duración de las medidas que afectan sus derechos fundamentales. El decreto supremo puede no incluir criterios claros y objetivos que indiquen cuándo y cómo se revisarán las medidas adoptadas en función de

la evolución de la situación sanitaria. La falta de criterios específicos podría dar lugar a una discrecionalidad excesiva por parte de las autoridades en la gestión de la emergencia, lo que podría vulnerar el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica consagrados en la Constitución.

El decreto supremo puede carecer de mecanismos efectivos de supervisión y control que garanticen la revisión periódica de las medidas adoptadas y su ajuste a la evolución de la situación de emergencia. La falta de supervisión adecuada podría conducir a una prolongación injustificada de las restricciones y a una limitación desproporcionada de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de temporalidad en las medidas adoptadas por el decreto supremo podría constituir una violación del principio de proporcionalidad. Si las restricciones impuestas no están debidamente justificadas en función de la gravedad de la emergencia sanitaria y no se ajustan a la evolución de la situación, podrían ser consideradas desproporcionadas y, por lo tanto, contrarias a la Constitución.

h) ¿Se han previsto salvaguardias para evitar posibles abusos en la implementación del decreto supremo y garantizar el respeto a los derechos individuales?

El decreto supremo puede carecer de disposiciones que establezcan mecanismos independientes de supervisión para garantizar que las autoridades encargadas de implementar las medidas adoptadas actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. La ausencia de mecanismos de supervisión efectivos podría propiciar posibles abusos por parte de las autoridades en la aplicación de las restricciones, lo que pondría en riesgo los derechos individuales de los ciudadanos. El decreto supremo puede no contemplar garantías procesales adecuadas para proteger los derechos de las personas afectadas por las medidas adoptadas. Por ejemplo, podría no establecerse un procedimiento claro y transparente para impugnar las decisiones administrativas

derivadas del decreto o para obtener una revisión judicial de las mismas. La falta de garantías procesales podría dejar a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles abusos por parte de las autoridades.

El decreto supremo podría conferir a las autoridades una discrecionalidad excesiva en la aplicación de las medidas adoptadas, sin establecer límites claros y precisos para el ejercicio de dicha discrecionalidad. Esta falta de claridad en los criterios de actuación podría propiciar posibles arbitrariedades en la aplicación de las restricciones, lo que pondría en riesgo los derechos individuales de los ciudadanos y podría dar lugar a abusos por parte de las autoridades. El decreto supremo puede no contemplar mecanismos efectivos de rendición de cuentas que aseguren que las autoridades responsables de la implementación de las medidas adoptadas rindan cuentas por sus acciones. La falta de mecanismos de rendición de cuentas adecuados podría dificultar la identificación y la corrección de posibles abusos en la aplicación del decreto, lo que podría perpetuar la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos.

- i) ¿El decreto supremo ha sido publicado y difundido de manera adecuada para que la población conozca sus disposiciones y pueda cumplirlas?

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de todas las personas a acceder a la información pública y a la transparencia en la gestión pública. Esto implica que las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, como un decreto supremo, deben ser accesibles para la población, de manera que puedan conocer sus derechos y obligaciones en virtud de dichas disposiciones. La publicación y difusión adecuada de un decreto supremo son fundamentales para garantizar el principio de legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Cuando las normas no son publicadas de manera oportuna y accesible, se genera incertidumbre jurídica y se dificulta

que los ciudadanos conozcan las obligaciones impuestas por dichas normas, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Es responsabilidad del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, garantizar que las disposiciones normativas sean publicadas de manera adecuada y difundidas de forma que la población tenga conocimiento de su contenido y alcance. Esta obligación es especialmente relevante en situaciones de emergencia o crisis, como la pandemia de COVID-19, donde las medidas adoptadas pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. La falta de publicación y difusión adecuada de un decreto supremo puede generar confusión entre la población, dificultando su cumplimiento y dando lugar a posibles sanciones o acciones legales contra los ciudadanos que desconozcan las disposiciones establecidas en el mismo. Esto puede afectar el ejercicio efectivo de los derechos individuales y contribuir a la inestabilidad jurídica y social.

j) ¿Se han establecido canales de comunicación y mecanismos de supervisión para atender consultas y reclamos de la población afectada por las medidas del decreto supremo?

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de todas las personas a participar en los asuntos de interés público y a acceder a la justicia de manera efectiva. En el contexto de la adopción de medidas gubernamentales, como un decreto supremo, es fundamental que se establezcan canales de comunicación y mecanismos de supervisión que permitan a la población afectada hacer consultas y presentar reclamos en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados o que las medidas adoptadas son injustas o desproporcionadas. La falta de canales de comunicación adecuados y mecanismos de supervisión puede obstaculizar el acceso de la población a información relevante sobre las medidas adoptadas, así como dificultar la posibilidad

de expresar sus preocupaciones o recibir asistencia en caso de necesidad. Esto vulnera el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, pilares fundamentales de un Estado democrático y de derecho.

Para el investigador Alarcón Requejo (2023), señala que:

La progresiva definición del contenido protegido del derecho acceso a la información pública fue efectuada principalmente a través de la jurisprudencia constitucional. En el caso peruano, el Tribunal Constitucional incluyó la premisa del buen gobierno como un bien de índole constitucional estrechamente ligado a la transparencia. (p. 145)

La existencia de canales de comunicación y mecanismos de supervisión contribuye a fortalecer el principio de legalidad y la seguridad jurídica, ya que permite a la población entender las disposiciones normativas y recibir orientación sobre cómo cumplirlas adecuadamente. Cuando estos canales no están disponibles, se generan dudas e incertidumbre respecto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, lo que puede afectar su capacidad para actuar conforme a la ley. Es deber del Estado garantizar que se establezcan los mecanismos necesarios para que la población pueda participar de manera activa en la vida democrática y ejercer sus derechos de manera efectiva.

3.5. Resultados del análisis

Tabla 2

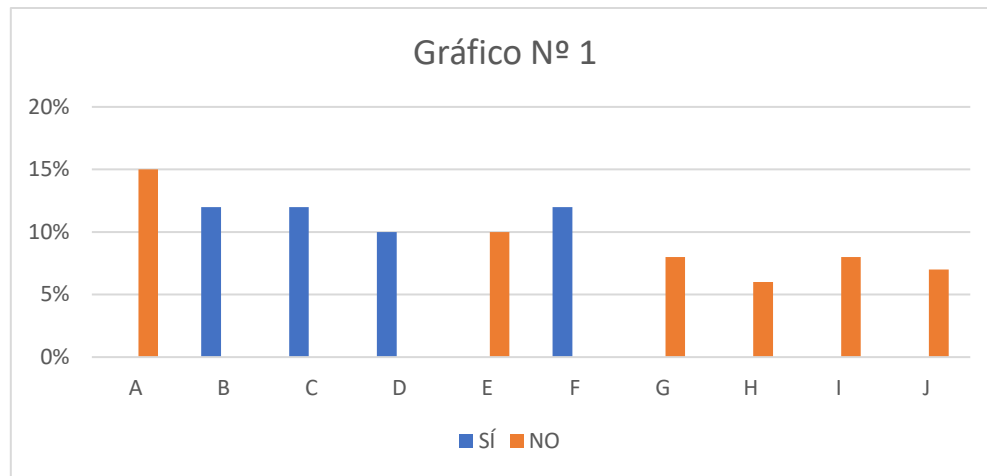
Análisis Constitucional del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM: Evaluación de Conformidad con la Constitución Política del Perú.

S/N	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SUB TOTAL
SÍ	0%	12%	12%	10%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	46%
NO	15%	0%	0%	0%	10%	0%	8%	6%	8%	7%	54%
TOTALES											100%

Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

Figura 1

Gráfico de Respuestas: Evaluación Constitucional del DS 044-2020.



Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

El análisis detallado del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, desde una perspectiva constitucionalista, ha arrojado resultados significativos que merecen ser considerados con atención. Al evaluar cada aspecto del decreto a la luz de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, se ha realizado una revaloración que refleja tanto los puntos de conformidad como las áreas de preocupación en relación con su validez constitucional. Esta revaloración se basa en una ponderación equilibrada de cada pregunta, lo que nos permite obtener una visión más precisa de la coherencia del decreto con el marco legal y los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. El resultado obtenido, con un 46% de respuestas afirmativas y un 54% de respuestas negativas, sugiere la presencia de aspectos críticos que requieren una mayor atención en términos de salvaguardar los derechos individuales y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en la elaboración y aplicación de políticas públicas.

Tabla 3

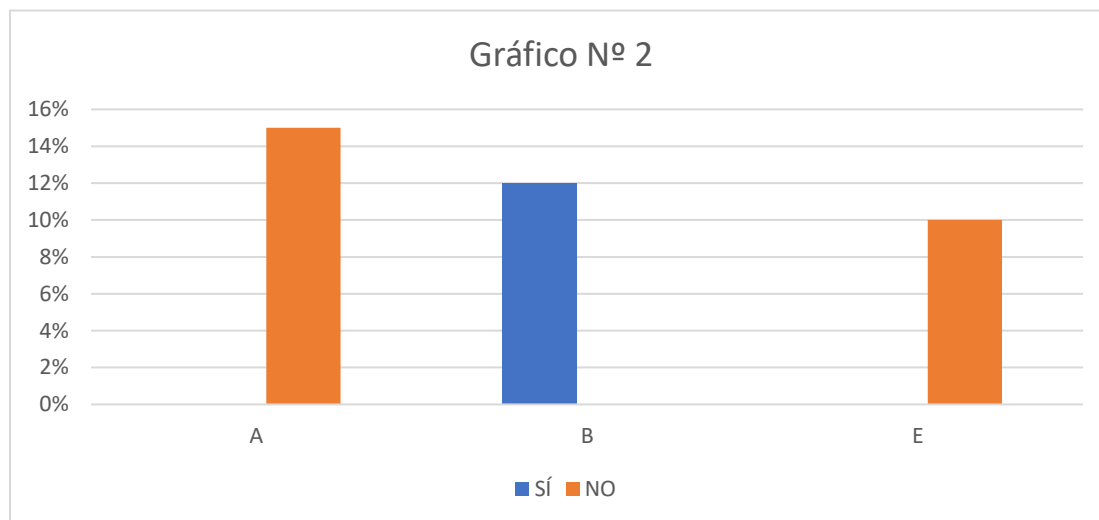
Ponderación Constitucional: Análisis Crítico de las Preguntas Predominantes con Respuestas Desfavorable.

S/N	A	B	E	SUBTOTAL
SÍ		12%		12%
NO	15%		10%	25%
TOTALES				37%

Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

Figura 2

Análisis porcentual de preguntas predominantes con respuestas desfavorables.



Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

El análisis detallado de las tres preguntas de mayor peso revela una situación compleja desde una perspectiva constitucional. La primera pregunta (A) sobre el respeto de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la reunión privada, ha dado como resultado una respuesta negativa, lo que indica una potencial vulneración de derechos constitucionales básicos. Esta

negatividad sugiere una preocupación seria en cuanto a la conformidad del decreto supremo con los principios fundamentales establecidos en la Constitución.

Por otro lado, la segunda pregunta (B), que indaga sobre el respeto al principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas, ha obtenido una respuesta afirmativa. Esto sugiere que, aunque el decreto supremo podría haber tomado medidas restrictivas, estas acciones se han justificado adecuadamente en función de la protección de la salud pública y los derechos individuales, mostrando coherencia con el marco constitucional.

Sin embargo, la tercera pregunta (E) ha recibido una respuesta negativa, lo que indica que las restricciones establecidas no están adecuadamente justificadas ni proporcionadas a la situación de emergencia sanitaria. Esta discrepancia entre la justificación de las medidas y su proporcionalidad constituye un punto crítico que debe ser abordado para garantizar la coherencia del decreto supremo con los principios constitucionales.

Tabla 4

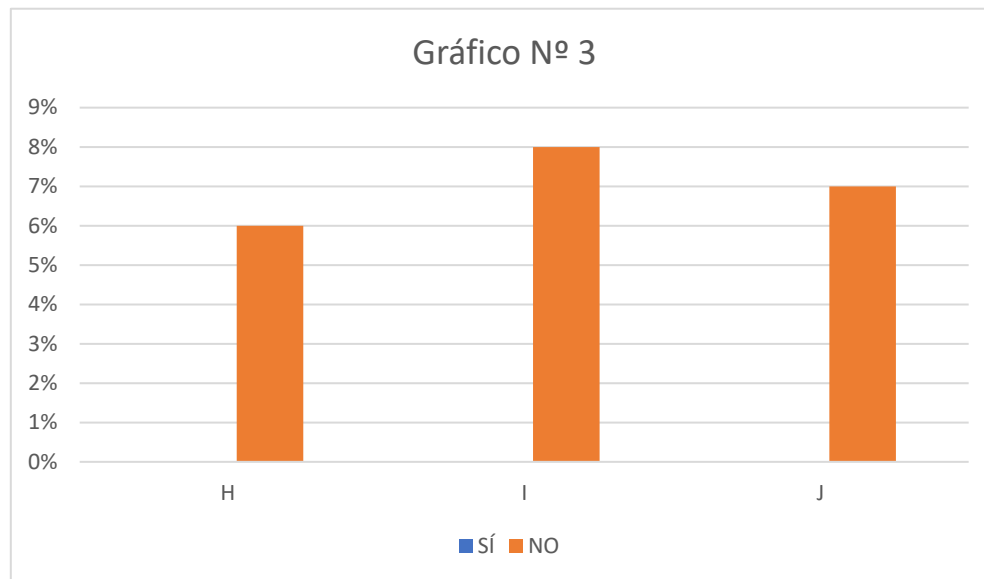
Deficiencias Constitucionales en el Decreto Supremo: Análisis de Preguntas con Menor Peso.

S/N	H	I	J	SUBTOTAL
SÍ	0%	0%	0%	0%
NO	6%	8%	7%	21%
TOTALES				21%

Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

Figura 3

Análisis porcentual del Impacto Constitucional de las Preguntas con Menor Peso en el Decreto Supremo.



Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

La evaluación detallada de las tres preguntas con menor peso, que arrojaron respuestas negativas, revela un aspecto preocupante en el análisis constitucional del decreto supremo. Estas preguntas, centradas en la prevención de abusos, la difusión adecuada del decreto y la disponibilidad de canales de comunicación efectivos, representan elementos clave para garantizar la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana en el proceso gubernamental.

La acumulación de un 21% de negatividad en estas tres preguntas subraya una serie de deficiencias importantes en el decreto supremo evaluado. Esto incluye la falta de salvaguardias para prevenir abusos estatales, la insuficiente difusión de información sobre el decreto y la ausencia de canales efectivos para la participación y el reclamo ciudadano. Estas deficiencias plantean preocupaciones sobre la legitimidad y la efectividad del decreto, ya que sugieren un

potencial para la vulneración de derechos individuales y la falta de rendición de cuentas por parte del Estado.

En conjunto, estos hallazgos resaltan la importancia de un enfoque integral y cuidadosamente diseñado en la elaboración y aplicación de decretos supremos, que garantice el pleno respeto a los principios constitucionales, incluida la protección de los derechos fundamentales y la participación ciudadana. La identificación de estas deficiencias proporciona una base sólida para la revisión y mejora continua de las políticas gubernamentales, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y promover una sociedad democrática y justa.

Tabla 5

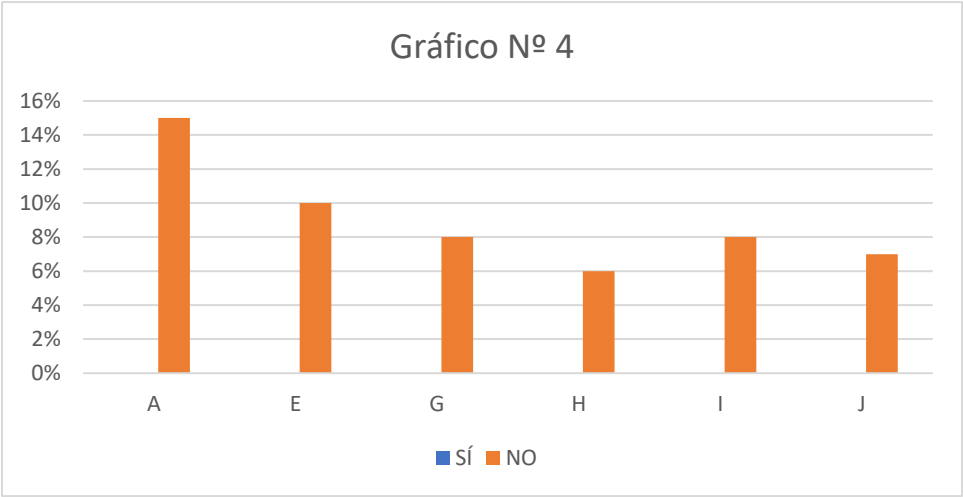
Análisis Constitucional del Decreto Supremo: Distribución de Respuestas Negativas.

S/N	A	E	G	H	I	J	SUBTOTAL
SÍ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NO	15%	10%	8%	6%	8%	7%	54%
TOTALES							54%

Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

Figura 4

Porcentaje de Respuestas Negativas en el Análisis Constitucional del Decreto Supremo.



Fuente: Elaboración propia. Lista de Cotejo N.º 1.

El análisis estadístico de las respuestas negativas revela que, de las seis preguntas planteadas, el 54% obtuvo una respuesta negativa. Esto indica una preocupación significativa en varios aspectos clave del decreto supremo desde una perspectiva constitucional.

Desde un punto de vista constitucional, las preguntas que obtuvieron respuestas negativas plantean áreas problemáticas que podrían implicar una potencial violación de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú.

Por ejemplo, la pregunta A sobre el respeto de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la reunión privada, resalta una potencial vulneración de los derechos individuales. Del mismo modo, la pregunta E sobre la justificación y proporcionalidad de las restricciones establecidas sugiere una posible falta de equilibrio entre las medidas adoptadas y la situación de emergencia sanitaria.

Además, las preguntas G, H, I y J resaltan áreas críticas en cuanto a la temporalidad de las medidas, la prevención de abusos en la implementación del decreto, la adecuada difusión del mismo y la disposición de canales de comunicación para atender consultas y reclamos de la población afectada. Estos aspectos son fundamentales para garantizar la legitimidad y el cumplimiento efectivo del decreto supremo en consonancia con los principios constitucionales.

CAPITULO IV: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Capítulo IV: Propuesta de Intervención

Dada la identificación de las falencias constitucionales en el decreto supremo, una propuesta de intervención desde la perspectiva de un experto constitucionalista debería abordar varios aspectos clave para garantizar la coherencia con los principios constitucionales y el respeto de los derechos fundamentales.

4.1. Criterios materiales para mejorar el razonamiento en la elaboración de los decretos supremos sobre estado de emergencia sanitaria.

La revisión y modificación del decreto supremo requiere un enfoque integral que considere tanto los aspectos legales y constitucionales como las necesidades de la sociedad. Expertos en derecho constitucional desempeñarán un papel fundamental en este proceso, llevando a cabo un análisis detallado de cada disposición a la luz de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú. Este análisis garantizará que el decreto supremo cumpla con los estándares constitucionales y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Uno de los aspectos clave de esta revisión será evaluar la proporcionalidad de las medidas adoptadas en el decreto supremo. Es fundamental asegurarse de que las restricciones impuestas sean proporcionales a la gravedad de la situación sanitaria y estén justificadas en función del objetivo legítimo de proteger la salud pública. Esto implica considerar alternativas menos restrictivas siempre que sea posible y garantizar que las medidas sean necesarias y razonables en relación con los derechos individuales.

Además, se prestará especial atención al respeto de la separación de poderes y la distribución de competencias entre los distintos órganos del Estado. Es esencial que el decreto supremo no exceda las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo y respete la autonomía de los

poderes Legislativo y Judicial. Esto contribuirá a fortalecer el Estado de Derecho y prevenir posibles abusos de poder.

Basándonos en el "Manual de Técnica Legislativa", se propone una serie de criterios materiales para mejorar la redacción de los decretos supremos, asegurando una mayor claridad y efectividad en su implementación. La claridad es fundamental para que los decretos sean comprensibles para todos los destinatarios. Según el manual, esto se logra mediante el uso de un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos innecesarios y frases ambiguas. Los textos legislativos deben estar redactados de manera que cualquier persona con un conocimiento básico del tema pueda entender su contenido y propósito sin dificultad. La precisión en la redacción de decretos implica la selección cuidadosa de palabras y términos que reflejen con exactitud la intención del legislador. El manual recomienda definir claramente los términos técnicos y específicos dentro del decreto para evitar interpretaciones erróneas. Cada término debe ser utilizado consistentemente a lo largo del documento para mantener la coherencia.

El manual enfatiza la importancia de la coherencia interna y la unidad en los textos legislativos. Esto significa que todas las partes del decreto deben estar interrelacionadas de manera lógica y no deben existir contradicciones entre ellas. Se debe mantener un estilo uniforme en todo el documento, utilizando estructuras sintácticas similares y un formato consistente para facilitar la lectura y comprensión. La estructura del decreto debe seguir un orden lógico y sistemático. El manual sugiere que los decretos estén divididos en secciones claras y bien definidas, con títulos y subtítulos que reflejen el contenido de cada sección. Esto incluye una introducción que explique el propósito del decreto, el cuerpo del texto con las disposiciones específicas y una conclusión que resuma las principales medidas y su impacto esperado. Es esencial que los decretos incluyan definiciones precisas de los términos clave utilizados en el texto. Según el manual, la inclusión de

un glosario de términos al inicio o final del documento puede ser muy útil para asegurar que todos los lectores comprendan el significado exacto de los términos técnicos y específicos. El manual también recomienda que los decretos sean sometidos a un proceso riguroso de revisión y evaluación antes de su promulgación. Esto incluye la revisión por parte de expertos legales y técnicos para asegurar que el texto cumple con todos los requisitos formales y materiales, y que no contiene errores ni ambigüedades.

La consulta y participación ciudadana serán aspectos centrales de este proceso de revisión y modificación. La sociedad civil desempeñará un papel activo, brindando su opinión y aportando su experiencia en la formulación de políticas públicas. Se promoverá la realización de audiencias públicas, la recepción de comentarios y sugerencias, y la colaboración con organizaciones no gubernamentales y expertos en salud pública para garantizar una respuesta integral y efectiva a la emergencia sanitaria.

Asimismo, se prestará especial atención a la protección de las garantías procesales y los derechos individuales de la población afectada por las disposiciones del decreto supremo. Se garantizará el derecho a un debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a recursos judiciales efectivos para aquellos ciudadanos que se vean afectados por las medidas adoptadas.

La incorporación de cláusulas de salvaguardia es un aspecto fundamental en el proceso de revisión y modificación del decreto supremo. Estas cláusulas están diseñadas para garantizar que las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria no conduzcan a abusos de poder o a la violación de los derechos individuales de los ciudadanos.

En primer lugar, se identificarán y analizarán las posibles áreas de preocupación en el decreto supremo original que podrían plantear riesgos para los derechos individuales o conducir a

interpretaciones excesivamente amplias que podrían ser susceptibles de abuso. Estas áreas podrían incluir disposiciones que otorgan poderes discrecionales ilimitados a las autoridades, limitaciones desproporcionadas a los derechos fundamentales o la falta de mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas.

Una vez identificadas estas áreas problemáticas, se procederá a la redacción e incorporación de cláusulas de salvaguardia en el decreto supremo revisado. Estas cláusulas estarán diseñadas para establecer límites claros al ejercicio del poder estatal, asegurando que las medidas adoptadas sean proporcionadas, necesarias y respeten plenamente los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Las cláusulas de salvaguardia pueden tomar diversas formas, incluyendo disposiciones que limiten la duración temporal de las medidas adoptadas, mecanismos de supervisión independientes para monitorear su implementación y salvaguardias procesales para garantizar el debido proceso y la protección efectiva de los derechos individuales en caso de restricciones a las libertades fundamentales.

Además, se enfatizará la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación del decreto supremo, asegurando que las autoridades competentes informen regularmente al público sobre las medidas adoptadas, los criterios utilizados para su implementación y los resultados obtenidos en términos de protección de la salud pública y los derechos individuales.

El establecimiento de mecanismos de retroalimentación es esencial para asegurar que las preocupaciones y necesidades de la población sean tomadas en cuenta de manera continua durante la implementación del decreto supremo. Estos mecanismos deben facilitar un diálogo abierto y

transparente entre el gobierno y los ciudadanos, permitiendo una comunicación bidireccional que promueva la rendición de cuentas y la mejora continua de las medidas adoptadas.

En primer lugar, se establecerán canales formales de retroalimentación que permitan a los ciudadanos expresar sus preocupaciones, plantear preguntas y presentar sugerencias relacionadas con el decreto supremo. Estos canales pueden incluir líneas telefónicas de atención al ciudadano, correos electrónicos dedicados, formularios en línea y buzones de sugerencias ubicados en lugares estratégicos. Es fundamental que estos canales sean accesibles y fáciles de usar, garantizando que cualquier persona pueda participar en el proceso de retroalimentación.

Además, se organizarán reuniones periódicas entre representantes del gobierno y grupos de interés relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresas y otros actores clave. Estas reuniones proporcionarán un espacio para discutir de manera más detallada las preocupaciones específicas de cada grupo y explorar posibles soluciones colaborativas. Además, se fomentará la participación activa de la sociedad civil en la supervisión y evaluación de la implementación del decreto supremo, fortaleciendo así la legitimidad y la efectividad de las medidas adoptadas.

Por otro lado, se establecerán mecanismos para monitorear y evaluar de manera continua el impacto de las medidas adoptadas en la población y en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Esto puede incluir la realización de encuestas periódicas, la recopilación de datos epidemiológicos y socioeconómicos relevantes, y la realización de estudios de casos para analizar la efectividad de las intervenciones en diferentes contextos. Los resultados de estos monitoreos y evaluaciones se compartirán de manera transparente con la población, permitiendo una retroalimentación informada y contribuyendo a la toma de decisiones basada en evidencia.

4.2. Criterios formales para mejorar el razonamiento en la elaboración de los decretos supremos sobre estado de emergencia sanitaria.

Las consultas con expertos constitucionales desempeñan un papel crucial en el proceso de revisión y modificación del decreto supremo. Estos expertos, con su profundo conocimiento del ordenamiento jurídico y los principios constitucionales, proporcionarán una orientación sólida y fundamentada en la normativa nacional e internacional aplicable.

En primer lugar, se convocará a un panel de expertos constitucionales reconocidos en el ámbito nacional e internacional para analizar exhaustivamente el decreto supremo en cuestión. Estos expertos aportarán una variedad de perspectivas y enfoques, enriqueciendo así el proceso de revisión con su experiencia y conocimiento especializado.

Durante las consultas, se llevarán a cabo debates detallados sobre cada disposición del decreto supremo, examinando su coherencia con la Constitución Política del Perú y otros instrumentos legales relevantes. Se prestará especial atención a los principios constitucionales fundamentales, como el respeto a los derechos fundamentales, la división de poderes, la legalidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

Los expertos constitucionales también evaluarán la jurisprudencia pertinente y las mejores prácticas internacionales en situaciones de emergencia, a fin de garantizar que las medidas propuestas sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos y el Estado de Derecho.

Además de proporcionar análisis jurídicos detallados, los expertos constitucionales también podrán ofrecer recomendaciones y sugerencias para mejorar el texto del decreto supremo,

proponiendo modificaciones específicas que garanticen su conformidad con los principios constitucionales y la protección efectiva de los derechos individuales.

La transparencia y la difusión es esencial para garantizar la legitimidad y la efectividad de cualquier decreto supremo, especialmente en el contexto de una emergencia sanitaria. La transparencia implica que las acciones del gobierno sean claras, accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos, mientras que la difusión se refiere a la amplia divulgación de la información relevante sobre las medidas adoptadas.

En primer lugar, se establecerán mecanismos robustos para garantizar la transparencia en el proceso de elaboración, revisión y modificación del decreto supremo. Esto implica que el gobierno debe proporcionar información detallada sobre las razones que justifican la adopción de medidas específicas, los criterios utilizados para su implementación y los impactos esperados en términos de protección de la salud pública y los derechos individuales. Además, se promoverá la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, permitiendo que los ciudadanos expresen sus opiniones y preocupaciones antes de la adopción final de las medidas.

En cuanto a la difusión, se implementarán estrategias amplias y efectivas para garantizar que la población esté plenamente informada sobre el contenido y el alcance del decreto supremo. Esto incluirá la publicación de la versión completa del decreto en medios de comunicación oficiales y plataformas en línea, así como campañas de información dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. Además, se utilizarán canales de comunicación tradicionales y digitales para llegar a la mayor cantidad posible de personas, asegurando que incluso aquellos con acceso limitado a la tecnología puedan conocer y comprender las medidas adoptadas.

Es fundamental que la información proporcionada sea clara, precisa y fácilmente comprensible para el público en general. Se brindará especial atención a la traducción de la información a diferentes idiomas y la adaptación de los materiales informativos para personas con discapacidades visuales o auditivas, garantizando así la accesibilidad para todos los ciudadanos.

Además, se establecerán mecanismos de retroalimentación y consulta que permitan a los ciudadanos hacer preguntas, plantear inquietudes y presentar sugerencias relacionadas con el decreto supremo. Esto puede incluir líneas telefónicas de atención al ciudadano, correos electrónicos dedicados y espacios de diálogo en plataformas digitales donde las autoridades puedan responder a las preguntas de la población en tiempo real.

Otro criterio a considerar es el de la temporalidad de las medidas adoptadas en el decreto supremo, asegurando que estas sean proporcionales a la duración y gravedad de la emergencia sanitaria, y que se levanten una vez que la situación lo permita. Para garantizar esto, se implementarán los siguientes pasos:

En primer lugar, se establecerá un mecanismo de revisión periódica de las medidas contenidas en el decreto supremo, con el fin de evaluar su efectividad y necesidad continua en función de la evolución de la emergencia sanitaria. Este mecanismo estará liderado por un equipo multidisciplinario de expertos en salud pública, epidemiología, derecho constitucional y otras áreas relevantes, que analizarán de manera objetiva la situación actual y emitirán recomendaciones basadas en evidencia científica.

Además, se definirá claramente la duración temporal de cada medida contenida en el decreto supremo, estableciendo fechas límite para su implementación y revisión. Estas fechas límite estarán sujetas a ajustes en función de la evolución de la emergencia sanitaria y de las

recomendaciones emitidas por el equipo de expertos. Es importante que estas fechas límite sean comunicadas de manera clara y transparente a la población, brindando certeza sobre la duración de las medidas y promoviendo así la confianza y el cumplimiento por parte de la ciudadanía.

Por otro lado, se establecerán criterios objetivos y transparentes para determinar cuándo las condiciones de la emergencia sanitaria han mejorado lo suficiente como para levantar las medidas contenidas en el decreto supremo. Estos criterios estarán basados en indicadores epidemiológicos, capacidad del sistema de salud, y otros factores relevantes, y serán evaluados de manera regular por el equipo de expertos. Una vez que se cumplan estos criterios, se procederá a levantar gradualmente las medidas de manera coordinada y planificada, priorizando siempre la protección de la salud pública y los derechos fundamentales de la población.

4.3. Borrador o bosquejo de un Decreto Supremo sobre estado de Emergencia Sanitaria tomando en cuenta los criterios formales y materiales para su elaboración

DECRETO SUPREMO N° [Número del Decreto]

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Estado peruano reconoce la importancia de proteger la salud y el bienestar de todos los ciudadanos frente a la emergencia sanitaria provocada por [especificar la situación, por ejemplo, el brote de COVID-19];

Que, el derecho a la salud es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política del Perú, y es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para proteger este derecho en situaciones de emergencia;

Que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de declarar el estado de emergencia cuando las circunstancias lo ameriten, a fin de salvaguardar el orden interno y la seguridad ciudadana;

Que, asimismo, la Constitución establece que las medidas adoptadas durante el estado de emergencia deben respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, incluyendo el derecho a la reunión privada;

Que, es necesario emitir un decreto supremo que regule de manera adecuada las medidas a tomar durante el estado de emergencia sanitaria, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la protección de la salud pública;

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria

Se declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de [especificar la duración], a partir de la fecha de publicación del presente decreto supremo.

Artículo 2: Objetivos

El objetivo del presente decreto supremo es establecer las medidas necesarias para prevenir la propagación del [especificar la enfermedad] y proteger la salud de todos los ciudadanos peruanos.

CAPÍTULO II: MEDIDAS SANITARIAS

Artículo 3: Suspensión del Ejercicio de Derechos Constitucionales

Queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio en el contexto de reuniones privadas que no cumplan con las medidas sanitarias establecidas.

Artículo 4: Uso de Mascarillas

Se establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos y privados de acceso público, como medida preventiva para reducir el riesgo de contagio.

CAPÍTULO III: DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 5: Derecho a la Reunión Privada

5.1. Las reuniones familiares y sociales en domicilios privados estarán permitidas siempre que no excedan un número determinado de personas, definido por el Ministerio de Salud, y que se sigan estrictamente las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

5.2. Las autoridades podrán intervenir reuniones privadas únicamente si se recibe una denuncia y se confirma que se están violando las normas sanitarias establecidas. La intervención debe seguir un procedimiento gradual, comenzando por una advertencia verbal y, de ser necesario, aplicando medidas más estrictas respetando los derechos humanos.

Artículo 6: Responsabilidad Ciudadana:

Se exhorta a la población a cumplir con las medidas de prevención como el uso de mascarilla, el lavado de manos, y evitar la aglomeración de personas, especialmente en reuniones privadas.

Artículo 7: Facultades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Las intervenciones en domicilios privados deben ser realizadas por la Policía Nacional del Perú siguiendo protocolos estrictos para garantizar el respeto a los derechos humanos, utilizando la fuerza solo como último recurso y en forma proporcional a la resistencia encontrada.

Artículo 8: Derecho a la Información

El Estado garantiza el derecho a la información veraz y oportuna sobre la situación de la emergencia sanitaria, mediante campañas de información pública y el acceso a fuentes oficiales. El Estado implementará campañas de comunicación para sensibilizar a la población sobre la importancia de las medidas de aislamiento social y las consecuencias de su incumplimiento, enfocándose en promover el cumplimiento voluntario y la responsabilidad ciudadana.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9: Vigencia

El presente decreto supremo entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial "El Peruano" y tendrá una duración de [especificar la duración].

Dado en la Casa de Gobierno, en [especificar la ciudad], a los [especificar la fecha].

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

- Tras una exhaustiva revisión y análisis del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias en relación con el Derecho de Reunión Privada, se concluye que hay un déficit a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a la protección de este derecho fundamental.
- Al detallar el contenido del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias respecto al derecho de Reunión Privada mediante una matriz de análisis documental, se evidencia una falta de claridad y coherencia en las disposiciones que regulan este derecho, lo cual genera incertidumbre sobre su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales.
- La sistematización del contenido normativo, doctrinario y jurisprudencial del Derecho a Reunión Privada revela la necesidad de una interpretación constitucional más precisa y rigurosa del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias, a fin de garantizar una protección efectiva de este derecho en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
- La formulación de una interpretación constitucional formal y material del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias en relación con el derecho de Reunión Privada, mediante la aplicación de criterios doctrinarios, convencionales, jurisprudenciales y normativos, arroja resultados que señalan la necesidad de revisar y ajustar las disposiciones que afectan este derecho

fundamental para asegurar su plena conformidad con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú.

5.2. Recomendaciones

- Considerando los resultados de la investigación sobre la adecuación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias al Derecho de Reunión Privada, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de dichas disposiciones a fin de identificar posibles inconsistencias con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Esta revisión debe ser llevada a cabo por expertos constitucionalistas y jurídicos con el fin de garantizar la plena protección de este derecho fundamental.
- Dada la falta de claridad y coherencia considerados criterios formales en las disposiciones que regulan el derecho de Reunión Privada en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias, se recomienda realizar una revisión detallada de dichas disposiciones para mejorar su redacción y precisión. Asimismo, se sugiere la elaboración de guías interpretativas que aclaren el alcance y los límites de este derecho en el contexto de la normativa vigente.
- Ante la necesidad de una interpretación constitucional más precisa y rigurosa del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias en relación con el derecho de Reunión Privada, se recomienda llevar a cabo un análisis comparativo con la jurisprudencia nacional e internacional sobre este tema. Por ejemplo, en nuestro caso hemos investigado el caso español, donde a los hechos se le denomina estado de alarma y donde se ha producido un mejor control constitucional del estado de emergencia. En España, el Tribunal Constitucional

ejerció un escrutinio riguroso sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria, incluyendo restricciones al derecho de reunión privada. En contraste, en Colombia, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción, con un énfasis en la protección de los derechos fundamentales. Además, se aconseja la consulta con expertos en derechos humanos y constitucionalistas para garantizar una interpretación coherente y conforme a los estándares internacionales.

- Considerando los resultados obtenidos en la interpretación constitucional formal y material del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus normas complementarias, se recomienda realizar modificaciones sustanciales en aquellas disposiciones que afecten el derecho de Reunión Privada. Estas modificaciones deben ser realizadas de manera transparente y participativa, involucrando a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y otros actores relevantes en el proceso de revisión y elaboración de la normativa. Conforme a la propuesta de Decreto Supremo elaborada en el punto 4.3.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón Requejo, G. (2023). Precisiones al derecho de acceso a la información pública a partir del primer precedente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú. *Revista de Derecho Uninorte*, 58, 140–165. <https://doi.org/10.14482/dere.58.128.964>
- Albán Peralta, W. (2003). Estado de Emergencia y Estado de Derecho. *Derecho & Sociedad*, 21, 18–22.
- Alexy, R. (2002). *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Atienza, M. (2007). Constitución y argumentación. *Anuario de Filosofía Del Derecho*, 24, 197–228.
- Atienza Rodriguez, M. (2013). *Curso de Argumentación Jurídica*. Editorial Trotta S.A.
- Beaumont, R. (2022). *Comentarios al Nuevo Código Procesal Constitucional*. Gaceta Jurídica.
- Bechara Llanos, A. Z. (2011). Estado constitucional de derecho, principios y derechos fundamentales en Robert Alexy. *Saber, Ciencia y Libertad*, 6(2), 63–76. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2011v6n2.1778>
- Bernales Ballesteros, E. (2001). El Control Constitucional en el Perú. *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 5, 45–66.
- Carrasco, L. (2017). *Derecho Constitucional Peruano*. FFECAAT EIRL. https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/CE-Tribunal-Constitucional/files/postulantes/exp002/derecho_constitucional_peruano1.pdf

Castillo, L. (2022). *Las Fuentes Constitucionales sobre Derechos Fundamentales*. Poder Judicial del Perú.

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/695a7f804799c825ab5dbb2a87435a1f/web_Las+fuentes+constitucionales+-+Luis+Castillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=695a7f804799c825ab5dbb2a87435a1f

Castro Hernández, M. A. (2021). Control constitucional del Estado de excepción y los decretos expedidos en Colombia durante el año 2020 con ocurrencia de la covid-19 y la vulneración de derechos fundamentales. *Revista Jurídica Piélagus*, 20(1).

<https://doi.org/10.25054/16576799.3209>

Cifuentes Muñoz, E. (2002). Los estados de excepción constitucional en Colombia. *Ius et Praxis*, 8(1). <https://doi.org/10.4067/S0718-00122002000100009>

Corona Lisboa, J. L. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*, 69–76.

<https://doi.org/10.15178/va.2018.144.69-76>

Espinoza, A. (2017). El derecho de reunión y manifestación. *Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ*, 11, 1055–1134.

Fernández Bedoya, V. H. (2020). Tipos de justificación en la investigación científica. *Espíritu Emprendedor TES*, 4(3), 65–76. <https://doi.org/10.33970/eetes.v4.n3.2020.207>

Ferrero Rebagliati, R. (1969). Garantías constitucionales. *Derecho PUCP*, 27, 35–41. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.196901.004>

- Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- García, M., & Uprimny, R. (2021). *¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepción*. DeJusticia. <https://www.dejusticia.org/publication/el-control-judicial-de-los-estados-de-excepcion/>
- García, V. (2010). *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*. Editorial Adrus S.R.L. . <https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Seminarios/Dialogo-Electoral/dialogo-electoral-25-04-2018.pdf>
- Gargarella, R., & Niembro, R. (2016). *Constitucionalismo Progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. <https://www.iidh.ed.cr/images/Publicaciones/Justicia/Constitucionalismo%20progresista%20retos%20y%20perspectivas.pdf>
- Gargarella, R., & Roa Roa, J. (2020). Diálogo democrático y emergencia en América Latina (Democratic Dialogue and Emergency in Latin America). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3623812>
- Garrida, E. (2018). El derecho de reunión Contemplación jurídica y elementos de restricción desde el Tribunal Europeo de derechos humanos y el sistema español de relaciones laborales. *Temas Laborales Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social*, 281–315. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6869656>
- Gonzales Loli, M., Carrasco Salazar, C., & Sanjinez Salazar, J. V. (2020). Limitación de los derechos fundamentales en el estado de emergencia por la pandemia de la covid-19. *Cátedra Villarreal*, 8(1). <https://doi.org/10.24039/cv202081760>

- Mila Maldonado, F. L., Yáñez Yáñez, K. A., & Mantilla Salgado, J. D. (2021). Una aproximación a la metodología de la investigación jurídica. *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica Del Derecho*, 8(2), 81. <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2021.60341>
- Orozco Alvarado, J. C., & Díaz Pérez, A. A. (2018). ¿Cómo redactar los antecedentes de una investigación cualitativa? *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 1(2), 66–82. <https://doi.org/10.30698/recsp.v1i2.13>
- Ospina, J. C. (2021). ¿No hay derechos constitucionales absolutos? IberICONnectEl Blog de la Revista Internacional de Derecho Constitucional en españolIberICONnect. [https://www.ibericonnect.blog/2021/11/no-hay-derechos-constitucionales-absolutos/https://www.ibericonnect.blog/2021/11/no-hay-derechos-constitucionales-absolutos/](https://www.ibericonnect.blog/2021/11/no-hay-derechos-constitucionales-absolutos/)
- Pachas Serrano, M. A. (2016). *El control jurisdiccional de la declaración de los regímenes de excepción en la Constitución de 1993*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Perez Sanchez, G. (2014). Evolución del estado y evolución de derechos. *Civitas Europa*, N° 33(2), 205–221. <https://doi.org/10.3917/civit.033.0205>
- Recuerda Girela, M. Á. (2022). Las garantías constitucionales en los estados de emergencia (SSTC 148/2021, 168/2021, 183/2021). *Revista Española de Derecho Constitucional*, 125, 283–325. <https://doi.org/10.18042/cepc/redc.125.09>
- Rubio, M., & Arce, E. (2017). *Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano*. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://doi.org/10.18800/9786123172398>

Ruiz Resa, J. D. (2020). Las hipótesis en la investigación científico-jurídica. *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE Nueva Época)*, 22, 135–160.

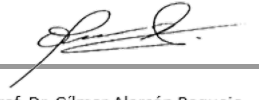
<https://doi.org/10.24310/REJIE.2020.v0i22.7902>

Solozábal Echavarría, J. J. (1981). Sobre el principio de la separación de poderes. *Revista de Estudios Políticos*, 24, 215–234.

Tello Ortiz de Zevallos, E. (2023). Delimitación del control judicial, convencional y político ante la vulneración de derechos humanos en los estados de emergencia. *Ius et Praxis*, 056, 81–112. <https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2023.n056.6007>

Tórtora Aravena, H. (2010). Las limitaciones a los Derechos Fundamentales. *Estudios Constitucionales*, 8(2), 167–200. <https://doi.org/10.4067/S0718-52002010000200007>

DERECHO DE REUNIÓN PRIVADA, CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y NORMAS COMPLEMENTARIAS



INFORME DE ORIGINALIDAD

Prof. Dr. Gilmer Alarcón Requejo

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

12%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

1%

2

qdoc.tips

Fuente de Internet

1%

3

cms.law

Fuente de Internet

1%

4

revistas.uexternado.edu.co

Fuente de Internet

1%

5

idoc.pub

Fuente de Internet

<1%

6

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

7

archive.org

Fuente de Internet

<1%

8

corte-constitucional.vlex.com.co

Fuente de Internet


<1%



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

9	Submitted to Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra PUCMM Trabajo del estudiante	<1 %
10	doku.pub Fuente de Internet	<1 %
11	jurinfo.jep.gov.co Fuente de Internet	<1 %
12	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
14	actualidadlaboral.com Fuente de Internet	<1 %
15	cdn.www.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
16	repositorio.uasb.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
17	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
18	www.informatica-juridica.com Fuente de Internet	<1 %
19	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
20	repositorio.unasam.edu.pe	



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

<1 %

21

Submitted to Universidad Tecnológica
Indoamerica

Trabajo del estudiante

<1 %

22

es.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

23

www.lacamara.pe

Fuente de Internet

<1 %

24

www.researchgate.net

Fuente de Internet

<1 %

25

idus.us.es

Fuente de Internet

<1 %

26

tesis.pucp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

27

Submitted to Universidad Nacional de
Colombia

Trabajo del estudiante

<1 %

28

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo

Trabajo del estudiante

<1 %

29

transformacion.policia.gov.co

Fuente de Internet

<1 %

30

unsworks.unsw.edu.au

Fuente de Internet

<1 %

DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

31 Submitted to Universidad Politecnica Salesiana del Ecuador <1 %
Trabajo del estudiante

32 Submitted to Universidad Catolica De Cuenca <1 %
Trabajo del estudiante

33 perso.univ-lyon2.fr <1 %
Fuente de Internet

34 Submitted to Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador <1 %
Trabajo del estudiante

35 revistas.ulima.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

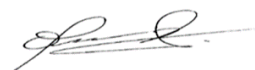
36 cladem.org <1 %
Fuente de Internet

37 www.slideshare.net <1 %
Fuente de Internet

38 www.cgconstitucional.com <1 %
Fuente de Internet

39 Jurado, Eder Juarez. "Constitucionalizacion y control constitucional del arbitraje en el estado constitucional", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021 <1 %
Publicación

40 Submitted to Prepanet
Trabajo del estudiante



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

<1 %

41

www.ombudsman.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

42

coe.int

Fuente de Internet

<1 %

43

www.icnl.org

Fuente de Internet

<1 %

44

ESPECIALISTAS AMBIENTALES S.A.C.. "EIA del Proyecto de Instalación de la Fábrica de Clinker y Cemento-IGA0009653", R.V.M. N° 003-2015-PRODUCE-DVMYPE-I, 2020

Publicación

<1 %

45

www.southcentre.int

Fuente de Internet

<1 %

46

www.tc.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

47

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 16 (2000)", Brill, 2004

Publicación

<1 %

48

María José Vázquez Villavicencio, Andra Liseth Durán Ramírez. "Del Femicidio al Feminicidio: Implicaciones Jurídico-Penales en la Tipificación del Delito Contra La Mujer En Ecuador", Religación, 2024

<1 %



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

49

Submitted to Universidad Europea de Madrid

Trabajo del estudiante

<1 %

50

docslib.org

Fuente de Internet

<1 %

51

www.academiaidh.org.mx

Fuente de Internet

<1 %

52

Vasquez Torres, Elena Rosa. "Alcances y limites actuales del derecho fundamental de asociacion en el Peru.", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021

Publicación

<1 %

53

edoc.pub

Fuente de Internet

<1 %

54

repositorio.unap.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

55

www.opico.org

Fuente de Internet

<1 %

56

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME II)", Brill, 2023

Publicación

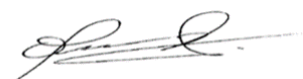
<1 %

57

issuu.com

Fuente de Internet

<1 %



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

58	www.hivjustice.net Fuente de Internet	<1 %
59	www.planv.com.ec Fuente de Internet	<1 %
60	yuneux.com Fuente de Internet	<1 %
61	safetya.co Fuente de Internet	<1 %
62	e-archivo.uc3m.es Fuente de Internet	<1 %
63	www.cepal.cl Fuente de Internet	<1 %
64	www.estudiosconstitucionales.com Fuente de Internet	<1 %
65	www1.umn.edu Fuente de Internet	<1 %
66	Submitted to American University Trabajo del estudiante	<1 %
67	repositorio.ucss.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
68	Blume Rocha, Aldo. "El principio de interpretacion conforme a la constitucion como criterio hermeneutico del Tribunal Constitucional.", Pontificia Universidad	<1 %

Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021

Publicación

69

Submitted to Corporación Universitaria
Iberoamericana

Trabajo del estudiante

<1 %

70

Submitted to Universidad Catolica de Avila

Trabajo del estudiante

<1 %

71

produccioncientificaluz.org

Fuente de Internet

<1 %

72

themisdata.net

Fuente de Internet

<1 %

73

www.clubensayos.com

Fuente de Internet

<1 %

74

www.universia.net.co

Fuente de Internet

<1 %

75

zenodo.org

Fuente de Internet

<1 %

76

Submitted to Universidad Carlos III de Madrid
- EUR

Trabajo del estudiante

<1 %

77

dokumen.pub

Fuente de Internet

<1 %

78

Submitted to esap

Trabajo del estudiante

<1 %



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

79 lpderecho.pe <1 %
Fuente de Internet

80 www.dclm.es <1 %
Fuente de Internet

81 Mariela Morales Antoniazzi. "El mandato transformador del Sistema Interamericano como respuesta a la pandemia a la luz del test democráticoThe Inter-American System's transformative mandate as a response to the pandemic in light of the democratic test", International Journal of Constitutional Law, 2021 <1 %
Publicación

82 Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola <1 %
Trabajo del estudiante

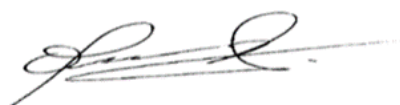
83 e-spacio.uned.es <1 %
Fuente de Internet

84 repositorio.upagu.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

85 www.dspace.uce.edu.ec <1 %
Fuente de Internet

86 Submitted to Universidad Anahuac México Sur <1 %
Trabajo del estudiante

uach.mx



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

87

Fuente de Internet

<1 %

88

www.scoop.it

Fuente de Internet

<1 %

89

neanias-space.openaire.eu

Fuente de Internet

<1 %

90

repositorio.une.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

91

Submitted to uncedu

Trabajo del estudiante

<1 %

92

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante

<1 %

93

Submitted to Universidad Internacional de la Rioja

Trabajo del estudiante

<1 %

94

Submitted to Universidad Rafael Landívar

Trabajo del estudiante

<1 %

95

as.com

Fuente de Internet

<1 %

96

informativo.bcn.cl

Fuente de Internet

<1 %

97

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

98

www.fojas0.com

Fuente de Internet



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

<1 %

99

asocfuncionpublica.blogspot.com

Fuente de Internet

<1 %

100

doi.org

Fuente de Internet

<1 %

101

recyt.fecyt.es

Fuente de Internet

<1 %

102

revistas.pucp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

103

www.ented.net

Fuente de Internet

<1 %

104

www.oecd-ilibrary.org

Fuente de Internet

<1 %

105

Garcia, Carolina Gomez | Pareja, Itala Sabrina Teran | Vicuna, Juan Moises Ticona | Godinez, Rodrigo Alonso Zevallos. "Propuesta de Aplicativo Movil para la Venta de Productos del Emporio Comercial de Gamarra.", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021

Publicación

<1 %

106

andrescusiarrredondo.files.wordpress.com

Fuente de Internet

<1 %

107

bibliotecas.unsa.edu.pe

Fuente de Internet

DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

<1 %

108 cybertesis.unmsm.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

109 elkarri.org
Fuente de Internet

<1 %

110 isavbi.wordpress.com
Fuente de Internet

<1 %

111 jalayo.blogspot.com
Fuente de Internet

<1 %

112 media.timetoast.com
Fuente de Internet

<1 %

113 observatorio.campus-virtual.org
Fuente de Internet

<1 %

114 repositorio.uchile.cl
Fuente de Internet

<1 %

115 repositorio.unprg.edu.pe:8080
Fuente de Internet

<1 %

116 repositorio.unsaac.edu.pe
Fuente de Internet

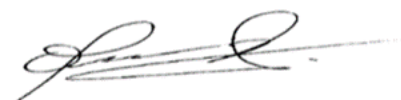
<1 %

117 www.coursehero.com
Fuente de Internet

<1 %

118 www.oas.org
Fuente de Internet

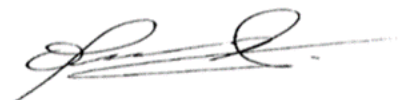
<1 %



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

119	www.secretariasenado.gov.co Fuente de Internet	<1 %
120	www.unhchr.ch Fuente de Internet	<1 %
121	www.voltairenet.org Fuente de Internet	<1 %
122	www2.dfid.gov.uk Fuente de Internet	<1 %
123	busquedas.elperuano.pe Fuente de Internet	<1 %
124	libertysecurity.org Fuente de Internet	<1 %
125	normograma.mintic.gov.co Fuente de Internet	<1 %
126	tr-ex.me Fuente de Internet	<1 %
127	www.eduso.net Fuente de Internet	<1 %
128	www.grafiati.com Fuente de Internet	<1 %
129	www.hchr.org.co Fuente de Internet	<1 %
130	www.iccat.int Fuente de Internet	<1 %



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

131

www.polodelconocimiento.com

Fuente de Internet

<1 %

132

Lenin Elvis Vilca Vilca, Miguel Ángel Vilca Vilca.
"Aproximación Teórica sobre Derechos
Humanos: Fundamentos para su abordaje",
ACVENISPROH Académico, 2023

Publicación

<1 %

133

Submitted to Universidad de Cádiz

Trabajo del estudiante

<1 %

134

Submitted to Universidad del Istmo de
Panamá

Trabajo del estudiante

<1 %

135

repositorio.uncp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

136

repositorio.unjbg.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

137

www.jhpiego.net

Fuente de Internet

<1 %

138

www.poderjudicial.es

Fuente de Internet

<1 %

139

www.quironprevencion.com

Fuente de Internet

<1 %

140

Carina Barbosa Gouvêa, Pedro H. Villas Bôas
Castelo Branco. "Populist Governance in

<1 %

DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

-
- | | | |
|------------|---|----------------|
| 141 | María Alejandra Castro Hernández. "Control constitucional del Estado de excepción y los decretos expedidos en Colombia durante el año 2020 con ocurrencia del Covid-19 y la vulneración de derechos fundamentales", Revista Jurídica Piélagus, 2021
Publicación | <1 % |
| <hr/> | | |
| 142 | Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru
Trabajo del estudiante | <1 % |
| <hr/> | | |
| 143 | Submitted to Universidad de Alcalá
Trabajo del estudiante | <1 % |
| <hr/> | | |
| 144 | www.bbc.com
Fuente de Internet | <1 % |
| <hr/> | | |
| 145 | www.defensoria.gov.ve
Fuente de Internet | <1 % |
| <hr/> | | |
| 146 | www.paisatgehistoric.udl.cat
Fuente de Internet | <1 % |
| <hr/> | | |
| 147 | www.yumpu.com
Fuente de Internet | <1 % |
-



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

DERECHO DE REUNIÓN PRIVADA, CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

INFORME DE GRADEMARK

NOTA FINAL

COMENTARIOS GENERALES

/0

PÁGINA 1

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 10

PÁGINA 11

PÁGINA 12

PÁGINA 13

PÁGINA 14

PÁGINA 15

PÁGINA 16

PÁGINA 17

PÁGINA 18

PÁGINA 19



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

PÁGINA 20

PÁGINA 21

PÁGINA 22

PÁGINA 23

PÁGINA 24

PÁGINA 25

PÁGINA 26

PÁGINA 27

PÁGINA 28

PÁGINA 29

PÁGINA 30

PÁGINA 31

PÁGINA 32

PÁGINA 33

PÁGINA 34

PÁGINA 35

PÁGINA 36

PÁGINA 37

PÁGINA 38

PÁGINA 39

PÁGINA 40

PÁGINA 41

PÁGINA 42

PÁGINA 43

PÁGINA 44

PÁGINA 45



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

PÁGINA 46

PÁGINA 47

PÁGINA 48

PÁGINA 49

PÁGINA 50

PÁGINA 51

PÁGINA 52

PÁGINA 53

PÁGINA 54

PÁGINA 55

PÁGINA 56

PÁGINA 57

PÁGINA 58

PÁGINA 59

PÁGINA 60

PÁGINA 61

PÁGINA 62

PÁGINA 63

PÁGINA 64

PÁGINA 65

PÁGINA 66

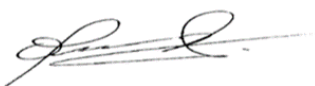
PÁGINA 67

PÁGINA 68

PÁGINA 69

PÁGINA 70

PÁGINA 71



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

PÁGINA 72

PÁGINA 73

PÁGINA 74

PÁGINA 75

PÁGINA 76

PÁGINA 77

PÁGINA 78

PÁGINA 79

PÁGINA 80

PÁGINA 81

PÁGINA 82

PÁGINA 83

PÁGINA 84

PÁGINA 85

PÁGINA 86

PÁGINA 87

PÁGINA 88

PÁGINA 89

PÁGINA 90

PÁGINA 91

PÁGINA 92

PÁGINA 93

PÁGINA 94

PÁGINA 95

PÁGINA 96

PÁGINA 97



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

PÁGINA 98

PÁGINA 99

PÁGINA 100

PÁGINA 101

PÁGINA 102

PÁGINA 103

PÁGINA 104

PÁGINA 105

PÁGINA 106

PÁGINA 107

PÁGINA 108

PÁGINA 109

PÁGINA 110

PÁGINA 111

PÁGINA 112

PÁGINA 113

PÁGINA 114

PÁGINA 115

PÁGINA 116

PÁGINA 117

PÁGINA 118

PÁGINA 119

PÁGINA 120

PÁGINA 121

PÁGINA 122

PÁGINA 123



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR

PÁGINA 124

PÁGINA 125

PÁGINA 126

PÁGINA 127

PÁGINA 128

PÁGINA 129

PÁGINA 130

PÁGINA 131

PÁGINA 132

PÁGINA 133

PÁGINA 134

PÁGINA 135

PÁGINA 136

PÁGINA 137

PÁGINA 138

PÁGINA 139

PÁGINA 140



DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

ASESOR





Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Jose Antonio Díaz Muro
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: DERECHO DE REUNIÓN PRIVADA, CONSTITUCIONALIDAD FO...
Nombre del archivo: 090824InformeTesis_JOSE_ANTONIO_DIAZ_MURO.docx
Tamaño del archivo: 331.44K
Total páginas: 140
Total de palabras: 32,828
Total de caracteres: 190,923
Fecha de entrega: 09-ago.-2024 01:45p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 2429651257



"UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO"

ESCUELA DE POSTGRADO

**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL**

**DERECHO DE REUNIÓN PRIVADA, CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y
MATERIAL DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y NORMAS
COMPLEMENTARIAS**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL**

AUTOR

DÍAZ MURO, JOSE ANTONIO

ASESOR

DR. ALARCÓN REQUEJO, GILMER

LAMBAYEQUE, 2024

Prof. Dr. Gilmer Alarcón Requejo